

SEÑOR
JUEZ CONSTITUCIONAL

traslado

1

REF ACCION DE TUTELA
ACCIONANTE: MIGUEL VICENTE MARTINEZ PEREZ

ACCIONADO: AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO- OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCE –SUCRE e INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

MIGUEL VICENTE MARTINEZ PEREZ, mayor de edad, vecino y residente en esta localidad, actuó como ciudadano en ejercicio e identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma, manifiesto que mediante el presente escrito solicito **AMPARO CONSTITUCIONAL DE TUTELA** a los siguientes derechos Constitucionales Fundamentales, **A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA, CONFIANZA LEGITIMA Y LA PROPIEDAD PRIVADA** (art 13, 29, 51,58, 64 Y 93 de la C.P.), que vienen siendo vulnerados por las entidades : **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS Y SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO- OFICINA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SINCE –SUCRE e INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI**.

I- LEGITIMACIÓN EN CAUSA ACTIVA

En cuanto al interés legítimo para actuar se fundamenta soy propietario de un predio denominado “El Charco”, ubicado en la jurisdicción del municipio de San Benito Abad-Sucre identificado con FMI No 347- 14140 (ver folio 108 y 109), que se encuentran dentro en los títulos de la comunidad de propietarios de San Juan Bautista de Zispataca, sin embargo la Oficina de instrumentos Públicos del Circulo de Sincé se niega a migrar la escritura de venta No 15 de mayo 7 año 1847, del antiguo sistema de libros al sistema de folio único real creado por el decreto 960 de 1970, no obstante la orden de la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional mediante Auto 040 de 2017, de seguimiento de la Tutela 488 de 2014, que su numeral 2 ordena “incorporar al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia destinada a lograr la migración de toda la información existente en el antiguo sistema registral”.

II- TERCEROS VINCULADOS:

- 1- **SALA QUINTA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**, con el objeto de establecer si las entidades accionadas se les ha concedido prórroga para el cumplimiento del auto de 040 de 2017, de seguimiento de la Sentencia T 488-2014.

VINCULACION DE TERCEROS NO ALTERA COMPETENCIAI Auto 104/13

“Analizada la situación planteada por los despachos involucrados, esta corporación aclara que en diversos pronunciamientos, la Corte Constitucional se ha resistido a aceptar la conducta de los funcionarios judiciales que declaran su incompetencia para conocer de una acción de tutela que les corresponde por reparto – de acuerdo con las reglas que rigen dicho trámite administrativo – por considerar que es necesaria la vinculación de una entidad contra la cual no se dirigió la demanda. Sobre el tema, esta Corporación ha sostenido que la modificación o inclusión de las entidades demandadas, no altera la competencia radicada en un despacho judicial. Al respecto, en el Auto 035 de 2004 se expresó lo siguiente:

Se plantea entonces la cuestión de determinar si cuando del acervo probatorio surge la necesidad de vincular a una entidad de orden superior (nacional, por ejemplo), el Juez que adelanta el proceso debe seguir conociéndolo o si debe remitirlo a los despachos judiciales competentes, en virtud de Decreto 1382 de 2000. Esta cuestión ya ha sido resuelta por la Corte en casos similares. Por ejemplo en auto de febrero 17 de 2004 (ICC-771), la Sala Plena de esta Corte consideró lo siguiente”,

2- CORPORACIÓN MUSEO HISTÓRICO DE CARTAGENA DE INDIAS ARCHIVO HISTORICO PALACIO DE LA INQUISICIÓN, con el objeto se sirva certificar si dentro de sus archivos se encuentra Escritura Pública N° 15 de 7 de Mayo de 1847, Notaria Primera de Cartagena. Tomo N° 2, Folios N°: 58 a 64, Consta de Treinta (30) Páginas y si la transcripción oficial anexa fue efectuada o no por el técnico **ANIBAL A FULLEDA OLMOS**.

3- PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, se vincule al ente de control para de cumplimiento del numeral 7 de auto 040 de 2017, en relación a la queja disciplinaria radicada bajo el numero E-2017-826665 y sea incluida en el informe trimestral que envía a la **SALA QUINTA DE REVISIÓN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL**, encargada del seguimiento de la Sentencia T 488 de 2014.

4- TERCEROS INDETERMINADOS, solicito respetuosamente el emplazamiento por un medio masivo de comunicación a los terceros indeterminados, por un diario, como el **MERIDIANO DE SUCRE**, diario de amplia circulación en el lugar donde se encuentran la mayoría de los ocupantes, 'poseedores y/propietarios.

Auto 344/06

“ACCION DE TUTELA-Notificación de providencias a terceros con interés legítimo

Si bien no existe una norma expresa que consagre la obligación de notificar las providencias de tutela a los terceros con interés legítimo, tal trámite judicial es aplicable al proceso de tutela en virtud de: a) El artículo 29 de la Constitución Política establece que El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. b) La posibilidad de que, según el artículo 13, inciso final y 16 del Decreto 2591 de 1991, los terceros con interés legítimo intervengan como coadyuvantes o como partes. c) Los principios de oficiosidad e informalidad que rigen la acción de tutela, que llevan al juez a proteger el derecho al debido proceso de partes y terceros cuando se evidencie una posible vulneración. d). El Art. 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procesos de tutela en virtud de la disposición contenida en el Art. 4º del Decreto 306 de 1992, que contempla que el proceso es nulo “cuando no se practica en legal forma la notificación a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena (...).”

III- HECHOS

- 1- El día septiembre 26 de 2017, se solicitó mediante escrito a la **ORIP** del Circulo de Sincé-Sucre (ver folios 24 al 37), la migración de la escritura de venta No 15 de mayo 7 año 1847, del antiguo sistema de libros al sistema de folio único real se anexó copia de la escritura y de la transcripción oficial efectuada un total de 44 folios anexos.
- 2- En repuesta del día 27 de septiembre de 2017(ver folio 38), la señora Registradora de instrumento Público del Circulo de Sincé aduce que la escritura aportada es ilegible y que no aporta datos registrales lo cual es falso puesto que en el escrito /ver folio 24), y en la transcripción oficial efectuada en el archivo histórico de Cartagena de Indias, por el técnico **ANIBAL A FULLEDA OLMOS**, menciona claramente que se encuentra en el tomo No 2, folios 58 a 64 de la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847(ver folio 46)
- 3- También señala la Registradora que en cuanto el mencionado predio (el Hato San Juan Bautista de Zispataca. Cuyos linderos se especifican en la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847) se encuentran colindantes con ciénagas ríos o playones, quebradas y playas según la ley de baldíos artículo 57 de 1579 de 2012. (ver folio 38).
- 4- Lo anterior es una respuesta ambigua e incorrecta interpretación del artículo señalado por la registradora pues este señala que:

“Apertura de matrícula inmobiliaria de bienes baldíos. Ejecutoriado el acto administrativo proferido por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), o quien haga sus veces, procederá la apertura de la matrícula inmobiliaria que identifique un predio baldío a nombre de la Nación - Incoder, o quien haga sus veces.

En el caso en que dichos bienes baldíos, se encuentren ubicados dentro de las áreas que conforman el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se procederá con fundamento en el acto administrativo proferido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible o quien haga sus veces a la apertura de la matrícula inmobiliaria a nombre de la Nación - Parques Nacionales Naturales de Colombia. En este último caso, y atendiendo a las normas que regulan el derecho de dominio en dichas áreas protegidas, Parques Nacionales Naturales de Colombia deberá adelantar este trámite para todos los bienes ubicados al interior de estas áreas, **DEJANDO A SALVO AQUELLOS QUE CUENTEN CON TÍTULOS CONSTITUTIVOS DE DERECHO DE DOMINIO CONFORME A LAS LEYES AGRARIAS Y QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO INMOBILIARIO.**

En caso de que se encuentren debidamente registrados títulos constitutivos de derecho de dominio conforme a las leyes agrarias, dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible **DEBERÁ SOLICITAR LA INSCRIPCIÓN DE LA LIMITACIÓN DE DOMINIO EN LA MATRÍCULA INMOBILIARIA DE CADA PREDIO.**

Parágrafo. La apertura del folio de matrícula, así como las inscripciones a que haya lugar se harán de conformidad con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para tal fin”

- 4
- 5- La registradora hace una interpretación errónea de la norma puesto que en el parte subrayado se indica que:

“ DEJANDO A SALVO AQUELLOS QUE CUENTEN CON TÍTULOS CONSTITUTIVOS DE DERECHO DE DOMINIO CONFORME A LAS LEYES AGRARIAS Y QUE SE ENCUENTREN DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL REGISTRO INMOBILIARIO.”

- 6- Cabe señalar que la Escritura de venta del año 1847, que otorga María Josefa Torres Hoyos al señor Antonio Rodríguez de Torres del Hato de Juan Bautista de Zispataca, que hacia parte según el título de propiedad de la parroquia de San Benito Abad esta escritura se encuentra en archivo histórico de la ciudad de Cartagena de Indias Palacio de la inquisición Protocolo Quince (15), Tomo 2 folios 58r-64-(65/72) se encuentra debidamente registrada en el antiguo sistema de libros anterior al sistema único de folio real del decreto 960 de 1970 y que muchos títulos antiguos no han sido migrados al sistema de registro actual.
- 7- Sorprende la disparidad de criterio de la señora Registradora en cuanto ella misma habría inscrito en la anotación 10, sentencia de pertenencia de fecha 24 de octubre de 2014, en el FMI No 347-185 (ver folio 106 y 107), de un predio denominado “Caño lindo” y el “Porvenir”, ubicados en la Jurisdicción de San Benito Abad- Sucre, que es colindante con el caño Pedro miguel hoy el Rio san Jorge, donde confluyen el “Brazo del Pimiento” y la Ciénaga de Guartinajas”, lugar que coincide con parte de los linderos de la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847.(ver en el folio 47 en la transcripción de la Escritura)
- 8- La anterior situación de inseguridad jurídica, es el resultado como bien lo ha expresado la Corte Constitucional en la Sentencia T 488-2014, donde se refiere a esta problemática que:

“En efecto, la falta de información fidedigna y actualizada de los bienes de la nación es una falencia reconocida por el Incoder quien nuevamente sostuvo ante esta Corporación que “no cuenta con un inventario de bienes baldíos de la Nación” pese a haber transcurrido 20 años desde la promulgación de la Ley 160 de 1994. Esta deficiencia administrativa, a su vez, **CONTRIBUYE AL FENÓMENO – HISTÓRICO PERO AÚN MUY VIGENTE-** de la concentración excesiva de tierras, en tanto la falta de claridad y certeza sobre la naturaleza jurídica de los terrenos permite que estos sean adjudicados irregularmente mediante procedimientos judiciales ordinarios (declaración de pertenencia), en los que no se califica adecuadamente el perfil de los sujetos beneficiarios ni los límites de extensión del predio (en Unidades Agrícolas Familiares -UAF-). Con ello, se pretermiten los objetivos finales de la reforma agraria: acceso progresivo a la propiedad a los trabajadores campesinos y desarrollo rural”.

- 9- Posterior a la Sentencia de Tutela 488 de 2014, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional ha emitido los autos 222 de 2016 y el 040 de 2017, donde se evidencia el anterior estado de cosas aún subsiste y que los avances esta materia son mínimos.
- 10-Ahora bien la misma Agencia de Tierras, el auto 040 de 2017 de seguimiento de la tutela 488 de 2014. Identificó el siguiente cuello de botella:

“La ANT expresó su preocupación por la falta de información primaria necesaria para adelantar el Plan Nacional de Clarificación. Sobre el particular expuso”:

“De otra parte, verificadas por la Agencia las bases de datos en formato Excel reportadas por la SNR se advierte que contienen información básica de los predios sin precisar su ubicación georreferenciada y sin verificar si la misma fue cotejada con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, así mismo, tal información sólo ha sido remitida mediante bases de datos, razón por la cual para el adelantamiento de un procedimiento de clarificación de la propiedad e incluso para la apertura de folios de matrícula inmobiliaria para predios sin antecedente registral previsto en el artículo 57 del Estatuto Registral Ley 1579 de 2012 y reglamentado por el Decreto 1858 de 2015, se requiere contar con el original del folio de matrícula inmobiliaria, acompañado de las copias de las escrituras públicas, providencias judiciales o demás documentos que dieron lugar a las anotaciones realizadas en el registro, además de requerir, como lo afirma la Superintendencia en su informe, la verificación de los folios relacionados en cada folio entregado. LA GEORREFERENCIACIÓN DE LOS PREDIOS REALIZADA POR EL IGAC CON EL PLANO CORRESPONDIENTE Y EL ADELANTAMIENTO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DEL INCODER EN EL QUE SE GARANTICE EL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA DE LOS TERCEROS QUE PUEDAN TENER INTERÉS EN EL PROCESO”.

11-De acuerdo a la información contenida en el sitio web <http://larazon.co/2017/10/agencia-nacional-de-tierras-evacuara-140-mil-procesos-heredados-de-incoder-en-cordoba-y-sucre/>.

“De acuerdo a las declaraciones del asesor líder de la Agencia Nacional de Tierras para el Departamento de Córdoba, Sucre y Mojana, Arturo Zea Solano, esta institución ha adelantado estrategias para la legalización de tierras en la región, para que todos los campesinos que durante años han ocupado esos predios puedan obtener los títulos que les acredite como propietarios.

En la actualidad la Agencia se encuentra actuando para la descongestión de viejos procesos que se encontraban represados durante dos años por la liquidación de Incoder y la posterior creación de la agencia.

Se busca con el trabajo topográfico, las visitas a los predios y las encuestas que adelantan el personal de la agencia *“podamos despedir las resoluciones respectivas para la legalización de 140 mil casos heredados del antiguo Incoder”*. Zea indicó que *“se aspira que para los meses que restan del 2017 y el año 2018 se puedan lograr unas metas específicas que se podrían establecer como victorias tempranas”*.

12-En relación con estos 140.000, procesos heredados del INCODER, surge varias preocupaciones ¿cuántos de ellos carecen de información primaria que permita **ADELANTAR UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DE LA ANT, EN EL QUE SE GARANTICE EL DERECHO DE AUDIENCIA O DE DEFENSA DE LOS TERCEROS QUE PUEDAN TENER INTERÉS EN EL PROCESO”.** ?

13-En el caso del Sucre, en la sub región del San Jorge, en el Municipio de San Benito abad, se conoce que hay varios procesos administrativos de deslinde donde el antiguo INCODER, ordeno presuntamente apertura en la ORIP del Circulo de Sincé matrículas paralelas pues muchos de estos predios poseen antecedentes registrales y catastrales, al crear un folio alterno los particulares se quedan sin la posibilidad de defenderse dentro de las actuaciones administrativas, en el sector conozco la situación del

deslinde de "Caño Palomo", como también la del Complejo Cenagoso de "Machado" entre otros.

- 14-En el Departamento de Córdoba, se conoce por ejemplo el caso las ciénagas Amanzaguapos, Caño Viloría y El Dividivi, donde el antiguo INCODER, donde funcionarios presuntamente habrían "falsificado planos" según versiones de prensa.

<http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14387216>.

"La Policía y la Fiscalía dicen que Lozano, en calidad de subgerente nacional de tierras rurales del Incoder, avaló la expedición de certificados de inspección que señalaban que en el predio de Bula Bula no estaban las ciénagas Amanzaguapos, Caño Viloría y El Dividivi, ni el río San Marcos".

- 15-En caso de la Hacienda Arroyo Grande zona norte de Cartagena cuya clarificación fue ordenada por la Corte Constitucional mediante Sentencia de tutela 901 de 2016, donde el máximo tribunal Constitucional dejó por fuera importantes evidencias historias en el cual demostrarían que el Partido de Tierra Adentro, no está Vinculado estancias esclavistas, sino a haciendas de labranza de mestizos libres que pagaban arriendos o "terrajés" al dueño de las tierras de Santa catalina de Alejandría ver documentos ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN ver POBLACIONES-VAR:SC.46,3,D.20,, CO.AGN.SC.37.13.94.

- 16- Los anteriores tres puntos es para ilustrar, sin que se actualicen totalmente los sistemas de informacion de la **SNR y del IGAC** no se para llevar a cabo el **Plan Nacional de Clarificación** y que esta labor requiere la actuación conjunta de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la tutela 488 de 2014, situación que no sido posible por la desidia de las entidades accionadas.

- 17-El auto 040 de 2017, ordeno a las entidades que conforman la mesa interinstitucional cumplir con lo siguiente:

PRIMERO.- Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte días (20) contados a partir de la notificación de esta providencia incorporen al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia destinada a lograr la depuración, clasificación y digitalización tanto del archivo histórico del Incoder como de los documentos y resoluciones de titulación que reposan en el Archivo General de la Nación. Una vez finalizada dicha tarea deberán proceder a su inmediato registro.

Para ello deberán precisar el número de funcionarios o contratistas que se destinarán exclusivamente a adelantar la tarea encomendada por esta Corporación, al igual que las metas detalladas mes a mes en lo que respecta al avance esperado, hasta lograr la depuración de todos los archivos. Se aclarará que la depuración, clasificación y digitalización tanto el archivo histórico del Incoder como de los documentos de titulación que reposan en el Archivo General de la Nación, no podrán extenderse más allá del 1 de diciembre de 2017. De manera excepcional, podrá solicitarse una última y única prórroga de máximo 6 meses si los integrantes de la mesa interinstitucional de manera justificada y con proyecciones ciertas de costo horas-hombre justifican la imposibilidad de cumplir con la meta inicialmente establecida.

SEGUNDO.- Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte días (20) contados a partir de la notificación de esta providencia incorporen al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia destinada a lograr la migración de toda la información existente en el antiguo sistema registral.

Para ello deberán precisar el número de funcionarios o contratistas que se destinaran exclusivamente a adelantar la tarea encomendada por esta Corporación, al igual que las metas detalladas mes a mes en lo que respecta al avance esperado, hasta lograr la migración de toda la información existente. Se aclarará que la actualización de toda la información existente en el antiguo sistema registral no podrá extenderse más allá del 1 de diciembre de 2017. De manera excepcional, podrá solicitarse una última y única prórroga de máximo 6 meses si los integrantes de la mesa interinstitucional de manera justificada y con proyecciones ciertas de costo horas-hombre justifican la imposibilidad de cumplir con la meta inicialmente establecida.

TERCERO.- Incorpórese al Plan Nacional de Clarificación una **ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes** que sobre los cuales las autoridades de registro o agrarias manifiestan la posibilidad de ser baldíos. En esta medida, ante la manifestación por parte de las autoridades agrarias en el marco de procesos de tutela o de prescripción adquisitiva del dominio de estar en presencia de un bien "presuntamente baldío" estas deberán activar una ruta administrativa prioritaria en la cual: (i) la ANT dentro del término de 20 días siguientes a dicha manifestación deberá iniciar el proceso de clarificación respecto del bien sobre el cual alega dicha naturaleza, (ii) dicho proceso deberá ser tramitado en el término máximo e improrrogable de 18 meses, (iii) de llegar a determinarse que el bien definitivamente es baldío procederá a garantizarse su inmediata adjudicación siempre y cuando se demuestre que el ocupante es un sujeto de reforma agraria que cumple con las condiciones para su adjudicación.

CUARTO.- Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que trimestralmente alleguen a esta Corporación un informe en el cual se identifiquen los avances de la ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes que sobre los cuales las autoridades manifiesten la posibilidad de ser bienes baldíos acatando los indicadores referidos en la parte motiva de esta providencia. En el referido informe deberá igualmente precisarse cuál es el avance en el cumplimiento de los indicadores contenidos en el Plan Nacional de Clarificación

QUINTO.- Ordenar a las entidades que integran la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia se presente a esta Corporación un informe detallado en el cual: (i) se establezca el costo aproximado que deberá ser asumido por cada una de ellas para lograr el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 desagregado año a año, (ii) se precise un cronograma de actividades respecto a las sub actividades que no fueron detalladas en el informe de fecha 5 de agosto de 2016 y (iii) se reporte un universo aproximado de metas en relación con cada una de las sub actividades presentadas por la ANT.

SEXTO.- Ordenar a la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia, allegue un documento en el cual precise ¿si las rutas jurídicas y metodológicas para la identificación de baldíos reconocen la posibilidad de legalizar baldíos simplemente mediante la inscripción de títulos? de ser afirmativa, dicha respuesta, deberán identificar ¿cómo pretenden las rutas ser armonizadas con las limitaciones legales y constitucionales existentes (tanto las actuales como las existentes desde el siglo pasado)?

SÉPTIMO.- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación que trimestralmente allegue a esta Corporación un informe en el cual detalle el número, estado y sujetos respecto de los cuales ha adelantado actuaciones disciplinarias por el incumplimiento de las órdenes proferidas por esta Corporación. Este deberá desagregar las actuaciones que se han adelantado contra servidores públicos que han incumplido sus deberes tanto en la ejecución del Plan Nacional de Clarificación, como en la ruta prioritaria ordenada en esta providencia.

OCTAVO.- Teniendo en cuenta que las órdenes proferidas en esta decisión pueden llegar a impactar significativamente los presupuestos de la ANT, el Incoder, el IGAC, la

Superintendencia de Notariado y Registro y demás entidades que conforman la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014, esta Corporación ordenará a las entidades estatales vinculadas a la mesa que adelanten las gestiones necesarias para garantizar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación adopten los respectivos correctivos presupuestales que permitan implementar las órdenes proferidas en esta decisión en el término establecido. En esta medida se dará aplicación a las reglas establecidas en el numeral 14 de esta providencia

NOVENO.- Poner en conocimiento del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Superintendente de Notariado y Registro, del Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del Director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, del Director del Incoder (en liquidación), del Director de la Agencia Nacional de Tierras, del Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo la presente decisión.

18-Ante a la repuesta dada por la señora Registradora del Circulo de Sincé Sucre, indicaría que la Superintendencia de Notariado y Registro, está incumpliendo con orden emitida en numeral segundo del auto 040 de 2017, en relación con la "estrategia de contingencia destinada a lograr la migración de **TODA LA INFORMACIÓN** existente en el antiguo sistema registral".

19-Es preciso resaltar, que en el mes de septiembre se tramitó una tutela radicada bajo el número 2017-00097-00 en el Juzgado PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE SINCE- SUCRE,, contra la Agencia Nacional de Tierras, con objeto de obtener la revocatoria de unos actos administrativos irregulares que "habrían deslindaron Caño Palomo", tanto la Agencia de Tierras como la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, no se pronunciaron acerca del título contenido en la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera Del Circulo de Cartagena, y omitieron sus deberes en el contexto de dar cumplimiento al auto 040 de 2017.

20-La presente acción tutela tiene como objeto que las entidades que integran la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T 488 de 2014, cumplan con las órdenes del auto 040 de 2017 y que en forma definitiva se clarifique desde punto vista de la propiedad las tierras que correspondían al Antiguo Hato de San Juan Bautista Zispataca que comprendían los siguientes linderos:

FOLIO N° 60 de la Escritura y Transcripción Oficial anexa ver folios 47 y 48 de la tutela

"las indicadas tierras de Zispataca, Zispataca la Vieja y Castillejo situadas en el distrito parroquial de la villa de San Benito Abad, conocidas según resulta de los antiguos títulos de propiedad con la denominación de Hato de San Juan Bautista de Zispataca a que son anexas las Sabanas de la Candelaria, Plan del Hatillo que allí existió con este nombre, y diecisiete caballerías de tierra del monte que nombran de Canoas; con más otras cuatro caballerías de tierras de a cincuenta fanegas cada una en los cayos y cejitas de las lomas que nombran de Barranca, cuyos linderos y demarcaciones son a saber: Las del Hato de San Juan Bautista de Zispataca, Sabanas de la Candelaria, sabanas altas y bajas y playones de ciénaga que intervienen entre el rio de San Jorge y el caño que nombran de Pedro Miguel y las divide de las referidas Sabanas altas por la parte del occidente confinan con los ++++ de la antigua villa; por la Oriente, es su legítimo lindero el referido rio San Jorge; por la del Norte, la ceja del arroyo de Manzanares que desagua en la ciénaga de Agua limpia del mismo Zispataca, a salir al dicho rio de San Jorge; por la parte del Sur, o medio día lindan las expresados pastos de Sabana alta y referidos playones con el monte de Canoas, siguiendo por la sabana de la Candelaria y

Maldonado a la boca del arroyo del monte de canoas dicho, y desde allí hasta la boca del caño que nombran de San Gregorio que sale del referido rio de San Jorge y se junta con el expresado caño de Pedro Miguel, comprendiéndose los playones que nombran del engordadero que confinan con la parte de arriba de la boca del caño grande que sale del rio San Jorge, y da aguas a la ciénaga y al referido caño de Pedro Miguel, y de aquí a playa blanca corriendo hasta

FOLIO N° 61 de la Escritura y transcripción Oficial anexa ver folios 47 y 48 de la tutela

la ceja que llaman de Caimito, los Hatillos de Zispataca la Vieja y San Sebastián de Buenavista pertenecientes al referido Hato Grande de San Juan de Zispataca, se hallan situados y establecidos en el cañón de Sabana que linda por la parte del Oriente con la referida ciénaga de Zispataca; por la del Occidente con la ceja del monte que llaman de Arellanos; por la del Norte, con la ceja que llaman de Caimitos; y por la del Sur, con la mencionada ceja del arroyo de Manzanares; cuyo cañón de Sabanas con las cejas que quedan designadas por su demarcación son propias y comprendidas dentro de los límites de dichos Hatillos. Las cuatro caballerías de tierras nombradas de las Lomas de Barranca, dan principio desde los pantanos de la Tembladera corriendo al oriente hasta el principio de la ceja del Guarumal, incluyéndose los cayos de los expresados pantanos de la Tembladera, de una y otra parte, la ceja que nombran de Caimito que nace de dichas lomas y fenece en la ciénaga de Zispataca, separada de los dos montes de canoas y doradas; por la parte del Norte, con las sabanas referidas de la Tembladera, aguas claras, pantano grande y el Guarumal; y por la parte del Sur a medio día con las sabanas que nombran de Arellano y la de Buena Vista.

VI- FUNDAMENTOS DE DERECHOS

La presente Acción de Tutela se fundamenta en las Siguietes normas Constitucionales y Legales las cuales violan las entidades accionadas

Los artículos 13, 29, 51, 58, 64 Y 93 de la C.P, la Sentencia T 488 de 2014, los autos 222 de 2016 y en el Auto 222 de 2016, la ley.

1- PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

El artículo 86 de la Constitución y los artículos 5° y 6° del Decreto 2591 de 1991, establecen que la acción de tutela procede para proteger los derechos fundamentales de las personas cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. A ello agrega que la acción sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

De igual forma, se sostiene que este mecanismo de defensa judicial debe ser eficaz e idóneo para proteger los derechos fundamentales vulnerados o amenazados. así mismo se ha dicho que la eficacia e idoneidad de los mecanismos de defensa judicial que se presentan como principales deben ser analizadas en el caso concreto, por parte del juez constitucional.

Frente al caso concreto la Corte constitucional le señaló a las entidades que componen la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T 488, tiene una orden concreta y definitiva en el contexto del Plan Nacional de Clarificación es cumplir con las órdenes del auto 040 de 2017, por lo tanto ante la omisión de clarificar la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la

Notaria Primera Del Circulo de Cartagena, es una violación injustificable de la orden judicial, por lo tanto no se dispone de otro mecanismo judicial ordinario.

De acuerdo a lo anterior, la Corte Constitucional ordenó en aludido auto de seguimiento los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte días (20) contados a partir de la notificación de esta providencia incorporen al Plan Nacional de Clarificación una **ESTRATEGIA DE CONTINGENCIA DESTINADA A LOGRAR LA MIGRACIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL.**

Para ello deberán precisar el número de funcionarios o contratistas que se destinarán exclusivamente a adelantar la tarea encomendada por esta Corporación, al igual que las metas detalladas mes a mes en lo que respecta al avance esperado, hasta lograr la migración de toda la información existente. Se aclarará que la actualización de toda la información existente en el antiguo sistema registral no podrá extenderse más allá del 1 de diciembre de 2017. De manera excepcional, podrá solicitarse una última y única prórroga de máximo 6 meses si los integrantes de la mesa interinstitucional de manera justificada y con proyecciones ciertas de costo horas-hombre justifican la imposibilidad de cumplir con la meta inicialmente establecida.

Las entidades que compone la mesa interinstitucional son precisamente la Agencia Nacional de tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto geográfico Agustín Codazzi, todas las anteriores han omitido referirse al cumplimiento de las ordenes emanadas de las Corte Constitucional, en el ámbito de la tutela radicada en el mes de septiembre bajo el número **2017-00097-00 en el Juzgado PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE SINCE- SUCRE.**

También cabe indicar que el auto 040 de 2017, señala en el numeral 3 que:

“Incorpórese al Plan Nacional de Clarificación una ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes que sobre los cuales las autoridades de registro o agrarias manifiestan la posibilidad de ser baldíos. En esta medida, ante la manifestación por parte de las autoridades agrarias en el marco de procesos de tutela o de prescripción adquisitiva del dominio de estar en presencia de un bien “presuntamente baldío” estas deberán activar una ruta administrativa prioritaria en la cual: (i) la ANT dentro del término de 20 días siguientes a dicha manifestación deberá iniciar el proceso de clarificación respecto del bien sobre el cual alega dicha naturaleza, (ii) dicho proceso deberá ser tramitado en el término máximo e improrrogable de 18 meses, (iii) de llegar a determinarse que el bien definitivamente es baldío procederá a garantizarse su inmediata adjudicación siempre y cuando se demuestre que el ocupante es un sujeto de reforma agraria que cumple con las condiciones para su adjudicación”.

Ahora bien, en escrito 27 de septiembre de 2017, la Registradora de Instrumentos Públicos de Sincé- Sucre en punto segundo de su respuesta deja entrever que los predios ubicados dentro de los linderos de los respectivos títulos podrían tratarse de baldíos y que le corresponde a la Agencia de Tierras Nacional de Tierras, debe sanearlos y que es la entidad competente en esos casos.

Por lo tanto, en el marco de las acciones de tutelas ante la manifestación de las autoridades agrarias o de registro, se deberá activar una RUTA ADMINISTRATIVA PRIORITARIA EN LA CUAL, dentro el cual dentro de los veinte días siguientes a la manifestación (es independiente a la prosperidad o no de la tutela), deberá el proceso de clarificación respecto del bien sobre el cual alega dicha naturaleza.

Por lo tanto, ante la manifestación por parte de la Registradora de Instrumentos Públicos del circulo de Sincé- Sucre, de que estos predios que especifican la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera Del Circulo de Cartagena, podrían ser baldío no le queda otra alternativa a la AGENCIA DE AGENCIA DE TIERRAS que en veinte días hábiles iniciar el respectivo proceso de clarificación desde el punto de vista de la propiedad, lo anterior es independiente o no

vincula a las entidades accionadas sino al mismo juez de tutela y único medio para clarificar definitivamente los predios que encuentran dentro linderos del título antes mencionado.

2- PRINCIPIO DE INMEDIATEZ

Ha señalado la Doctrina Constitucional que con respecto al Principio de Inmediatez

“Teniendo en cuenta que la causa de la posible vulneración del derecho fundamental al debido proceso y al acceso a la administración de justicia se origina en una sentencia judicial, la Sala Tercera de Revisión considera que, para el caso en concreto, el término oportuno y razonable para iniciar la demanda se determina con fundamento en los siguientes criterios decantados por la jurisprudencia - *Supra* numerales 29 y 30- :

- (i) Determinación de si existe un motivo válido para la inactividad del accionante;
- (ii) si la inactividad justificada vulnera el núcleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión;
- (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos fundamentales del interesado;
- iv) si el fundamento de la acción de tutela surgió después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

En el evento en el que el lapso se extremadamente largo, se deberá verificar si::

(i) SE DEMUESTRA QUE LA VULNERACIÓN ES PERMANENTE EN EL TIEMPO Y QUE, PESE A QUE EL HECHO QUE LA ORIGINÓ POR PRIMERA VEZ ES MUY ANTIGUO RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DE LA TUTELA, LA SITUACIÓN DESFAVORABLE DEL ACTOR DERIVADA DEL IRRESPECTO POR SUS DERECHOS, CONTINÚA Y ES ACTUAL.

(ii) Que la especial situación de aquella persona a quien se le han vulnerado sus derechos fundamentales, convierte en desproporcionado el hecho de adjudicarle la carga de acudir a un juez; por ejemplo el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad física, entre otros

Para el caso concreto, nos interesa desarrollar bajo el entendido que la crisis estatal en relación con los bienes baldíos de la Nación, es una situación que ha mantenido en tiempo, la falta de políticas clara por parte del Estado en materia agraria es el factor principal que activa diversos conflictos territoriales en este sentido se ya se pronunciado, a través de oficio 1081 de fecha 7 de julio 2016, la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios que es recogido por la Corte Constitucional en el auto de seguimiento 040 de 2017, la cual manifestó:

“su preocupación por la actual institucionalidad encargada de materializar los mandatos proferidos en la sentencia T-488 de 2014. En esta medida el informe presentado por el organismo de control ilustró LAS FALENCIAS QUE HISTÓRICAMENTE SE HAN PRESENTADO EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE ADMINISTRAR Y ADJUDICAR LOS BIENES RURALES DE LA NACIÓN y expuso su preocupación por la continuidad de las mismas.

Respecto a las deficiencias que se presentaron en el Incoder, la Procuraduría expuso que en dicha entidad se presentaron importantes casos de CORRUPCIÓN Y NEGLIGENCIA ADMINISTRATIVA. En este sentido adujo:

“Mediante el Decreto 1300 de 2003, se creó el INCODER, el cual absorbió funciones de las siguientes entidades: INCORA, Instituto Nacional de Adecuación de Tierras (INAT), INPA y el programa de Desarrollo Rural Integrado (DRS). El aludido decreto estableció que el INCODER tendría como función principal 'ejecutar la política de desarrollo rural' en el país, tarea que difícilmente podría cumplirse al concentrar en una entidad débil las funciones de las entidades suprimidas, con el agravante de la corrupción imperante en una entidad cooptada por el paramilitarismo en muchas regiones del país, heredera de los vicios del antiguo INCORA, cuyo desmonte facilitaría el despojo de tierras por vía administrativa, entre otras por la pérdida de archivos y documentación oficial.

La nueva institución (INCODER) nació entonces sobrecargada de funciones, sin personal suficiente y muchos de sus funcionarios delinquieron asociados con el paramilitarismo hasta el 2010 para consolidar el proceso de usurpación de tierras mediante la legalización de despojo de estas a particulares, como la apropiación de baldíos de la Nación.

El INCORA heredó al INCODER en el 2003 aproximadamente 50.000 expedientes de titulación de baldíos, extinción de derecho de dominio, clarificación y deslinde de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados”.

Según precisó el órgano de control disciplinario uno de los vicios detectados en el extinto Incoder era la existencia de plantas de contratistas externos que adelantaban las funciones misionales o de contratistas con varios contratos sin dedicación exclusiva y poca productividad altamente remunerados. Sobre el particular expuso:

“Los contratistas muchas veces no reunían el perfil requerido por falta de estudios y experiencia, acarreando múltiples fallas en los trámites de los expedientes, hecho que genera demoras. Estas contrataciones irregulares e ilegales obedecían muchas veces al pago de favores políticos que evidenciaban situaciones de tráfico de influencias y corrupción. (En el análisis realizado en diciembre de 2015 por la Procuraduría General de la Nación de los perfiles de los contratistas vinculados a INCODER para atender los procesos agrarios se encontró la vinculación como contratistas de dos licenciadas una en preescolar y la otra en educación básica, situación que muestra el folclorismo con el que se realizaban las vinculaciones de contratistas en INCODER)”

Ahora bien, en lo que respecta a las funciones institucionales del Incoder de cara a la materialización de los procesos agrarios consagrados en la Ley 160 de 1994, la Procuraduría precisó que existió un importante rezago institucional. Téngase lo expuesto sobre el particular:

“Como lo determinó la Procuraduría General de la Nación los procesos agrarios fueron una de las áreas con menor gestión del INCODER, debido al escaso personal y presupuesto para llevar a cabo esa misión (...) Los procesos agrarios más complejos y con mayores dificultades para sustanciar son los de deslinde y recuperación de baldíos por cuanto las territoriales necesitan la aprobación de recursos por parte del nivel central.

Durante el año 2014 se realizaron 607 actos administrativos relacionados con procesos agrarios que permitieron la intervención de 558.416 hectáreas. Teniendo en cuenta que para octubre de 2014 la Dirección Técnica de Procesos Agrarios reportó que se estaban tramitando 2.902 expedientes de procesos agrarios a nivel nacional, con un área intervenida de aproximadamente 1.063.694 hectáreas, se observa una baja gestión, lo que se evidencia con exigua cifra de 18 resoluciones finales para un total de 73.165 hectáreas y 4 resoluciones de recursos contra resoluciones finales para un total de 1.455 hectáreas”

De igual forma la Procuraduría precisó que para la fecha en la cual se decretó la liquidación del Incoder se encontraban en trámite 2.950 procesos agrarios a nivel

nacional, dentro de los cuales 1.352 correspondían a procesos de clarificación de la propiedad y 576 de recuperación. Sin embargo, ante este panorama la respuesta institucional del Incoder y de la ANT no estuvo a la altura de los derechos constitucionales en juego, ya que durante parte del año 2015 y 2016 las autoridades encargadas de gestionar la materialización del Plan Nacional de Clarificación no adelantaron actividades para cumplir con las metas trazadas. Al respecto precisó:

"En los dos primeros meses del año 2015 se observó total inactividad en los procesos agrarios en INCODER, debido a la falta de personal tanto a nivel central como territorial, y no se realizaron visitas de topografía en conjunto con el IGAC por cuanto no se había suscrito convenio interadministrativo.

En agosto y septiembre del 2015 todas las territoriales de INCODER suspendieron actividades para adelantar inventario previo a la remisión de expedientes hacia Bogotá. En noviembre se dio la orden de remitir los expedientes desde las territoriales hacia el nivel central de INCODER y se les quitó las facultades a los directores territoriales. El 7 de diciembre de 2015 mediante decreto 2365 se ordenó la liquidación de INCODER, y mediante el Decreto 2363 se creó la agencia Nacional de Tierras ANT.

Ante la suspensión de los procesos misionales en materia de tierras que adelantaba INCODER y que fueron asignados a la ANT, el 9 de marzo de 2016 la Procuraduría General de la Nación requirió al ministro de agricultura y desarrollo rural, alertando sobre la crisis de la institucionalidad rural, resaltando entre otros aspectos el retraso de la implementación de la sentencia T 488 de 2014, ante lo cual el ministro respondió que desde el momento de la expedición de los respectivos actos administrativos hasta el pleno funcionamiento de la respectiva entidad, este proceso toma en promedio (8) meses"

En desarrollo de lo anterior, el Ministerio Público precisó que no es posible adelantar ejercicios de evaluación, idoneidad y pertinencia del plazo estipulado de 11 años en el Plan Nacional de Clarificación si no se cuenta con información sobre costos, formas de financiación, tiempo, personal, tecnología, responsables y esfuerzos institucionales.

En igual medida el ente de control precisó que durante el primer semestre del 2016 no se implementaron acciones destinadas a la materialización de las órdenes proferidas en la sentencia T-488 de 2014. En este sentido expuso:

"Sin embargo solo hasta la expedición del decreto 419 del 7 de marzo de 2016 el gobierno estableció la planta de personal de la Agencia Nacional de Tierras ANT. El 26 de mayo fue nombrado el director de la ANT, y un mes después tan solo se habían vinculado al secretario general y a 42 funcionarios de la planta de 85 aprobados, que corresponden a exfuncionarios de INCODER.

Si bien el Plan Nacional de Clarificación y Recuperación de Tierras Rurales fue presentado por el INCODER (en liquidación) el 12 de enero de 2016, es claro que la ANT es la entidad responsable de su implementación, pero, la nueva entidad a fecha del 26 de junio de 2016 ni siquiera no ha abierto sus puertas al público".

Finalmente, en lo que respecta al cumplimiento de los mandatos constitucionales de distribución y asignación progresiva de la propiedad rural, la Procuraduría precisó que "ante la falta de celeridad de este proceso y dada la conculcación de derechos fundamentales ante la omisión de las autoridades de la institucionalidad pública agraria, falta de celeridad, e incluso negligencia que conlleva la parálisis de los procedimientos agrarios que adelantaba INCODER, se advierte a la Corte Constitucional sobre la existencia de un estado de cosas inconstitucional en el sector agrario que se evidencia por la parálisis que afecta a la institucionalidad pública agraria ante el incumplimiento de los objetivos constitucionales y legales de garantía de derechos a la población rural".

Ante el panorama narrado por la delegada de la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios (nivel central), en repuesta incorporada al auto de 040 de 2017, queda demostrado con claridad meridiana que ha existido una violación continua y permanente por de las autoridades que diseñan, planean, y ejecutan la política agraria en Colombia, sin embargo la doctora Natalia Andrea Hincapié Cardona Jefe de la Oficina jurídica de la ANT, escribe en su respuesta a la tutela No 2017-00097-00, "sin sonrojarse" escribe del principio de inmediatez en las acciones de tutelas, desatendiendo los criterios Constitucionales y de paso induciendo en error al Juez de Tutela, en el mismo sentido respondieron las demás entidades que han parte de la mesa Interinstitucional para el cumplimiento de la Sentencia T -488-2014..

3- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA

3.1- IGUALDAD ANTE LA LEY/DERECHOS FUNDAMENTALES/IGUALDAD FORMAL/IGUALDAD MATERIAL

La sentencia No. T-432/92, ha definido el tema sobre el derecho a la igualdad en el sentido que:

"El principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente formación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado. Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. La igualdad material es la situación objetiva concreta que prohíbe la arbitrariedad.

La igualdad de todas las personas ante la ley y las autoridades, constituye un derecho constitucional fundamental tanto por su consagración como tal en el Capítulo I, Título II de la Constitución Nacional, como por su exaltación como derecho de vigencia inmediata en el artículo 85 de la Carta Política, y también por el valor trascendente que tiene para el hombre, sobre todo dentro de una nación que persigue garantizar a sus habitantes una vida conviviente dentro de lineamientos democráticos y participativos que aseguren un sistema político, económico y social justo".

Lo anterior, para ilustrar que la Corte Constitucional, en temas similares al caso concreto ha proferido decisiones homogéneas para este efecto analicemos la sentencia T 601 de 2016.

3.2- PRESENTACIÓN DEL CASO:

"Según lo relatado, la accionante y algunos de los coadyuvantes hacen parte de una Comunidad de copropietarios de un predio denominado "Hacienda Arroyo Grande". Tal predio fue entregado como una forma de compensación por parte de sus antiguos propietarios, los señores Justiniano y Mariano Ramírez, a 113 afrodescendientes que entregaron su fuerza de trabajo a la familia de éstos como esclavos. El anterior negocio jurídico consta en la escritura pública N° 161 de 1897, registrada ante el Notario Primero de Cartagena y cuyo folio de matrícula es el N° 060-34226 con fecha de apertura de 15 de diciembre de 1980. En 1897, la extensión del predio se identificaba como "8 caballerías de tierra" y sus linderos dan cuenta de sitios y límites vigentes para ese momento.

La Comunidad de copropietarios, es decir, las 113 familias afrodescendientes, tomaron posesión de esos terrenos ejerciendo en ellos la agricultura, la pesca y la ganadería. Sin embargo, narran que a través tiempo se han presentado diversas maniobras jurídicas y judiciales a través de las cuales se les ha despojado de tierras de las cuales son legítimos propietarios. Así narran por

ejemplo, la adjudicación indebida de supuestos baldíos que hacen parte del predio de mayor extensión Arroyo Grande; el adelanto de procesos de pertenencia adquisitiva de la propiedad, bien sea por parte de terceros o de miembros de su propia comunidad; y/o la compra forzada y fraudulenta de terrenos a los copropietarios, ignorando la figura de propiedad común y pro indiviso”.

3.3- CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE AL CASO CONTENIDO EN LA SENTENCIA T 601 DE 2016.

“Para lo anterior, lo primero que analiza esta Sala de Revisión es que la escritura pública N°161 del año 1897, fue protocolizada ante la Notaría 1ª de Cartagena de Indias. **PARA ESE MOMENTO EL SISTEMA DE REGISTRO VIGENTE EN COLOMBIA ERA EL CONSAGRADO EN EL CÓDIGO CIVIL DE 1887, QUE ACOGÍA EL SISTEMA “DE LA TRANSCRIPCIÓN”,** en el cual el Registrador se limitaba a copiar íntegra y textualmente las disposiciones consignadas en el documento llevado a registro.

63. Así en el Libro IV, título XLIII, del Código Civil se consagró el sistema “*del registro de instrumentos públicos*” (artículos 2637 a 2682). En ese título se indicó que el objeto del registro era servir de medio de tradición del dominio de los bienes raíces y de los otros derechos reales. Así mismo, dar publicidad a los actos y contratos, y ofrecer mayores garantías de autenticidad y seguridad a los títulos (art. 2637).

En el artículo 2641 del estatuto civil, se estableció que el Registrador llevaría al menos 3 libros, uno para la inscripción de los títulos que trasladen, modifiquen, graven o limiten el dominio de los bienes; otro para la inscripción de títulos actos y contratos que deban registrarse y que no estén contemplados en el libro anterior, y un libro de anotación de hipotecas. A partir de diversas modificaciones legislativas, el número de libros que debía llevar el registrador aumentó a tal punto que “*la cantidad de libros que debían consultarse hacía dispendioso conocer la situación real de un inmueble y la expedición de certificados. El sistema de libros múltiples o sistema personal imperó hasta 1970*”.

64. En el Código Civil se indicaba también la forma de realizar el registro, así el interesado debía presentar copia auténtica del título o documento, del cual se extractaba la información principal. Posteriormente el registrador dejaba constancia de la anotación en el mismo título, con indicación de la fecha del registro, el folio y el libro en que el mismo se había efectuado.

HA DE ACLARARSE QUE PARA ESE MOMENTO, NO EXISTÍA AÚN COORDINACIÓN ENTRE LOS SISTEMAS DE REGISTRO Y DE CATASTRO. ASÍ, SI BIEN DESDE ESA ÉPOCA LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL REGISTRO ERA DAR PUBLICIDAD Y OPONIBILIDAD A LOS NEGOCIOS JURÍDICOS SOBRE BIENES INMUEBLES, EN LA PRÁCTICA ERA MUY DIFÍCIL CUMPLIR CON ESA MISIÓN POR LA MULTIPLICIDAD DE LIBROS Y LA AUSENCIA DE COORDINACIÓN CON CATASTRO.

63. En 1932 se expidió la Ley 40, “*sobre reformas civiles*”, que pretendió modificar el sistema de registro y consolidar la figura de la matrícula inmobiliaria para la propiedad en Colombia, con el fin de sistematizar la información inmobiliaria tanto rural como urbana. Sin embargo, esa ley no derogó la regulación vigente hasta ese momento, por lo cual el sistema de libros múltiples se siguió utilizando. Ese fue un hecho que retrasó la consolidación de un sistema regido por una única matrícula inmobiliaria. En efecto:

“la coexistencia de dos sistemas de registro, el del Código Civil basado en libros múltiples de carácter personal y el de la ley 40 de 1932 —estructurado sobre la matrícula inmobiliaria...—, fue perjudicial en la consolidación de la

matrícula inmobiliaria, que se convirtió en un departamento informativo de consulta que no siempre estaba actualizado.... Además, el catastro no estaba desarrollado, requisito indispensable para que la matrícula inmobiliaria se impusiera[225].

64. De lo anterior, se extrae que las dificultades en la consolidación de un registro unificado podrían generar casos de titulaciones y negocios paralelos sobre un bien de mayor extensión, como el objeto de estudio en esta tutela, o sobre alguna parte de éste.

Esto permite entender la dificultad actual que se puede presentar con el proceso de clarificación de la propiedad, por lo cual, ese proceso deberá tener algunas especificidades que permitan solventar las falencias informativas, tal y como se establecerá más adelante.

65. Ahora bien, esas dificultades disminuyeron con la expedición del Decreto Ley 1250 de 1970, ya que se estableció el sistema de registro del folio real, compuesto por la matrícula inmobiliaria. Así mismo, se dispuso la obligación de contrastar la información presente en las oficinas de registro y catastro.

En efecto, el artículo 79 de ese estatuto indicó que *“la descripción del elemento jurídico en el catastro consistirá en la indicación de los derechos reales constituidos sobre los inmuebles, su situación y atestación, según los datos de la matrícula en el registro”*. Así mismo se instituyó la obligatoriedad de compartir información entre estas dos dependencias, *“dentro de los primeros 10 días de cada mes”*.

66. Justamente, la apertura del folio de matrícula N° 060-34226, referente al predio *“Hacienda Arroyo Grande”*, se hace después de la entrada en vigencia el referido estatuto, el 15 de diciembre de 1980, según se extrae de ese mismo documento que fue aportado como prueba. Así que sólo 100 años después del otorgamiento de la escritura y de su registro en el antiguo sistema de libros, es que el predio en disputa adquiere un folio de matrícula inmobiliaria.

Ahora bien, de ese mismo documento se extrae que en ese periodo sólo se abrieron 2 folios de matrícula derivados del original. Así se desprende del certificado de libertad y tradición, aportado con la demanda[226]. En efecto, las anotaciones 8 y 11 del certificado, muestran que del predio de mayor extensión se extrajeron: i) un lote en el corregimiento Arroyo Grande de 440 hectáreas aproximadamente con folio N° 060-223729 y ii) otro lote cuya magnitud no fue especificada con folio N° 060-249547.

67. Sin embargo, lo que ha podido constatar esta Sala, a partir de los informes entregados por el INCODER y el IGAC, es que dentro de los linderos descritos en el folio de matrícula 060-34226 existe un aproximado de 1945 predios, de los cuales 1081 tienen matrículas inmobiliarias, que no se derivan de ese folio inicial. Es decir son predios traslapados, cuya identificación y creación de matrícula fue paralela al folio 060-34226. De igual manera se describen otros predios de propiedad de la Nación y de los municipios involucrados (76) y otros sin información jurídica (789).

El recuento anterior hace evidente que en esos 100 años el sistema de registro tenía graves dificultades que aportaron indudablemente a la generación del conflicto territorial que se presenta en la **ACTUALIDAD EN ARROYO GRANDE. A LO QUE SE SUMAN VARIOS TIPOS DE SITUACIONES, QUE HA SIDO DIFÍCIL IDENTIFICAR, PERO CUYA VERIFICACIÓN ES RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS,** “

Ordenes proferidas en la Sentencia T 601 de 2016.

Orden proferida, por Corte Constitucional fue clarificar la escritura pública N° 161 de 1897, registrada ante el Notario Primero de Cartagena en coordinación con EL IGAC y la SNR.

Ahora analicemos la sentencia T 407- 2017, en que la Corte Costitucional aplica por primera vez la "Ruta Administrativa Prioritaria para iniciar de Clarificación y Normalización de bienes presuntamente baldíos.

3.4- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO.

"Conforme a lo expuesto, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si se vulneran los derechos al debido proceso y al patrimonio público, al haberse adjudicado a un particular, mediante el proceso de pertenencia por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, la propiedad de un inmueble del que **NO SE TIENE PLENA CERTEZA DE SI SU NATURALEZA** es privado o baldío. En esta medida, es indispensable determinar si la sentencia del 16 de febrero de 2016 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinzón incurrió en un defecto fáctico por la omisión en el decreto y la práctica de pruebas, al no haber empleado las facultades oficiosas en materia probatoria con el propósito de determinar con absoluta certeza si el bien a prescribir era o no baldío. Así mismo, es necesario identificar si la providencia que aquí se cuestiona incurrió en un defecto sustantivo al dar aplicación a los artículos 1° y 2° de la Ley 200 de 1936 desconociendo otro tipo de normas constitucionales y legales que regulan sobre quién debe recaer la carga de probar que un bien es o no privado.

Para resolver el problema jurídico planteado lo primero que hará la Sala es examinar: (i) capacidad de la Procuraduría General de la Nación para interponer acciones de tutela (ii) procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales; (iii) el derecho al territorio de la población campesina; (iv) el régimen jurídico aplicable a los bienes baldíos en el ordenamiento nacional; (v) la posibilidad excepcional de oponerse al registro ordenado mediante sentencia judicial; (vi) **LOS ALCANCES DEL PLAN NACIONAL DE CLARIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE TIERRAS RURALES**; (vii) **LA RUTA PRIORITARIA DESTINADA A LOGRAR LA NORMALIZACIÓN DE LOS BIENES SOBRE LOS CUALES LAS AUTORIDADES DE REGISTRO O AGRARIAS MANIFIESTAN LA POSIBILIDAD DE SER BALDÍOS (AUTO 040 DE 2017); Y (VIII) PARA ASÍ ENTRAR AL EXAMEN DEL CASO CONCRETO**".

CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL FRENTE AL CASO CONCRETO DE LA SENTENCIA T 407 DE 2017

"Ahora bien, debe traerse a colación que en acatamiento de la **SENTENCIA T-488 DE 2014 EL GERENTE GENERAL DEL INCODER Y EL SUPERINTENDENTE DE NOTARIADO Y REGISTRO EXPIDIERON LA INSTRUCCIÓN CONJUNTA NÚMERO 13/251 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014**, por medio de la cual pusieron en conocimiento de todos los Directores Territoriales del Instituto y los Registradores de Instrumentos Públicos del país lo resuelto en el mencionado fallo, así como los pasos a seguir en aquellos casos en los cuales se les ordenara mediante fallo judicial la inscripción de un titular del derecho de dominio sobre un bien que pueda presumirse como baldío.

Dicha Circular les indica a los registradores que en ausencia de antecedentes registrales deben proceder tal y como lo describe el artículo 18 de la Ley 1579 y dar aviso de la situación a la **Dirección Territorial del Incoder correspondiente, así como a la Procuraduría Ambiental y Agraria y a la Superintendencia para la Protección, Restitución y Formalización de Tierras**. En caso de que el juez no responda o insista en la inscripción debe el registrador correspondiente hacer una nota devolutiva, mediante la cual nieguen la inscripción de la sentencia de pertenencia, haciendo uso de la motivación expuesta por esta **Corporación en la sentencia T-488 de 2014**.

Tal acto administrativo además debe fundarse en la Ley 160 de 1994, las normas procesales que obligan a los jueces civiles a vincular a estos procesos al Incoder y las potestades que le brinda la Ley 1579 de 2012. Así mismo, dicha devolución debe destacar la grave amenaza que implica la inscripción de un propietario sobre un bien baldío, al poner en peligro la finalidad del artículo 64 de la Constitución. Finalmente, debe expedirse en oportunidad y brindar los recursos, propios del principio de contradicción, de carácter administrativo a quien desee oponerse a la negativa de registro.

8.2. Ahora bien, debe precisarse que recientemente la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante Instrucción Administrativa del 17 de febrero de 2017, modificó la Instrucción Conjunta número 13/251 del 13 de noviembre de 2014, con el propósito de sistematizar y actualizar el procedimiento adelantado a los criterios jurisprudenciales establecidos por la Corte en las sentencias T-293 de 2016, T-548 de 2016 y T-549 de 2016. En primer lugar, esta precisó que cuando el particular o el juez soliciten a la oficina de registro de instrumentos públicos certificado de antecedente registral para aportar al proceso de declaración de pertenencia, se pueden presentar dos situaciones a saber:

(i) Carencia de antecedente registral, al evidenciar del análisis existente en los índices de propietarios que no es posible constatar ninguna clase de registro de derechos reales en el inmueble objeto de discusión. En estos casos la Superintendencia solicita que el certificado a expedir precise que el inmueble carece de antecedentes Registrales, determinando así la inexistencia de pleno dominio sobre el mismo, *“situación que presume la naturaleza baldía del predio y su imprescriptibilidad”*.

(ii) La segunda hipótesis que se puede presentar es que la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos identifique que se encontraron tradiciones de predios que inician su historia jurídica con base en títulos precarios. Ante estas situaciones es preciso que se certifique esta situación y se prevenga al juez respecto de que se puede tratar de un predio de naturaleza baldía, el cual solo se puede adquirir por resolución de adjudicación de la Agencia Nacional de Tierras.

3-5 ÓRDENES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA SENTENCIA T 407 DE 2017.

RESUELVE:

PRIMERO.- REVOCAR el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 3 de febrero de 2017, mediante el cual se confirmó el proferido en primera instancia por el juzgado Civil del Circuito de Chocontá. En su lugar **CONCEDER** la protección del derecho al debido proceso, invocado por la señora Alba Roció Ávila Ávila, en calidad de Procuradora 4 Judicial II Agraria de Bogotá.

SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad de todo lo actuado en el proceso radicado bajo el número 2014-0012 del Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinzón, incluyendo el auto admisorio de la demanda. Se precisará que solo hasta que la ANT, el accionante o el juzgado en el marco de sus poderes oficiosos identifiquen con plena certeza de la naturaleza del bien jurídico a prescribir, será posible continuar con el proceso adelantado.

TERCERO.- ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras, o quien haga sus veces, que dentro del término de veinte (20) días, contados a partir de la notificación de la presente providencia, dé inicio al proceso de clarificación sobre el inmueble objeto de discusión[111]. Además se advertirá a la Agencia Nacional de Tierras, que mientras se surte el proceso de clarificación, **NO PODRÁ PERTURBAR LA PRESUNTA POSESIÓN/OCUPACIÓN QUE DEL BIEN HA VENIDO EJERCIENDO EL SEÑOR VÍCTOR JULIO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ SOBRE EL BIEN INMUEBLE DENOMINADO “EL CHORRO”**

CUARTO. En caso de que la sentencia del 16 de febrero de 2016 proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinzón hubiere sido inscrita por Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Chocontá se ordena a la entidad que anule el referido registro.

QUINTO.- ORDENAR a la Agencia Nacional de Tierras que en acatamiento del Auto 040 de 2017 finalice el trámite de clarificación que refiere el ordinal anterior, de manera que su culminación no tome más de 18 meses contados a partir de la notificación de esta providencia.

SEXTO. ADVERTIR a la Agencia Nacional de Tierras, que en caso de que el inmueble objeto de clarificación sea un baldío, se deberá proceder a su adjudicación al señor Víctor Julio Fernández Sánchez a más tardar dentro de los 3 meses siguientes, siempre que reúna los requisitos legales y jurisprudenciales, especialmente los desarrollados por la Corte en la sentencia SU-426 de 2016.

SÉPTIMO.- ORDENAR a la Defensoría del Pueblo, realizar el acompañamiento que requiere el señor Víctor Julio Fernández Sánchez en el proceso de pertenencia con el propósito de que sea incluido como beneficiario del proceso de adjudicación de baldíos, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales.

OCTAVO.- DEVOLVER por la Secretaría General de esta corporación, el expediente con radicación 2014-0012 al Juzgado Promiscuo Municipal de Villapinzón

NOVENO.- Por Secretaría, librese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991.

Sentencia T-1082/12

ACCION DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO-Procedencia excepcional para controvertirlo cuando se configure un perjuicio irremediable o vulneración al debido proceso administrativo

"El debido proceso es un derecho fundamental que tiene una aplicación concreta no sólo en las actuaciones judiciales sino también en las administrativas. La garantía fundamental del debido proceso se aplica a toda actuación administrativa desde la etapa de inicio del respectivo procedimiento hasta su terminación, y su contenido debe asegurarse a todos los sujetos. En este sentido, la actuación de las autoridades administrativas debe desarrollarse bajo la observancia del principio de legalidad, marco dentro del cual pueden ejercer sus atribuciones con la certeza de que sus actos podrán producir efectos jurídicos. De esta manera, se delimita la frontera entre el ejercicio de una potestad legal y una actuación arbitraria y caprichosa. Ahora bien, en los casos en los que la actuación de las autoridades respectivas carezcan de fundamento objetivo y sus decisiones sean el producto de una actitud arbitraria y caprichosa que traiga como consecuencia la vulneración de derechos fundamentales de las personas, nos encontramos frente a lo que se ha denominado como vía de hecho, y para superarla es procedente excepcionalmente la acción de tutela"

De acuerdo a lo anterior, queda claro que la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**, tiene la obligación de acatar el auto 040 de 2017 de la Corte Constitucional y debe iniciar el proceso de clarificación de desde el punto de vista de la propiedad de la escritura Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera Del Circulo de Cartagena y además repepenando todos los lineamientos y criterios Constitucionales tal como indico la sentencia T 488 de 204 en unos de sus partes expresa que:

"Frente a lo anterior, esta Sala de Revisión estima necesario poner de presente que si bien es la sentencia T-488 de 2014 se dictó en el marco de un caso concreto, de acceso a baldíos mediante una sentencia civil de pertenencia, la relevancia

constitucional de la recuperación de los predios baldíos tiene un alcance general, pues, al estar definida como el procedimiento a través del cual se "recuper[a] o restitu[ye] al patrimonio del Estado las tierras baldías adjudicables, las inadjudicables y las demás de propiedad de la Nación, que se encuentren indebidamente ocupadas por los particulares"[33] **y tener la finalidad de establecer si sobre los terrenos baldíos previamente clarificados existe ocupación** indebida para proceder con su recuperación, se constituye en una etapa esencial para que el Estado ejerza un verdadero derecho especial de conservación, que le permita disponer de los predios para su consecuente adjudicación".

Para que haga efectivo, el Derecho de defensa y Debido Proceso de los terceros ocupantes, poseedores o propietarios de las tierras que comprendían el Hato de San Juan Bautista de Cispataca, previamente hay que iniciar el Proceso de Clarificación, bajo los lineamientos ordenados por la Corte Constitucional, pues de continuar con los procesos agrarios de deslindes sin la información primaria e insumos los cuales deben aportar los demás entes accionados se violaría de manera grave derechos fundamentales tales como la propiedad privada, confianza legítima, pues intervención de la Agencia Nacional de Tierras, afectaría un número indeterminado de personas que han poseído la tierra bajo la convicción que son privadas y muchas de ellas poseen antecedentes registrales que se remontan al siglo XIX, cuyos títulos se niegan las autoridades accionadas a clarificar de acuerdo a lo indicado en el auto 040 de 2017.

PRETENSIONES

- 1- Solicito la protección y amparo inmediato de los Derechos Constitucionales Fundamentales invocados en la presente acción y los demás derechos que considere el juez de tutelas vulnerados vulnerado por las entidades accionadas.

Como consecuencia de lo anterior, **ORDENAR** a la **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**, dar cumplimiento al auto al numeral 3 del 040 de 2017, para que el término de 20 días **ACTIVE** la ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los predios que comprenden el Hato de San Juan Bautista Zispataca al cual se refiere la escritura Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera Del Circulo de Cartagena, el cual manifestó la señora Registradora de instrumentos Públicos de Sincé la posibilidad de ser predios baldíos (i) la ANT dentro del término de 20 días siguientes a dicha manifestación deberá iniciar el **Proceso de Clarificación respecto del bien sobre el cual alega dicha naturaleza**, (ii) dicho proceso deberá ser tramitado en el término máximo e improrrogable de 18 meses, (iii) de llegar a determinarse que el bien definitivamente es baldío procederá a garantizarse su inmediata adjudicación siempre y cuando se demuestre que el ocupante es un sujeto de reforma agraria que cumple con las condiciones para su adjudicación, dentro de este, **no podrá perturbar la presunta posesión/ocupación** que vienen ejerciendo en los predios que se encuentre dentro de los linderos del Hato de San Juan Bautista de Zispataca, que se ubica en el municipio de San Benito Abad- Sucre.

- 2- **ORDENAR** a la mesa interinstitucional del cual hace parte el Superintendente de Notariado y Registro para cumplimiento de la Sentencia T 488 de 2014, dar Cumplimiento al Numeral 2 del auto 040 de 2017 migrando la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera Del Circulo de Cartagena del sistema registral antiguo al actual de acuerdo al Plan de contingencia que se debe incorporar al Plan Nacional de Clarificación.
- 3- **ORDENAR** al Gerente del IGAC y al Director de la Agencia Nacional de Tierras para que en un plazo no mayor a 6 meses efectúen en su el

levantamiento topográfico con relleno, a fin de que sea parte del acervo probatorio dentro del expediente de clarificación de la propiedad que se llevará a cabo dentro de los linderos comprendidos en la escritura la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera Del Circulo de Cartagena.

- 4- **ORDENAR** a la Procuraduría General de la Nación de cumplimiento al numeral 7 de del auto 040 de 2017.

VI.- COMPETENCIA

Es usted competente conocer y decidir sobre la presente acción de conformidad con los artículos 1,5 y 37 del decreto ley 2591 de 1991.

JURAMENTO

Declarado bajo la gravedad del juramento que no he presentado la misma referente por los mismos hechos tutela que involucren las mismas partes y es distintas a la presentada en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincé- Sucre, pues existen hechos sobrevinientes como la respuesta de la señora registradora instrumentos públicos de Sincé – Sucre.

VII.- PRUEBAS DOCUMENTALES. -

- 1- Escrito de solicitud de migración de la escritura de 1847 de las tierras del antiguo "Hato de San Juan Bautista de Zispataca, fue presentada con 44 folios copia de la Escritura y Transcripción oficial del archivo Histórico de Cartagena. 14 folios de la solicitud.
- 2- Respuesta de la ORIP, Sincé- Sucre un folio de fecha septiembre 27 de 2017.
- 3- Copia de la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera Del Circulo de Cartagena.
- 4- Copia de la transcripción oficial en el archivo histórico de Cartagena de Indias, firmada por el técnico **ANIBAL A FULLEDA OLMOS** y el Director **MOISES ALVAREZ MARIN**, menciona claramente que se encuentra en el tomo No 2, folios 58 a 64 de la Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847.
- 5- Escritura Pública número 15 de 7 mayo de 1847 de la Notaria Primera del Círculo de Cartagena de protocolización y registro que se encuentra en la Notaria única de corozal.
- 6- Copia de la queja disciplinaria radicada bajo el numero E-2017-826665, en la Procuraduría General de la Nación.
- 7- Copia de respuesta de IGAC, en tutela 2017-00097 del Juzgado Promiscuo del Circuito de Sincelejo.
- 8- Copia de respuesta de SNR, en tutela 2017-00097 del Juzgado Promiscuo del circuito de Sincé- sucre.

9- Copia de respuesta de ANT, en tutela 2017-00097 del juzgado Promiscuo del circuito de Sincé- Sucre.

10-Escrito de fecha 12 de mayo de 2015 del INCODER, ante petición de uno de los propietarios de caño lindo identificado con FMI No 347-185, ubicado en la jurisdicción del Municipio de san Benito Abad- Sucre, señala que existe un proceso agrario sobre los Cienagas "Guartinaja" y el "Pimiento" que son contiguas al predio "Caño lindo y el Porvenir.

11-Copia FMI No 347-185 de la ORIP, Sincé- Sucre.

12-Copia FMI No 347-14140 de la ORIP, Sincé- Sucre.

VIII.-ANEXOS

Acompaño los documentos relacionados en el acápite de pruebas, archivo de la demanda y sus traslados.

IX.NOTIFICACIONES

Al accionante se puede notificar en la dirección calle 18 No 24-57 Sincelejo - Sucre

A las accionadas:

Agencia Nacional de tierras en la dirección Dirección: cl. 43 #57 41, Bogotá DC Teléfono (1) 5185858.

Correo: jurídica.ant@agenciade tierras.gov.co

Superintendencia de Notariado y Registro, Dirección: Dirección: Cl. 26 #13-49, Bogotá DC Teléfono (1) 3282121.

notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co

Oficina de instrumentos Públicos de Sincé – Sucre Dirección: Cra. 11, San Luis de Sincé, Sucre

Instituto Geográfico Agustín Codazzi: Dirección Oficina Sede Central Bogotá - Carrera 30 N° 48-51 Conmutador 57-1-3694000 ó 57-1-3694100 notificaciones.judiciales@igac.gov.co

**Procuraduría General de la Nación Dirección Centro de Atención al Público,
CAP Carrera 5 # 15-80, Bogotá D.C., Colombia Código Postal: 110321**

Notificaciones Judiciales: procesosjudiciales@procuraduria.gov.co

**Corte Constitucional Sala Quinta de Revision Dirección: a 7-99,, Cl. 12 #71,
Bogotá Teléfono: (1) 3506200**

**Corporación Museo Histórico de Cartagena de indias archivo Histórico
Palacio de la Inquisición centro de Cartagena de indias.**

Del Señor Juez, con el acostumbrado respeto



MIGUEL VICENTE PEREZ MARTINEZ

CC NO. 92.506.643

SEÑORA

REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL CÍRCULO DE SINCE
E.S.D

24

REF: SOLICITUD DE MIGRACIÓN DE LA ESCRITURA DE 1847 DE LAS
TIERRAS DEL ANTIGUO SAN JUAN BAUTISTA DE HATO DE CISPATACA
AL SISTEMA DE FOLIO ÚNICO REAL

ABEL ALBERTO PEREZ PEREZ, mayor de edad, vecino y residente en este municipio, abogado en ejercicio identificado como aparece al pie de mi correspondiente firma solicito **MIGRACIÓN DE LA ESCRITURA DE 1847 DE LAS TIERRAS DEL HATO ANTIGUO SAN JUAN BAUTISTA DE CISPATACA**, al sistema único de folio real, conforme lo establece la Ley 1579 de 2012, conforme a los siguientes argumentos facticos y jurídicos:

- 1- Escritura de venta del año 1847, que otorga María Josefa Torres Hoyos al señor Antonio Rodríguez de Torres del Hato de Juan Bautista de Zispataca, que hacia parte según el título de propiedad de la parroquia de San Benito. Abad esta escritura se encuentra en archivo histórico de la ciudad de Cartagena de Indias Palacio de la inquisición Protocolo Quince (15), Tomo 2 folios 58r-64-(65/72).
- 2- Cabe señalar que es una carga legal establecida por el artículo 6 de la Ley 1579 de 2012 que :

“La información de la historia jurídica de los inmuebles que se encuentran en los libros múltiples o sistema personal, en el folio de matrícula inmobiliaria documental, en medio magnético y en el sistema de información registral; los índices de propietarios y de inmuebles y los antecedentes registrales deben ser unificados utilizando medios magnéticos y digitales mediante el empleo de nuevas tecnologías y procedimientos de reconocido valor técnico para el manejo de la información que garantice la seguridad, celeridad y eficacia en el proceso de registro, en todo el territorio nacional a través de una base de datos centralizada, para ofrecer en línea los servicios que corresponde al registro de la propiedad inmueble.

Parágrafo 1º. La Superintendencia de Notariado y Registro podrá diseñar otros sistemas distintos a los enunciados de acuerdo al desarrollo tecnológico, cuando por razones del servicio se requiera.

Parágrafo 2º. A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Superintendencia de Notariado y Registro tiene un término de cinco (5) años para la sistematización o digitalización de la información contenida en los libros del Antiguo Sistema de Registro”.

- 3- Así mismo, se señálala el artículo 48 del mismo estatuto

“El folio de matrícula se abrirá a solicitud de parte o de oficio por el Registrador, así:

A solicitud de parte cuando los interesados, presenten ante la correspondiente Oficina de Registro los títulos que amparan sus derechos sobre bienes raíces con las debidas notas del registro, y con base en ellos se expiden las certificaciones a que haya lugar, las cuales servirán de antecedente o medio probatorio para la iniciación de procesos ordinarios para clarificar la propiedad o saneamiento de la

Anexo 44 fo lios.

Recibido:
C. Sant
Sep 26/2017
3:40 pm.

misma. Se abrirá el folio de matrícula respectivo si es procedente de conformidad con esta ley.

DE OFICIO, CUANDO SE TRASLADA LA TRADICIÓN DEL ANTIGUO SISTEMA DE REGISTRO AL SISTEMA VIGENTE DE REGISTRO.

- 4- Es procedente, la apertura del folio de matrícula respectivo en razón que la escritura data del año 1847 en ese momento la ley civil permitía la tradición de bienes como playones, ciénagas, vegas, tal como lo enuncio el artículo 684 del Código Civil que indica

“DERECHOS ADQUIRIDOS SOBRE BIENES PUBLICOS. No obstante lo prevenido en este capítulo y en el de la accesión, relativamente al dominio de la Unión sobre los ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de acuerdo con la legislación anterior a este Código”.

- 5- En la misma línea legal lo estableció la ley 1887 artículo 28 que señala:

“Todo derecho real adquirido bajo una ley y en conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto á su ejercicio y cargas, y en lo tocante á su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley”

- 6- El mismo artículo 83 del **DECRETO 2811 DE 1974** señala que:

Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado:

- a.- El álveo o cauce natural de las corrientes;
- b.- El lecho de los depósitos naturales de agua;
- c.- **La playas marítimas, fluviales y lacustres;**
- d.- **Una faja paralela a la línea de mareas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos, hasta de treinta metros de ancho;**
- e.- Las áreas ocupadas por los nevados y por los cauces de los glaciares;
- f.- Los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.

7-- De acuerdo a las normas se respetan los derechos adquiridos sobre este tipo de bienes, tal como lo ratifico el artículo 58 de la Constitución Nacional y el artículo 1 del decreto 902 de 2017, que establece normas marcos de la Nueva Reforma Integral.

- 8- También es preciso señalar que no todos las tierras o suelos que comprenden el **DEL HATO ANTIGUO SAN JUAN BAUTISTA DE CISPATACA**, son ciénagas o playones.

- 9- La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que:

En relación con la validez de títulos de dominio otorgados en la época de la Colonia, el artículo 28 de la Ley 153 de 1887 señala:

"Todo derecho real adquirido bajo una ley de conformidad con ella, subsiste bajo el imperio de otra; pero en cuanto a su ejercicio y cargas, y en lo tocante a su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley". Las Altas Cortes se han pronunciado en reiteradas oportunidades para destacar la validez y reconocimiento de derechos adquiridos en vigencia de las leyes de la época de la Colonia, siempre y cuando se hayan ajustado al ordenamiento jurídico vigente en la época.

La H. Corte Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales, en providencia de 6 de octubre de 1950, siendo magistrado ponente el Dr. Luis Rafael Robles, dentro de la causa adelantada por la Comunidad de los terrenos "Candelaria o Condueños", sobre los terrenos de su propiedad ubicados en los municipios de Pivijay, Salamina y Remolino, del departamento del Magdalena, manifestó:

"No sobra advertir que la relación que de los títulos hizo la Sala en dicha ocasión, y la que se ha reproducido, demuestran claramente que se cumplieron con las formalidades que exigían las leyes entonces vigentes para que salieran de manera válida y legítima las tierras del dominio de la Corona" ... "Así mismo los otros títulos posteriores, los que en documentos auténticos obran en autos, demuestran suficientemente, a juicio de la Corte, que los comuneros de Candelaria o Condueños siempre salieron victoriosos en todas las querellas posesorias que tuvieron que entablar contra terceros ocupantes, y que, por consiguiente, no han perdido en ninguna época posesión, de que ahora disfrutaban los comuneros actuales"... **"Así pues, para la Sala es incuestionable, según lo expuesto, que las tierras "Candelaria o Condueños" salieron legalmente del dominio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873, por lo cual es de propiedad privada el petróleo que en ellas se pueda encontrar, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 10 de la ley 160 de 1936."**

Y al resolver el litigio sentenció: **"Por lo cual, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Negocios Generales y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA, la sentencia del Tribunal de Santa Marta de fecha once (11) de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco (1945), y en su lugar RESUELVE: PRIMERO.- Son propiedad privada y pertenecen a los comuneros cuya lista se da en la petición cuarta de la demanda, las tierras llamadas de "Candelaria o Condueños", ubicadas en los Municipios de Pivijay, Salamina y Remolino, del Departamento del Magdalena... SEGUNDO.- Los terrenos de "Candelaria o Condueños", cuyos linderos se dejan especificados, salieron legalmente del dominio del Estado con anterioridad al día 28 de octubre de 1873."**

Por su parte, el H. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero ponente: Doctor Humberto Mora Osejo, Rad. 1459. Consultas del Gobierno, formulada por el Ministro de Minas y Energía, en Concepto de noviembre 24 de 1980, entre otros apartes afirmó:

"a). (...)

b) Las minas de propiedad particular tienen las siguientes fuentes jurídicas.

1°. La adjudicación, practicada desde la Colonia hasta que entró en vigencia la Ley 20 de 1969, que subrogó en este aspecto el Código de Minas e hizo imposible la adjudicación de las minas de oro, plata, platino, cobre y piedras preciosas, que se regían por el mencionado estatuto, para hacer posible su explotación, como la de las demás minas, exclusivamente por el sistema de concesión, aporte o perminso (art. 8°. Ley 20 de 1969). Pero las minas adjudicadas hasta que entró en vigencia la Ley 20 de 1969, a condición de que se hubieren explotado en la forma prescrita por el artículo 3°. Y 4°. Ibídem, son de propiedad particular.

2°. Accesión, también aplicada desde la Colonia, según la cual el dueño del suelo lo es de las minas, salvo las que el Estado se hubiere reservado, (según el Código Fiscal de 1873, reiterado por el que lo reemplazó (art. 4°, literal c), de la Ley 110 de 1912), **si el fundo salió del patrimonio del Estado con anterioridad al 28 de octubre de 1873, el dueño del suelo lo era del subsuelo respecto de todas las minas, exceptuadas las de oro, plata, platino y piedras preciosas que pertenecen a la Nación, cualquiera que sea el predio en donde se encuentran**

salvo los derechos constituidos en favor de los descubridores y explotadores que no hayan revertido a la Nación (art. 202, ord. 3º, de la Constitución, 3º. y 4º. de la Ley 20 de 1969). “

De acuerdo a las normas y jurisprudencia citada, para la plena validez de la Merced como título de dominio de las tierras, se requería la concesión como tal, y la ratificación del virrey; o en su defecto, la entrega formal de la posesión por un juez. En el caso de análisis se cumplieron dichos presupuestos, y, por consiguiente, el derecho de dominio privado, que fue adquirido bajo una ley de conformidad con los requisitos por ella establecidos para su adquisición, subsiste en el tiempo y debe ser reconocido y aceptado por las autoridades públicas.

De la dictadura de Simón Bolívar, que seguramente se inicia cuando es disuelta la Convención de Ocaña en 1828 y éste dicta el Decreto Orgánico de la Dictadura el 27 de agosto de ése año, se conocen algunas referencias normativas sobre los usos de las aguas pues tuvo a bien establecer las zonas de las corrientes (ríos y quebradas) donde se podían realizar actividades como el lavado de ropas, hacer los vertimientos y tomar las aguas para consumo por acarreo. Normas que valga la pena decir, eran adaptaciones de normas que habían imperado durante el dominio español.

Hoy los más claros antecedentes normativos de transición entre la época bolivariana, e incluso de la época colonial, y la republicana sobre la propiedad y los usos de las aguas no marítimas o continentales, se hallan en las disposiciones originales del Código Civil, adoptado como tal para la República de Colombia por la Ley 57 de 1887.

Como tuvimos oportunidad de indicarlo ya, la Constitución Política establece que los bienes públicos que hacen parte del territorio son de la Nación. Igualmente el artículo 63 ibídem establece que los bienes de uso público y los demás que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Y también vimos, cómo el Código Civil, con disposiciones que se incorporaron para la República de Colombia desde al menos 1887, dispuso que “los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales” son bienes de uso público.

El 21 de noviembre de 1928, se sancionó la Ley 113 aprobada por el Congreso de la República, por la cual se definieron los estudios técnicos necesarios para aprovechar las corrientes y caídas de aguas principalmente para aprovechar su fuerza hidráulica. En dicha Ley se definía el dominio público sobre las aguas; se dejaron a salvo las concesiones otorgadas a departamentos y municipios; se estableció por vez primera el término máximo por el cual el Gobierno Nacional podía otorgar las licencias o concesiones de aguas que se fijó en cincuenta (50) años, para nosotros el antecedente del término actual para los usos comunitarios; contemplaba la cesión del uso por medio de actos administrativos en las formas de permisos y concesiones pero confundía éstas con las licencias; y se garantizaban los derechos adquiridos (lo que como hemos visto es una constante en nuestra legislación).

Con posterioridad a esta Ley, se dictó el Decreto 796 de 1938, que en nuestro criterio derogó algunas disposiciones hasta entonces vigentes sobre usos y aprovechamientos de aguas de dominio público. Decreto que fue derogado a su vez de manera expresa por el Decreto 1382 del 17 de julio de 1940.

Los directos antecedentes de la actual normatividad sobre usos y aprovechamientos de aguas de dominio público en Colombia, son los Decretos 1381 y 1382, ambos de julio 17 de 1940, expedidos al amparo y con las facultades que otorgó el Congreso Nacional al Presidente de la República mediante la Ley 54 de 1939. El primero, se refiere al “aprovechamiento, conservación y distribución de aguas nacionales de uso público” y el segundo, que es un complemento del primero, por tocar aspectos similares, fue la base sobre el cual, una vez expedido el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio

Ambiente (Decreto Ley 2811 de 1974), se expidió su reglamentación con el Decreto 1541 de 1978.

Desde los Decretos anteriormente mencionados es que se fijaron términos precisos para los usos domésticos (entonces en 20 años, hoy en 10); se ampliaron los modos para otorgar los usos ya que se podía hacer mediante concesiones, mercedes, permisos o licencias; introduce la figura del “reparto” o “reglamentación” de aguas; introducen también la figura de la prórroga de las autorizaciones para usos; y establecía competencias a las autoridades de policía para tramitar y otorgar algunos permisos sobre aguas.

Aunque ya vimos que la regla general es que sobre todas las aguas que se hallen dentro de los límites territoriales de Colombia, particularmente de aquéllas que se encuentren en su jurisdicción continental, se ejerce el dominio público, existen dos posibilidades de acreditar el dominio privado sobre dichas aguas.

Ahora bien, en el mismo estudio el tratadista señala cuando operan los derechos adquiridos sobre las aguas continentales, es decir aguas diferentes a las marítimas que se encuentran en ríos, lagos, ciénagas y humedales.

"Cuando éstas se han adquirido por vía de la adjudicación antes de la adopción del Código Civil en 1887.

Efectivamente, el artículo 684 del Código Civil previene que en lo relativo al dominio o propiedad de la República de Colombia "sobre ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de acuerdo con la legislación anterior a este Código".

Hoy esta previsión encuentra pleno respaldo en el texto del Artículo 58 de la Constitución Política (en este aspecto idéntico al Artículo 30 de la Constitución de 1886) e incluso en la jurisprudencia, que ha dicho: "Estamos ante una limitación constitucional de la tarea legislativa, cuyo objeto consiste en brindar protección a las personas en cuanto estén favorecidas por situaciones jurídicas consolidadas al amparo de la legalidad, realizando así el principio de seguridad jurídica, indispensable para la convivencia, pues si el legislador pudiese cambiar el ordenamiento sin atender a dicho postulado, se generaría en la sociedad una grave incertidumbre y resultaría inoficioso acogerse a las reglas de derecho para alcanzar determinados fines"(1)

Lo anterior quiere decir, que, si una persona logra acreditar hoy que en su fundo, predio o heredad viene haciendo uso de las aguas superficiales (porque sobre las subterráneas no existen estas salvedades legales) por derecho adquirido por vía de la "adjudicación" desde antes de la adopción del Código Civil y éstas no se han dejado de usar por un término de tres (3) años consecutivos, hoy se puede declarar que dichas aguas son de dominio privado.

Hoy la salvaguarda de los derechos adquiridos sobre las aguas en Colombia se halla, además de las normas ya mencionadas, en las siguientes disposiciones: Artículos 80, 83 y 85 del Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente".

También el Ministerio de Ambiente, ha reconocido mediante concepto Rad 1200-E1-11525 del 16 de abril 2007 que existen derechos adquiridos por particulares sobre rondas hídricas que indica el literal del artículo 83 el Código nacional de Recursos Naturales, para lo cual expresó lo siguiente:

"Ahora bien, sobre presuntos de hechos adquiridos, sobre las citadas rondas, el artículo 83 del Decreto Ley 2811 de 1974, que hace parte del capítulo denominado "del dominio de las aguas y sus cauces" está disponiendo sin perjuicios de los derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e imprescriptibles del Estado, entre otros "una franja paralela a la línea de las mareas máxima o al cauce permanente de los ríos y lagos hasta 30 metros de ancho"

Sobre este tema de la presunta propiedad privada en materia de rondas, además de tener en cuenta la sentencia citada al inicio de este escrito, se trae a colación lo manifestado por el consejo de estado en 1990: "De los cauces forman partes las playas o playones, o sea aquellas partes de los cauces que el agua ocupa o desocupa alternativamente o como dice el artículo 2 del Decreto 389 de 1991: " Se entiende por playa fluvial, la superficie plana o casi plana comprendida las líneas de bajas aguas de los ríos y estas donde lleguen hasta ordinariamente su mayor crecimiento".

De manera que las playas de los ríos, lagos, lagunas, ciénagas de uso público, son también del dominio del Estado, porque constituyen una prolongación de la anchura del cauce.

La propiedad de los particulares sobre los predios riberanos de una corriente o depósito de agua de uso público, excluye por consiguiente la de sus playones, pertenecientes al estado, como parte integrante del mismo cauce. La línea donde ordinaria y periódicamente llegan las áreas fluviales en sus mayores crecientes, es pues la que divide los predios riberanos de los cauces de las aguas de dominios públicos.

EN CONSECUENCIA SE TIENE QUE PARA DEMOSTRAR UNA PROPIEDAD PRIVADA SOBRE UNA FUENTE DE AGUA Y SUS PLAYONES SE DEBE ALEGAR TITULO ORIGINARIO LEGALMENTE EXPEDIDO POR EL ESTADO Y QUE NO

HAYA PERDIDO EFICACIA LEGAL, OTORGADA CON ANTERIORIDAD AL AÑO 1873, EL CUAL ENTRÓ EN VIGENCIA EL CÓDIGO CIVIL, QUIEN LE DIO A LAS AGUAS Y SUS CAUCES LA CALIDAD DE SER DE USO PÚBLICO". (SENTENCIA DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1990. EXPEDIENTE 2275, CONSEJERO PONENTE: DR. CARLOS GUSTAVO ARRIETA PADILLA)".

ESTADOS DE COSAS INCONSTITUCIONALES EN LA POLÍTICA AGRARIA EN COLOMBIA.

El doctor GABRIEL BUSTAMANTE PEÑA en su Trabajo monográfico para optar al título de Magister en Estudios Políticos en la introducción define el estado de cosas institucionales de la siguiente forma:

"El Estado de Cosas Institucional es una decisión judicial, por medio de la cual la Corte Constitucional declara que se ha configurado una violación masiva, generalizada y estructural de los derechos fundamentales. Es de tal magnitud, que configura una realidad contraria a los principios fundantes de la Constitución Nacional y, por lo tanto, ordena al conjunto de las instituciones involucradas, poner fin a tal estado de anormalidad constitucional, por medio de acciones íntegras, oportunas y eficaces.

El ECI es una creación intelectual –aún en construcción–, desarrollada jurisprudencialmente en ocho sentencias de la Corte Constitucional, donde, por violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, debidamente constatadas, los efectos del juez de tutela se extendieron, extraordinariamente, para proteger directamente a todo un conjunto de personas, e indirectamente a toda la sociedad, que se considera potencialmente en peligro mientras subsista esta realidad contraria a la Constitución".

la Corte Constitucional en la sentencia T 488 de 2014, fue más allá del caso concreto, emitió órdenes de estructurales ante la problemática jurídica y social como es la falta de información en relación a los bienes baldíos de la nación y que ha sido la principal causa que permita establecer con claridad la verdadera naturaleza de los terrenos en Colombia.

Las ordenes escriturales fueron las siguientes:

" Ordenes estructurales.

Ahora bien, de las consideraciones presentadas en esta providencia así como de las pruebas allegadas, se advierte que la problemática jurídica y social trasciende la situación concreta del señor Gerardo Escobar Niño, quien motivó la presente acción de tutela.

En efecto, la falta de información fidedigna y actualizada de los bienes de la nación es una falencia reconocida por el Incoder quien nuevamente sostuvo ante esta Corporación que *"no cuenta con un inventario de bienes baldíos de la Nación"*[168], pese a haber transcurrido 20 años desde la promulgación de la Ley 160 de 1994. Esta deficiencia administrativa, a su vez, contribuye al fenómeno –histórico pero aún muy vigente– de la concentración excesiva de tierras, en tanto la falta de claridad y certeza sobre la naturaleza jurídica de los terrenos permite que estos sean adjudicados irregularmente mediante procedimientos judiciales ordinarios (declaración de pertenencia), en los que no se califica adecuadamente el perfil de los sujetos beneficiarios ni los límites de extensión del predio (en Unidades Agrícolas Familiares -UAF-). Con ello, se pretermiten los objetivos finales de la reforma agraria: acceso progresivo a la propiedad a los trabajadores campesinos y desarrollo rural.

Según denuncias recientes al respecto, esta problemática amenaza con extenderse rápidamente por varios departamentos del país y afectar a cientos de miles de hectáreas de la nación, que por órdenes de jueces de la República

"En los últimos meses, y sin que nadie lo notara, decenas de propiedades, cuya extensión equivale a tres veces el municipio de Medellín, pasaron a manos de particulares por cuenta de varios fallos de jueces promiscuos de Casanare y Meta.

(...)

EL TIEMPO encontró 51 procesos idénticos al de Monterrey en San Luis, Pore, Hato Corozal y Orocué (Casanare) en donde, a punta de fallos judiciales, 76.697 hectáreas les fueron entregadas —a través de procesos de pertenencia—, a igual número de personas y agropecuarias, que han recibido en promedio, cada una, 4.500 hectáreas. En Puerto López (Meta), 10.000 hectáreas han sido entregadas con el mismo mecanismo. Y en Paz de Ariporo (Casanare), reporteros de este diario encontraron seis demandas próximas a fallar en las que particulares reclaman como suyas cerca de 3.500 hectáreas adicionales"[169].

Para precaver que este tipo de actuaciones continúen ocurriendo en un futuro, así como para remediar las posibles defraudaciones al patrimonio público que hayan tenido lugar, se estima necesario proferir el conjunto de órdenes estructurales que se explican a continuación. De la verificación del cumplimiento de este segundo grupo de órdenes también se encargará el juez de tutela de instancia, según prescribe la regla general contenida en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, aunque con la colaboración, vigilancia y valoración que efectúen la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, dentro de sus competencias constitucionales y legales. Lo anterior, atendiendo a que la problemática evidenciada con respecto a la clarificación y adquisición de los bienes baldíos reviste notoria importancia nacional.

i- Clarificación e identificación de los bienes baldíos del Estado:

El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), como entidad encargada de administrar en nombre del Estado las tierras baldías de la Nación^[170] y de clarificar su situación desde el punto de vista de la propiedad, con el fin de determinar si han salido o no del dominio del Estado^[171], adoptará en el curso de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, si aún no lo ha hecho, un plan real y concreto^[172], en el cual puedan identificarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en las cuales habrá de desarrollarse un proceso nacional de clarificación de todos los bienes baldíos de la nación dispuestos a lo largo y ancho del país. Lo anterior, con el objetivo de brindar certeza jurídica y publicidad sobre la naturaleza de las tierras en el país de una forma eficiente, sin tener que acudir en cada caso a un proceso individual de clarificación, el cual, como se observó en este expediente, no siempre resultar ser un mecanismo idóneo.

Copia del anterior plan de trabajo se enviará a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para que, dentro de sus competencias constitucionales y legales, evalúen los cronogramas e indicadores de gestión mediante un informe que presentarán al juez de instancia, en el transcurso del mes siguiente a la recepción del plan. De igual manera, la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional y la Presidencia de la República recibirán copia del plan propuesto por el Incoder y de los comentarios y sugerencias que formúen los órganos de control.

Una vez se acuerde y apruebe la versión definitiva del plan de trabajo, a más tardar dentro de los cinco meses siguientes a la notificación de esta providencia, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República vigilarán su cumplimiento y desarrollo, e informarán periódicamente al juez de instancia y a la Corte Constitucional de los avances o correctivos que estimen necesarios.

ii- Recuperación de las tierras baldías irregularmente adjudicadas mediante procesos de pertenencia:

La Superintendencia de Notariado y Registro, como entidad a cargo de la orientación, inspección y vigilancia de los servicios que prestan los Notarios y Registradores de Instrumentos Públicos[173], expedirá, dentro de las dos (2) semanas siguientes a la notificación de esta providencia, una directriz general dirigida a todas las oficinas seccionales en la que: a) explique la imprescriptibilidad de las tierras baldías en el ordenamiento jurídico colombiano; b) enumere los supuestos de hecho y de derecho que permitan pensar razonablemente que se trata de un bien baldío (por ejemplo que el bien no cuenta con antecedentes registrales o la sentencia se dirija contra personas indeterminadas); y c) diseñe un protocolo de conducta para los casos en que un juez de la república declare la pertenencia sobre un bien presuntamente baldío.

Adicionalmente, la Superintendencia de Notariado y Registro presentará al juez de instancia, dentro de los dos (2) meses siguientes a la notificación de esta providencia, un informe consolidado a la fecha sobre los terrenos baldíos que posiblemente hayan sido adjudicados irregularmente a través de procesos de pertenencia, de acuerdo a la información suministrada por sus oficinas seccionales. Copia de este informe deberá ser enviado, dentro del mismo término, al Incoder para que este adelante los procedimientos de recuperación de baldíos[174] a los que haya lugar. De igual manera, una copia se enviará a la Fiscalía General de la Nación para que investigue en el marco de sus competencias eventuales estructuras delictivas detrás de la apropiación ilegal de tierras de la Nación.

Dentro de los cinco (5) meses siguientes a la recepción del precitado documento, el Incoder deberá informar al juez de tutela de primera instancia, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República los avances en esta orden, especificando, por lo menos, el (i) número de procesos iniciados, (ii) fase en la que se encuentran y (iii) cronograma de actuaciones a ejecutar. Copia de este informe se enviará a la Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional.

iii- Seguimiento y control:

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en tanto órgano director de la política agraria nacional[175], prestará el acompañamiento debido al Incoder velando por la orientación, articulación institucional y evaluación de las órdenes impartidas. La Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República, dentro de sus competencias constitucionales y legales, harán seguimiento a las órdenes anteriores, evaluarán su cumplimiento y desarrollo, y tomarán los correctivos y decisiones a las que haya lugar. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la notificación de esta providencia, las referidas entidades presentarán un informe al juez de instancia referente a los avances en el seguimiento y control sobre las órdenes proferidas, con copia a esta Corporación y a la Presidencia de la República".

Auto del 1º de diciembre de 2015, proferido por el Magistrado Ponente de la sentencia T-488 de 2014.

Como resultado del informe presentado por la Contraloría, el Despacho del Magistrado Sustanciador procedió a dar traslado a las entidades concernientes, de varios interrogantes que surgían de la lectura del referido documento, con el fin de obtener elementos para mejor resolver. Para ello requirió, mediante providencia del 1º de diciembre de 2015, lo siguiente:

"Primero.- Solicitar al Juzgado Promiscuo de Familia de Paz de Ariporo, que en el término máximo de 10 días contados a partir de la notificación del presente Auto, informe a esta Sala de Revisión sobre todas las actuaciones y medidas adoptadas para verificar el cumplimiento de la Sentencia T-488 de 2014."

[illegible][illegible]

1. The first of these is the fact that the
2. Government has not been able to secure the
3. necessary funds to carry out its policy.
4. This is due to the fact that the
5. Government has not been able to secure the
6. necessary funds to carry out its policy.
7. This is due to the fact that the
8. Government has not been able to secure the
9. necessary funds to carry out its policy.
10. This is due to the fact that the
11. Government has not been able to secure the
12. necessary funds to carry out its policy.

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the President of the Senate, dated January 1, 1901. The letter is signed by William McKinley and is addressed to the President of the Senate, John A. Logan. The letter is a copy of a letter that was sent to the President of the Senate by the President of the United States.

[illegible]

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is assigned to the case. The investigator will then gather information about the problem and the people involved. This information will be used to develop a plan of action.

Segundo.- Ordenar a la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que, en el término de 10 días contados a partir de la notificación de esta providencia, presente un informe conjunto en el cual se detallen si a la fecha se ha dado acatamiento a lo ordenado en los numerales quinto, séptimo y octavo de la sentencia. El referido documento deberá determinar: (i) bajo qué términos se ha dado cumplimiento a las órdenes emitidas en la sentencia T-488 de 2014; (ii) el estado actual en el que se encuentra la construcción del inventario de bienes baldíos de la Nación, (iii) en el evento de que exista incumplimiento cuáles son las barreras que impiden lograr el acatamiento de la sentencia y que correctivos se han tomado o se piensan implementar y (iv) la relación de bienes baldíos presuntamente obtenidos mediante sentencia de prescripción adquisitiva del dominio que se han identificado, al igual que las medidas que se han adelantado para recuperarlos.

Tercero.- Proceda la Secretaría General a informar al Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, al Superintendente de Notariado y Registro, al Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, al Director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria – UPR, al Director del Incoder y a la Contraloría General de la República de lo decidido”.

5. Informes allegados en respuesta a la expedición del auto de fecha 1º de diciembre de 2015.

5.1. Primera respuesta del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder en liquidación)

El 10 de diciembre de 2015, la subgerencia de tierras rurales del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) presentó a esta Corporación un escrito en el cual informó que el Plan Nacional de Clarificación, ordenado en el numeral 5º de la parte resolutoria de la sentencia T-488 de 2014, se encuentra en etapa de revisión final para ser enviado a la Corte Constitucional y a los entes de control del Estado para su análisis.

AUTOS DE SEGUIMIENTO

Auto 222/16

La corte constitucional en auto de seguimiento Auto 222/16, señala que las entidades del gobierno nacional, encargadas con llevar acabo el **INVENTARIO NACIONAL DE BALDÍOS**, mediante el plan nacional de clarificación y recuperación de baldíos.

CRISIS ESTATAL EN RELACION CON LOS BIENES BALDIOS DE LA NACION-Solicitud de cumplimiento de sentencia T-488/14

SENTENCIA DE TUTELA-Garantía del cumplimiento

Las órdenes dadas por los jueces de instancia en las sentencias de tutela, así como las dictadas por la Corte Constitucional con ocasión de la revisión de dichos fallos, deben ser obedecidas. Por tal motivo, se ha establecido un esquema tendiente a garantizar el cumplimiento de los fallos de tutela. Tal diseño legislativo, contenido en el Decreto 2591 de 1991, es concordante con el espíritu de las normas superiores del ordenamiento jurídico; ya que no tendría sentido que en la Constitución se consagraran derechos fundamentales si no se diseñaran mecanismos por medio de los cuales estos fuesen cabal y efectivamente protegidos.

INCUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA-Conducta de suma gravedad

20

1. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. This includes a description of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical methods used to analyze the data. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a description of the findings, a comparison of the results with previous research, and a discussion of the implications of the findings. The final part of the report is a conclusion and a list of references.

2. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. This includes a description of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical methods used to analyze the data. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a description of the findings, a comparison of the results with previous research, and a discussion of the implications of the findings. The final part of the report is a conclusion and a list of references.

3. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. This includes a description of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical methods used to analyze the data. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a description of the findings, a comparison of the results with previous research, and a discussion of the implications of the findings. The final part of the report is a conclusion and a list of references.

4. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. This includes a description of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical methods used to analyze the data. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a description of the findings, a comparison of the results with previous research, and a discussion of the implications of the findings. The final part of the report is a conclusion and a list of references.

5. The first part of the report is a general introduction to the subject of the study. It discusses the importance of the problem and the objectives of the research. The second part of the report is a detailed description of the methods used in the study. This includes a description of the experimental design, the data collection procedures, and the statistical methods used to analyze the data. The third part of the report is a discussion of the results of the study. This includes a description of the findings, a comparison of the results with previous research, and a discussion of the implications of the findings. The final part of the report is a conclusion and a list of references.

Incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad porque: "(i) prolonga la vulneración o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia".

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS JUDICIALES-Es un imperativo del Estado social de Derecho

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Efectividad

El derecho a acceder a la justicia implica, para ser real y efectivo, al menos tres obligaciones: (i) la obligación de no hacer del Estado (deber de respeto del derecho), en el sentido de abstenerse de adoptar medidas que tengan por resultado impedir o dificultar el acceso a la justicia o su realización y de evitar tomar medidas discriminatorias respecto de este acceso; (ii) la obligación de hacer del Estado (deber de protección del derecho), en el sentido de adoptar medidas para impedir que terceros interfieran u obstaculicen el acceso a la administración de justicia del titular del derecho; y (iii) la obligación de hacer del Estado (deber de realización del derecho), en el sentido de facilitar las condiciones para el disfrute del derecho y hacer efectivo su goce.

FALLO DE TUTELA-Contenido/**ORDENES DE TUTELA**-Cumplimiento

Teniendo en cuenta el objetivo que persigue el recurso de amparo constitucional, es claro que las órdenes contenidas en las decisiones de tutela, dirigidas a la protección de los derechos, tienen que acatarse y cumplirse sin excepción. La autoridad o el particular que haya sido declarado responsable de la amenaza o violación, debe cumplir la orden encaminada a la protección de los derechos fundamentales en los términos que lo indique la sentencia y en el plazo allí señalado. El incumplimiento de la decisión conlleva una violación sistemática de la Carta. Por una parte, en cuanto frustra la consecución material de los fines esenciales del Estado, como son la realización efectiva de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta, el mantenimiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo, arts. 1° y 2°). Y por la otra, en cuanto dicha omisión contraría, además de las normas constitucionales que regulan la acción de tutela y el derecho infringido, también aquellas que reconocen en el valor de la justicia y en los derechos al debido proceso y al acceso efectivo a la administración de justicia, pilares fundamentales del modelo de Estado Social de Derecho

DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y EFECTIVO CUMPLIMIENTO DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES-
Jurisprudencia constitucional

El acceso a la administración de justicia no se agota simplemente en la posibilidad de acudir ante un juez con el objeto de plantear un problema jurídico, ni en su pronta resolución, sino que implica, también, que "se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico y se restablezcan los derechos lesionados".

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Corresponde al juez de primera instancia

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia excepcional para hacer cumplir directamente sus providencias

INCUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Desconoce la prevalencia del orden constitucional y realización de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica y cosa juzgada

CUMPLIMIENTO DE PROVIDENCIAS JUDICIALES-Alcance

La administración de justicia y, de manera especial, el juez que dictó la providencia judicial, no pueden ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse aún en contra de la voluntad de quien está llamado a ello, por medios coercitivos. El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en diversos ámbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el incumplimiento obedece a una situación objetiva, dada por los hechos y sólo por los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situación subjetiva, en la cual es relevante la culpabilidad de su autor.

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-Diferencias

FACULTADES PARA OBLIGAR ACATAMIENTO DE ORDENES COMPLEJAS DE UNA TUTELA-Competencia especial en cabeza de jueces para adoptar medidas que sean conducentes a fin de obtener una garantía real y efectiva de los derechos fundamentales que fueron protegidos en el amparo

ORDENES COMPLEJAS DE UNA TUTELA-Concepto

Para esta Corporación, las órdenes complejas son: "mandatos de hacer que generalmente requieren del transcurso de un lapso significativo de tiempo, y dependen de procesos decisorios y acciones administrativas que pueden requerir el concurso de diferentes autoridades y llegar a representar un gasto considerable de recursos, todo lo cual suele enmarcarse dentro de una determinada política pública".

ORDENES COMPLEJAS DE UNA TUTELA-Posibilidades que tiene el juez de prever los resultados de su decisión se reducen/**ORDENES COMPLEJAS DE UNA TUTELA**-Labor que ha de desplegar el juez en cuanto a la supervisión y control del cumplimiento de este tipo de órdenes, puede superar, con creces, la elaboración de la decisión misma

La Corte ha manifestado en relación con una orden compleja que: "las posibilidades que tiene el juez de prever los resultados de su decisión se reducen. La variedad de órdenes y actores que deben realizarlas, o la complejidad de las tareas impuestas, que pueden suponer largos procesos al interior de una entidad, obligan al juez de tutela a ser ponderado al momento de concebir el remedio, ordenarlo y vigilar su cumplimiento." El juez de tutela debe ser consciente de que cuando imparte una orden compleja su trabajo con relación al caso no se acaba con la sentencia, es más, suele comenzar en ese momento. La labor que ha de desplegar el juez en cuanto a la supervisión y control del cumplimiento de este tipo de órdenes, puede superar, con creces, la elaboración de la decisión misma. Éste es un factor que también ha de ser considerado por el operador jurídico, pues es uno de los aspectos de los cuales dependerá asegurar, efectivamente, el goce del derecho a las personas.

CRISIS ESTATAL EN RELACION CON LOS BIENES BALDIOS DE LA NACION-Documentos presentados en respuesta al requerimiento de la Corte no aportaron información detallada y suficiente sobre el cumplimiento, avance, retroceso o superación, de compromisos aceptados por Gobierno Nacional respecto a las órdenes proferidas en sentencia T-488/14

CRISIS ESTATAL EN RELACION CON LOS BIENES BALDIOS DE LA NACION-Entrega de programa metodológico, sin respectivos soportes que permitan observar evolución a través del tiempo no satisface bajo ninguna circunstancia la carga procesal de entregar la información requerida respecto a las órdenes proferidas en sentencia T-488/14

CRISIS ESTATAL EN RELACION CON LOS BIENES BALDIOS DE LA NACION-Informes presentados por mesa encargada de garantizar cumplimiento de sentencia T-488/14 no contiene insumos solicitados por esta

corporación para poder analizar el grado de cumplimiento de las órdenes estructurales de política agraria emitidas

CRISIS ESTATAL EN RELACION CON LOS BIENES BALDIOS DE LA NACION-Información allegada no cumple con requisitos de especificidad y claridad necesarios para evaluar el cumplimiento de las órdenes relacionadas en la sentencia T-488 de 2014

CORTE CONSTITUCIONAL-Asumir competencia para conocer del cumplimiento de la sentencia T-488/14

CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA SOBRE CRISIS ESTATAL EN RELACION CON LOS BIENES BALDIOS DE LA NACION-Solicitar a miembros que conforman la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488/14 informe unificado

CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA SOBRE CRISIS ESTATAL EN RELACION CON LOS BIENES BALDIOS DE LA NACION-Solicitar a Procuraduría General de la Nación y a Contraloría General de la República informes requeridos en numeral quinto de la sentencia T-488/14

ORDENES AUTO 040 DE 2017 SEGUIMIENTO DE LA SENTENCIA T- 488.

PRIMERO.- Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte días (20) contados a partir de la notificación de esta providencia incorporen al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia destinada a lograr la depuración, clasificación y digitalización tanto del archivo histórico del Incoder como de los documentos y resoluciones de titulación que reposan en el Archivo General de la Nación. Una vez finalizada dicha tarea deberán proceder a su inmediato registro.

Para ello deberán precisar el número de funcionarios o contratistas que se destinarán exclusivamente a adelantar la tarea encomendada por esta Corporación, al igual que las metas detalladas mes a mes en lo que respecta al avance esperado, hasta lograr la depuración de todos los archivos. Se aclarará que la depuración, clasificación y digitalización tanto el archivo histórico del Incoder como de los documentos de titulación que reposan en el Archivo General de la Nación, no podrán extenderse más allá del 1 de diciembre de 2017. De manera excepcional, podrá solicitarse una última y única prórroga de máximo 6 meses si los integrantes de la mesa interinstitucional de manera justificada y con proyecciones ciertas de costo horas-hombre justifican la imposibilidad de cumplir con la meta inicialmente establecida.

SEGUNDO.- Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte días (20) contados a partir de la notificación de esta providencia incorporen al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia destinada a lograr la migración de toda la información existente en el antiguo sistema registral.

Para ello deberán precisar el número de funcionarios o contratistas que se destinarán exclusivamente a adelantar la tarea encomendada por esta Corporación, al igual que las metas detalladas mes a mes en lo que respecta al avance esperado, hasta lograr la migración de toda la información existente. Se aclarará que la actualización de toda la información existente en el antiguo sistema registral no podrá extenderse más allá del 1 de diciembre de 2017. De manera excepcional, podrá solicitarse una última y única prórroga de máximo 6 meses si los integrantes de la mesa interinstitucional de manera justificada y con proyecciones ciertas de costo horas-hombre justifican la imposibilidad de cumplir con la meta inicialmente establecida.

TERCERO.- Incorpórese al Plan Nacional de Clarificación una ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes que sobre los cuales las autoridades de registro

o agrarias manifiestan la posibilidad de ser baldíos. En esta medida, ante la manifestación por parte de las autoridades agrarias en el marco de procesos de tutela o de prescripción adquisitiva del dominio de estar en presencia de un bien "presuntamente baldío" estas deberán activar una ruta administrativa prioritaria en la cual: (i) la ANT dentro del término de 20 días siguientes a dicha manifestación deberá iniciar el proceso de clarificación respecto del bien sobre el cual alega dicha naturaleza, (ii) dicho proceso deberá ser tramitado en el término máximo e improrrogable de 18 meses, (iii) de llegar a determinarse que el bien definitivamente es baldío procederá a garantizarse su inmediata adjudicación siempre y cuando se demuestre que el ocupante es un sujeto de reforma agraria que cumple con las condiciones para su adjudicación.

CUARTO.- Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que trimestralmente alleguen a esta Corporación un informe en el cual se identifiquen los avances de la ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes que sobre los cuales las autoridades manifiesten la posibilidad de ser bienes baldíos acatando los indicadores referidos en la parte motiva de esta providencia. En el referido informe deberá igualmente precisarse cuál es el avance en el cumplimiento de los indicadores contenidos en el Plan Nacional de Clarificación[49].

QUINTO.- Ordenar a las entidades que integran la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta providencia se presente a esta Corporación un informe detallado en el cual: (i) se establezca el costo aproximado que deberá ser asumido por cada una de ellas para lograr el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 desagregado año a año, (ii) se precise un cronograma de actividades respecto a las sub actividades que no fueron detalladas en el informe de fecha 5 de agosto de 2016 y (iii) se reporte un universo aproximado de metas en relación con cada una de las sub actividades presentadas por la ANT.

SEXTO.- Ordenar a la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de 20 días contados a partir de la notificación de esta providencia, allegue un documento en el cual precise ¿si las rutas jurídicas y metodológicas para la identificación de baldíos reconocen la posibilidad de legalizar baldíos simplemente mediante la inscripción de títulos? de ser afirmativa, dicha respuesta, deberán identificar ¿cómo pretenden las rutas ser armonizadas con las limitaciones legales y constitucionales existentes (tanto las actuales como las existentes desde el siglo pasado)?

SÉPTIMO.- Ordenar a la Procuraduría General de la Nación que trimestralmente allegue a esta Corporación un informe en el cual detalle el número, estado y sujetos respecto de los cuales ha adelantado actuaciones disciplinarias por el incumplimiento de las órdenes proferidas por esta Corporación. Este deberá desagregar las actuaciones que se han adelantado contra servidores públicos que han incumplido sus deberes tanto en la ejecución del Plan Nacional de Clarificación, como en la ruta prioritaria ordenada en esta providencia.

OCTAVO.- Teniendo en cuenta que las órdenes proferidas en esta decisión pueden llegar a impactar significativamente los presupuestos de la ANT, el Incoder, el IGAC, la Superintendencia de Notariado y Registro y demás entidades que conforman la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014, esta Corporación ordenará a las entidades estatales vinculadas a la mesa que adelanten las gestiones necesarias para garantizar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Departamento Nacional de Planeación adopten los respectivos correctivos presupuestales que permitan implementar las órdenes proferidas en esta decisión en el término establecido. En esta medida se dará aplicación a las reglas establecidas en el numeral 14 de esta providencia

NOVENO.- Poner en conocimiento del Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, del Ministro de Hacienda y Crédito Público, del Superintendente de Notariado y Registro, del Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, del Director de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria, UPRA, del Director del Incoder (en liquidación), del

Director de la Agencia Nacional de Tierras, del Procurador General de la Nación, del Contralor General de la República y del Defensor del Pueblo la presente decisión

"incorpórese al plan nacional de clarificación una ruta prioritaria destinada a lograr la normalización de los bienes que sobre los cuales las autoridades de registro o agrarias manifiestan la posibilidad de ser baldíos. en esta medida, ante la manifestación por parte de las autoridades agrarias en el marco de procesos de tutela o de prescripción adquisitiva del dominio de estar en presencia de un bien "presuntamente baldío" estas deberán activar una ruta administrativa prioritaria en la cual: (i) la ANT dentro del término de 20 días siguientes a dicha manifestación deberá iniciar el proceso de clarificación respecto del bien sobre el cual alega dicha naturaleza, (ii) dicho proceso deberá ser tramitado en el término máximo e improrrogable de 18 meses, (iii) de llegar a determinarse que el bien definitivamente es baldío procederá a garantizarse su inmediata adjudicación siempre y cuando se demuestre que el ocupante es un sujeto de reforma agraria que cumple con las condiciones para su adjudicación".

PETICIONES

- 1- **De haber certeza frente a la propiedad privada de las tierras del HATO ANTIGUO SAN JUAN BAUTISTA DE CISPATACA**, ordenar la apertura de la matrícula respectiva de la Escritura de venta del año 1847, que otorga María Josefa Torres Hoyos al señor Antonio Rodríguez de Torres conforme lo indica el artículo 48 de la ley 1579 de 2012.
- 2- De haber dudas acerca de la naturaleza de los bienes comprendidos dentro de los linderos contenidos en la escritura anexa proceder conforme lo establece el numeral 3 del auto 040 de 2017 de seguimiento de Sentencia T 488 de 2014, en razón que según el FMI No el predio "Caño Lindo", ubicado en la jurisdicción del Municipio de San Benito Abad- Sucre, identificado FMI No 347-185, y que se encontraría dentro de los antiguos linderos **del HATO ANTIGUO SAN JUAN BAUTISTA DE CISPATACA**, la presente oficina de registro inscribió una pertenecía tl como lo indica la anotación respectiva.

NOTIFICACIONES

En la dirección calle 18 no 18 No 24-57 Sincelejo- Sucre

EMAIL:ppaa44@hotmail.com

Con el acostumbrado respeto,



ABEL ALBERTO PEREZ PEREZ
CC NO 92.536.112 DE SINCELEJO
T. P NO 145.807 C.S.J

Sincé Septiembre 27 del 2017

Señor:
ABEL ALBERTO PEREZ PEREZ
Calle 18 No. 24-57
Sincelajo - Sucre

REF: Respuesta Derecho de Petición.

Cordial saludo.

MARIA ISABEL NAVARRO SANCHEZ, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 45.466 209 expedida en Cartagena, en calidad de Registradora de Instrumentos Públicos de éste círculo Registral, me permito dar respuesta a su Derecho de Petición en los siguientes términos:

PRIMERO: En cuanto lo solicitado por petición presentada por el Doctor **ABEL ALBERTO PEREZ PEREZ**, Abogado en ejercicio. Le manifestamos que la escritura anexada es ilegible y no aporta los datos registrales como Libro Tomo Folio Partida y el Año, datos que son esenciales para la búsqueda de este registro en nuestra base de datos de antiguo sistema.

SEGUNDO: en cuanto si del mencionado predio los linderos colindan con ciénaga, ríos, playones, arroyos, quebradas, y playas. No es procedente la apertura de matrícula según Ley de baldíos 1579 del 2012(Artículo 57) parágrafo 12. Por lo que debe subsanar ante la agencia nacional de tierras la entidad competente en estos casos presentados.

Atentamente.


MARIA ISABEL NAVARRO SANCHEZ
Registradora Oficina de Registro de Instrumentos Públicos
Seccional de Sincé- Sucre



Superintendencia de Notariado y Registro
Calle 26 No. 13-49 Int. 201 - PBX (1)328-21-21
<http://www.supernotariado.gov.co>
Oficina de Registro Seccional Sincé - Sucre
Calle 7 No. 11-06 Tel. 2895607-
email: ofregissinc@supernotariado.gov.co

Al Señor juez civil de pro.

59

4

Manuel Aranda agente de
bienes desamortizados del 1.^o Circulo, a N. de
Que para acreditar que en la Hacienda
Chipataca situada en la jurisdiccion de
Benito Oban de la propiedad del. Don
Antonio Rodriguez de Latone, se redimio en el
no nacional el capital de mil ochocientos
reales y siete pesos veinte centavos ftes, espero que
Al se sirva disponer que por el notario p
co de la provincia Don Cipriano Testante, se
libre testimonio de la certificacion expedida
el Don Antonio de com. a fue de esta provin
cia Don Vicente Garcia en fha 31 de Ma
de 1853 con insercion de la Bolita en que
acredita haberse pagado el derecho de rep
ra que vhe sus efectos en el expediente especia
que se sigue por esta agencia sin reditos que
adeuda el mismo Don Antonio Rodriguez
Latone del capital de ochocientos pesos imp
en su lugar en las tierras de Chipataca
para a favor de la bienes que fueron a
Hospitales de Caridad - Cantayana Oban
26 de 1853

Manuel Aranda



Chargado civil de la provincia - Ca
tayan Verintuete de 1853
Corro fide -



Atestado
Don Cipriano

inmortal S^r Notario de la M^a C^a

la C^a -

Utarica

U

Utarica

Y luego le entregó una copia

Utarica

Declaro que se devien a la tra. Orecules

Utarica

En 9 de ... del 863. di testimonio de este escrito y de la
Certif^{ca} que en el se encuentra corresponde a la hacienda Cipata
ca y en requi al S^r Mant. Amador de impedim^{to} y mandato pi
dual -

Utarica

U

11 avo 9. De S. Benito Abad, a favor de las ventan. Del Colegio Nacional de esta Ciudad, queda cancelada.
Esta fante. Este testimonio, y estorquido, y perpetuamente, el honor. Si quisiera enjundado, a virtud de lo dispuesto.
Los Anticuarios de la Ley de veinte y uno de Mayo de mil ochocientos ochenta y dos, otros Ambrosio,
y viviendo esta diligencia, en todo tiempo, de espaldas, y enseguida para todo evento. Segun cuenta de la Confesion, Abad, y
el Sr. Adm. ^{on} priv. De Armas, con fecha treinta y uno de Mayo, mismo mes, y año, y fante con la Abad, y acordada haberse de

friedas con la denominacion del Estado de San Juan Bautista de Guipataca a qui por antano las tabananas de la Candelaria, plan del Estado que alli existio, con este nombre, i diez i siete caballerias de tierras del monte que nombran de Canos, con mas otras cuatro caballerias de tierras de a cincuenta fanegas cada una en los Cayos i Cefitas de las lomas que nombran de Barranca cuyos linderos i demarcaciones son de las del Estado de San Juan Bautista de Guipataca, tabananas de los Camelleros, tabananas altas i bajas, i playones que corren por el intermedio entre el rio de San Jorge i el rio que nombran de Pedro Miguel, y de los rios de las referidas tabananas altas, y de la parte del monte se confinan con los Cefitos de la Antigua villa por la del monte, y solo sitimo linderos el referido rio de San Jorge, por la del norte la raya del Arroyo de masamucos que desagua en la ciénega de Tapua, campos del mismo Guipataca, a salir al dicho rio de San Jorge, por la parte del este i medio del monte, y de cada parte, guetas de tabanana alta i referidos playones, con el monte de Canos, siguiendo por la parte de la Candelaria i Maldonado a la boca del Arroyo del monte de Canos dicho, i desde alli hasta la boca del caño que nombran de San Gregorio que sale del referido rio de San Jorge, y confinan con el expresado caño de Pedro Miguel, comprendiéndose los playones que nombran del engendro que confinan con la parte de arriba de la boca del caño grande que sale del rio de San Jorge, i de las aguas a la ciénega, i al referido caño de Pedro Miguel, i de aqui a playa blanca, corriendo hasta

(6)



GOBIERNO DEPARTAMENTO DE VALLE DE UCAIA

Año económico de primero de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y seis a treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete

La ceca que llaman de Caimito, Los Natchillos de
pataca, la pieza i San Sebastian de Buenavista
pertenecientes al referido Estado grande de San Juan
de Guapataca, se hallan situados i establecidos en el
cañon de sabana que linda por la parte del oriente
con la referida ciemga de Guapataca, por la del occiden-
te con la ceca del monte que llaman de Arellano,
por la del norte con las cecas que llaman de Caimito,
i por la del sur con la nombrada ceca del Arroyo
de Mucunases, cuyo cañon se sabana con las cecas
que quedan designadas por su denominacion por propia
i comprendidas dentro de los límites de dichos Estados.
Las cuatro caballerías de tierra nombradas de las lomas
de Barranco, dan principio desde los plantanos de la
tembladera corriendo al oriente hasta el principio de
la ceca del Guarumal, incluyendo los campos de las
expresadas plantaciones de la tembladera, de una y otra
parte, la ceca que nombran de Caimito que pasa de
dichas lomas i fenese en la ciemga de Guapataca, sepa-
rada de los dos montes de Camous i Arados por la
parte del norte con las sabanas referidas de la tembladera,
aguas claras, plantano grande, i el Guarumal i por la
parte del sur a medio día con las sabanas que nombran
de Arellano i la de Buenavista. Que todas las expresi-
das tierras pertenecen a la Señora en poder de su hijo
ser la heredad entre otros bienes de la Señora que difunta
Refirida madre, i esta de por ante pasados como comprados

Yo el coronel D. D. de regencia se agrega a esta Deliberacion i firman el Sr. Don Pablo Rodriguez
de Salazar en representacion del Censatario en termino de San Juan de Guapataca, de la Provincia de la Guayana, y el Sr.
Don Manuel de la Peña, tesorero del Colegio eracional, como Censatarios, con cargo de girar este instanti, en
Cartagena a nueve de Junio. Donat Urbanez autor en carta y etc. on 1846

157
didas en los bienes del Señor Maestro de Campo,
Don José Fernando de Mier y Guerra, quien las
hubo por haber comprado las primeras a Don Juan
Ferdinando Esteban y Garrido por escritura que a su favor
otorgó en la antigua villa de Santa Cruz de Mompox,
ante Don Antonio Solano de León escribano real
el día primero de Junio del año de mil seiscientos
sesenta y uno, y las últimas a Don Gabriel Camacho
en el año de mil seiscientos cincuenta y ocho por
escritura otorgada ante Don José de Perea alcalde
ordinario de la villa de San Benito Abad, cuyos
datos veritos he tenido a la vista y el presente escribo
uno de que doy fe, de los cuales así como de ejecución
real y real provisión de amparo expedida por la
antigua real audiencia de Santa Fe a seis de
Noviembre de mil seiscientos sesenta y cinco por ante
el Doctor Don Ignacio José de la Rocha, Secretario
de cámara de dicha real audiencia, consta no
solo la propiedad y posesión de las referidas tierras, si
no también los linderos y demarcaciones que que-
dan relacionados: que en tal virtud la nombrada
Señora Reabel de Hoyos de Ambrecht, su poderdante
ha poseído dichas tierras por suyas propias con solo
los gravámenes que se expresarán, y en todo caso
libres de empeño, deuda, obligación ni hipoteca espe-
cial ni general que no la tengan como lo asegura y ha-
vende al referido Señor Antonio Rodríguez de Latorre
con todas sus cabanas, altas y bajas, felaynes, pastos



SEÑALADO CUARENTA Y OCHO REALES Y CINCUENTA

Año económico de primero de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y seis a treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete

2

47

abrevaderos, aguadas, caminos, puertos, entradas y salidas, usos y costumbres, vertientes, pertenencias y servidumbres, cuantas y tienen y les corresponden de hecho y de derecho, y en otras cualquier manera les puedan corresponder, y por cantidad de siete mil ochocientos nueve pesos seis reales cuartos y terminas. cuatro mil ochocientos nueve pesos seis reales que sobre de las tierras están y quedan empacadas y puestas a favor de los interesados que se expresaran por el orden siguiente. Dos mil trescientos nueve pesos seis reales correspondien les a las rentas de la Obisporia del segundo Distrito establecida en estas Ciudades sobre las tierras del Hato de San Juan de la Guapaca en primero y unico lugar. una mil y dos sobre las tierras de Guapaca la vieja en primero y lugar a favor de la casa de Beneficencia de esta misma Ciudad. una mil y quinientos pesos en segundo lugar sobre las expresadas tierras de Guapaca la vieja a favor de expellania que pertenece a la Iglesia parroquial de esta villa de Corozal, por cuyos capitales ha de otorgar el comprador reconocimiento en forma en esta misma escritura, obligandose al pago de sus rentas a pagar de un cinco por ciento al año que por i cosecha de su cuenta desde el citado dia veinte y uno de Mayo de mil ochocientos cuarenta, en adelante, a mantener las tierras labradas y cultivadas para seguridad a los

capitales i reditos, i a observar i cumplir las cláusulas
i condiciones de sus respectivas imposiciones primarias
como si fuesen incertezas: i los tres mil pesos restan-
tes que ha entregado de contado en moneda de plata
usual i corriente, i recibió la Señora, su poderdanta
ta desde la fecha estipulada en el convenio incorpo-
rado en esta escritura, de cuya suma ha confiado
entregada a su voluntad, renunciando decir lo contra-
rio, la exención i leges del dinero no contado, su frue-
ta i demás del caso. Mediante lo cual ha desis-
to hasta del derecho, acción, propiedad i señorio
que a dichas tierras tenía, i todos cuantos le pertenec-
can, los cede renuncia y trasfiere al comprador i
en quien su causa i derecho hubiere, que en señal de
procción i para título de ella, además de la que ya
tiene real i corporal, otorga a su favor esta escritura
por la que ha de ser visto habiéndola adquirido, sin
que necesite de otro acto de aprehension de que le re-
leva; siendo condicion expresa de este contrato que la
Señora vendedora no queda sujeta a la acción
de saneamiento de la venta por ninguna diferen-
cia que se pucite en cuanto a la obra i estension
de las tierras segun las demarcaciones relacionadas,
porque no las conoce i sobre ellas se refiere a los títulos
los antiguos que le han entregado, pero si en quan-
to a lo demás que deba ser de su cargo conforme
al derecho i a la naturaleza del contrato, en lo que

LIBRO CUARTO — VALLE DE SAN JUAN DE LOS RIOS

Año económico de primero de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y seis a treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete

63

ha convenido el comprador, aceptando la condicion como se espresara adelante. Porcionado de este instrumento y por Antonio Rodriguez de Latorre vecino de la villa de Corozal otorgo que acepto la venta que a mi favor tiene hecha de las tierras que quedan declaradas i deslindadas en los terminos i con las condiciones espresadas, reconocio impuestos i situados sobre las del Estado de San Juan Bautista de Huepataba dos mil, trescientos pesos pero reales en primero lugar a fenezguible a favor de las rentas de la Universidad del segundo distrito establecida en esta plaza: sobre las tierras de Huepataba la prefa un mil pesos tambien no redimible en primer lugar a favor de la casa de residencia de esta Ciudad, y un mil quinientos pesos en segundo lugar sobre dichas tierras de Huepataba la prefa a favor de capellanias perteneciente a la Real Audiencia de Corozal, a cuyos Tesoreros, i Cura, que actualmente son i en adelante fueren, i a las personas que legalmente los representaren, me obligo a dadas a pagarles sus respectivos reditos a razon de un censo por ciento al año, que son i corren de mi cuenta desde el veinte i uno de Mayo del año pasado de mil ochocientos cuarenta en adelante, a mantener las tierras en mejor estado de produccion para seguridad de los tales i reditos, i a observar i cumplir las condiciones de sus imposiciones primarias como en

insertas. Y ambos contrayentes declaran que el justo precio
i verdadero valor de la tierra vendida es la suma por
que ha sido celebrado este contrato, que en la fecha del
convenio no valian, asi como en la actualidad no va-
len mas ni menos, i en caso de que mas i menos
valgan del exeso i menos valor en cualquier cantidad
que sea se hacen gracia i reciproca donacion, pura,
perfecta, i irrevocable entre vivos con la insinuacion
i remuneracion necesarias sobre que renuncian el dere-
cho de insinuacion, i la ley primera titulo once libro
quinto de la Recopilacion que trata de la lesion, i los
cuentos que previene para pedir rescision del contra-
to, i suplemento del justo valor. ~~Impuestos~~ ~~de~~
esta Ciudad los Señores José Joaquín Torres Ferrero de
las rentas de la Universidad del segundo Distrito por el
capital de dos mil trescientas nueve pesos seis reales quin-
ta favor de las rentas de su cargo se reconocen en primer
y unico lugar sobre las tierras de San Juan Ban-
tita de Jilpapatán i ~~rentas~~ redimible. Manuel Fernan-
dez Dorado Ferrero de la Casa de Beneficencia de
esta Ciudad por el de un mil pesos que en primer
lugar se reconocen tambien i ~~rentas~~ redimible a fa-
vor de dicho establecimiento sobre las tierras de Jilpa-
patán la vieja, i como apoderado del Presbítero
Señor Patricio José Benito cura parroco actual de la
villa de Corazal segun consta del poder que en pri-
mero de Abril de mil ochocientos cuarenta i cinco
otorgó ante el Señor Juez Letrado de aquel circuito
Doctor Fermín Morales, i testigos, que le está suscri-
tado con fecha diez i seis de dicho mes i año ante el
Escribano público del mismo de esta plaza Señor ~~Excmo~~



SELO QUINTO VALOR REAL DE LA AUDIENCIA

Año económico de primero de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y seis a treinta y uno de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete

(64)

49

Dn^o José Cañowares, cuyo documento para legitimación en su persona existe y se agrega a continuación, por el fin principal de un mil quinientos pesos que el segundo larguero bien se reconocen sobre las mismas tierras de Tumbacoa tal y como a favor de la misma perteneciente a la Santa Iglesia parroquial de la villa de Conchal, en los mismos términos, dijeron: Que consienten en la enajenación de los terrenos dichos reconocen por el título al comprador Antonio Rodríguez de Salazar, por cada uno con respecto a los dichos terrenos hacia el día de hoy uno de Agosto de mil ochocientos cuarenta y siete la vendedora Señora Isabel de Hoyos de Tumbrecht y sus hijos por el nominado por Antonio Rodríguez de Salazar de los terrenos desde aquella fecha hasta el día de hoy de la misma villa del presente año, firmados en favor de ambos el dicho curso de pago y finiquito de ellos en fe de lo dicho y en fe de que así sea verdad y seguridad de la misma. Por cumplimiento de lo relacionado y para se obligan respectivamente con sus hijos y sucesores a dar y pagar a la dicha Santa Iglesia parroquial de la villa de Conchal el precio de dichos terrenos de la villa de Conchal que se agrega a continuación y en el presente documento y el Embargo del mismo día se conoce, así lo dijeron,

H. Herz zu Meinen

Atto 2.º

Have had a very good day

27-10-20

Josephine L. L.

13



CA20580587

ESCRITURA PÚBLICA N° 15 de 7 de Mayo de 1847,
Notaria Primera de Cartagena. Tomo N° 2, Folios N°: 58 a
64, Consta de Ocho (8) Páginas

FOLIO N° 58

N° 15. Número Quince.

Venta: La señora Isabel de Hoyos de Imbrecht al señor Antonio Rodríguez de Latorre, una hacienda nombrada Zispataca por cantidad de 7.809 pesos 6 reales

En la ciudad de Cartagena, a siete de Mayo del presente año de mil ochocientos cuarenta y siete, ante mí, el infrascrito Escribano público del número y testigos que se nominarán, pareció el señor Doctor Manuel Pérez de Recuero, Abogado de ~~tribundistito~~ público

FOLIO N° 59 *Vecino esta ciudad y dijo el señor Lázaro María de Herrera*

Al señor Juez Civil de Provincia-
Manuel Amador, Agente de Bienes Desamortizados del 4° Circulo a usted digo: Que para acreditar que en la hacienda de Zispataca, situada en la jurisdicción de San Benito Abad de la propiedad del señor Antonio Rodríguez de Latorre, se redimió en el Tesoro Nacional el capital de mil ochocientos cuarenta y siete pesos veinte centavos fuertes, espero que usted se sirva disponer que por el Notario público de la provincia señor Andrés Estarita, se de libre testimonio de la certificación expedida por el señor Administrador de correos que fue de esta provincia señor Vicente García en fecha 31 de Mayo de 1855 con inserción de la boleta en que se acredita haberse pagado el derecho de (---Faltante---) que obre sus efectos en el expediente ejecutivo que se sigue por esta agencia por réditos que adeuda el mismo señor Antonio Rodríguez de Latorre, del capital de ochocientos pesos impuesto en primer lugar en las tierras de Zispataca la Vieja a favor de los bienes que fueron del Hospital de Caridad. Cartagena, Noviembre 26 de 1863.

Firma: Manuel Amador
Juzgado Civil de la Provincia. Cartagena, veintisiete de 1863.
Como pide.

Firman: Baena --- El Secretario, José M. Vives
Enseguida notifique al señor Manuel Amador en su casa

FOLIO N° 60

los Tribunales de la República, vecino de esta ciudad y dijo: Que el señor Lázaro María de Herrera, hoy vecino de la de Santa Marta, como apoderado general de su madre política la señora

minerva



LEGIS

Todos los
derechos.
Reservados

minerva





CA 20580588

Isabel de Hoyos de Imbrecht, vecina de la ciudad de Mompox, en veintiuno de Marzo de mil ochocientos cuarenta, celebró contrato de venta de las tierras de Zispataca, Zispataca la Vieja y Castillejo con el señor Antonio Rodríguez de Latorre, vecino de la villa de Corozal, en los términos que aparecen del convenio que en aquella fecha ajustaron, el cual se agrega original y su contenido a la letra es como sigue: -----

Aquí el convenio. Y habiéndose efectuado ya por el señor Herrera el arreglo de los censos y debiendo proceder conforme a lo pactado a formalizar la competente escritura, le ha conferido para ello poder al señor exponente en la ciudad de Santa Marta el día quince del próximo pasado mes ante el Escribano público del número de dicha ciudad señor Francisco Javier de Osuna, el cual exhibe, se agrega y su tenor es el siguiente. -----

Aquí el poder. En su consecuencia y asegurando como asegura que el poder inserto, que acepta no le está revocado, suspenso ni limitado en todo ni en parte, en la forma a que mejor haya lugar otorga: Que vende realmente y con efecto al nominado señor Antonio Rodríguez de Latorre, las indicadas tierras de Zispataca, Zispataca la Vieja y Castillejo situadas en el distrito parroquial de la villa de San Benito Abad, conocidas según resulta de los antiguos títulos de propiedad con la denominación de Hato de San Juan Bautista de Zispataca a que son anexas las Sabanas de la Candelaria, Plan del Hatillo que allí existió con este nombre, y diecisiete caballerías de tierra del monte que nombran de Canoas; con más otras cuatro caballerías de tierras de a cincuenta fanegas cada una en los cayos y cejitas de las lomas que nombran de Barranca, cuyos linderos y demarcaciones son a saber: Las del Hato de San Juan Bautista de Zispataca, Sabanas de la Candelaria, sabanas altas y bajas y playones de ciénaga que intervienen entre el río de San Jorge y el caño que nombran de Pedro Miguel y las divide de las referidas Sabanas altas por la parte del occidente confinan con los (---faltante---) de la antigua villa; por la Oriente, es su legítimo lindero el referido río San Jorge; por la del Norte, la ceja del arroyo de Manzanares que desagua en la ciénaga de Agua limpia del mismo Zispataca, a salir al dicho río de San Jorge; por la parte del Sur, o medio día lindan los expresados pastos de Sabana alta y referidos playones con el monte de Canoas, siguiendo por la sabana de la Candelaria y Maldonado a la boca del arroyo del monte de canoas dicho, y desde allí hasta la boca del caño que nombran de San Gregorio que sale del referido río de San Jorge y se junta con el expresado

minerva



LEGIS
Todos los
derechos
Reservados

minerva



48
CA 20580589

cano de Pedro Miguel, comprendiéndose los playones que hombran del engordadero que confinan con la parte de arriba de la boca del caño grande que sale del rio San Jorge, y da aguas a la ciénaga y al referido caño de Pedro Miguel, y de aquí a playa blanca corriendo hasta -----

Habiendo consignado el señor José Pablo Rodríguez de Latorre, a nombre de su legítimo hermano el señor Antonio Rodríguez de Latorre, en la Administración principal de Correos de esta provincia el día diecinueve de Mayo próximo pasado, la cantidad de novecientos veintitrés pesos sesenta centavos fuertes, por un mil ochocientos cuarenta y siete pesos, veinte centavos fuertes que a rédito fijo de un cinco por ciento al año reconocía el referido señor Antonio Rodríguez de Latorre en la hacienda y tierras de Zispataca de su propiedad, situadas en la jurisdicción de la parroquia de San Benito Abad, a favor de las rentas del Colegio Nacional de esta ciudad, queda cancelada esta parte, este instrumento y extinguido perpetuamente el censo o gravamen expresado a virtud de lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto de la Ley de treinta y uno de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos, sobre arbitrios; sirviendo esta diligencia en todo tiempo de excepción perentoria para todo evento, según consta de la certificación librada por el señor administrador principal de correos, con fecha treinta y uno de Mayo próximo pasado que junto con la boleta que acredita haberse pa-----

FOLIO N° 61

la ceja que llaman de Caimito, los Hatillos de Zispataca la Vieja y San Sebastián de Buenavista pertenecientes al referido Hato Grande de San Juan de Zispataca, se hallan situados y establecidos en el cañón de Sabana que linda por la parte del Oriente con la referida ciénaga de Zispataca; por la del Occidente con la ceja del monte que llaman de Arellanos; por la del Norte, con la ceja que llaman de Caimitos; y por la del Sur, con la mencionada ceja del arroyo de Manzanares; cuyo cañón de Sabanas con las cejas que quedan designadas por su demarcación son propias y comprendidas dentro de los límites de dichos Hatillos. Las cuatro caballerías de tierras nombradas de las Lomas de Barranca, dan principio desde los pantanos de la Tembladera corriendo al oriente hasta el principio de la ceja del Guarumal, incluyéndose los cayos de los expresados pantanos de la Tembladera, de una y otra parte, la ceja que nombran de Caimito

que nace de dichas lomas y fenece en la ciénaga de Zispataca, separada de los dos montes de canoas y doradas; por la parte del Norte, con las sabanas referidas de la Tembladera, aguas claras, pantano grande y el Guarumal; y por la parte del Sur a medio día con las sabanas que nombran de Arellano y la de Buena Vista; que todas las expresadas tierras pertenecen a la señora su poderdante por haberlas heredado entre otros bienes de la señora su difunta legítima madre, y está de sus antepasados como comprendidas en los bienes del señor Maestre de Campo Don José Fernando de Mier y Guerra, quien las hubo por haber las comprado las primeras a Don Juan Teodoro Esteves y Garrido, por escritura que a su favor otorgó en la antigua villa de Santa Cruz de Mompoix ante Don Antonio Solano de León, Escribano real, el día primero de junio del año de mil setecientos sesenta y uno, y las últimas a Don Gabriel Camaño en el año de mil setecientos cincuenta y ocho por escritura otorgada ante Don José de Rissa, Alcalde (--Faltante--) de la villa de San Benito Abad, cuyos documentos he tenido a la vista yo el presente escribano de que doy fe, de los cuales así como de ejecutorial y real provisión de amparo expedida por la antigua real audiencia de Santafé a seis de noviembre de mil setecientos setenta y cinco por ante el Doctor Don Ignacio José de la Rocha, Secretario de Cámara de dicha real audiencia, consta no solo la propiedad y posesión de las referidas tierras, sino también los linderos y demarcaciones que quedan relacionados; que en tal virtud la nominada señora Isabel de Hoyos de Imbrecht su poderdante ha poseído dichas tierras por suyas propias con solo los gravámenes que se expresarán, y en lo demás libres de empeño, deuda, obligación ni hipoteca especial ni general que no la tienen como lo asegura y las vende al referido señor Antonio Rodríguez de Latorre con todas sus sabanas altas y bajas, playones, pastos, -----

gado el correspondiente derecho de registro se agrega a esta diligencia que firman en señor José Pablo Rodríguez de Latorre en representación del censatario su legítimo hermano el señor Antonio Rodríguez de Latorre, y el señor Manuel de la Peña, Tesorero del Colegio Nacional, como Censualista, con migo el presente Notario, en Cartagena a nueve de Junio de mil ochocientos cincuenta y cinco. -----

Firma: José Pablo Rodríguez de Latorre -----





CA 20580591

FOLIO N° 62

abrevaderos, aguadas, caminos, puertos, entradas y salidas, usos y costumbres, vertientes, pertenencias y servidumbres, cuantas tienen y les corresponden de hecho y derecho, y en otras cualquier manera les puedan corresponder; y por cantidad de siete mil ochocientos nueve pesos seis reales en estos términos: cuatro mil ochocientos nueve pesos seis reales que sobre dichas tierras están y quedan impuestos y situados a censo redimible a favor de los interesados que se expresarán por el orden siguiente (—Faltante—) dos mil trescientos nueve pesos seis reales correspondientes a las rentas de la Universidad del segundo distrito establecida en esta ciudad, sobre las tierras de Hato de San Juan Bautista de Zispataca en primeo y único lugar; un mil pesos sobre las tierras de Zispataca la Vieja en primer lugar a favor de la casa de Beneficencia de esta misma ciudad, un mil quinientos pesos en segundo lugar sobre las expresadas tierras de Zispataca la Vieja a favor de capellanía que pertenece a la iglesia parroquial de la villa de Corozal, por cuyos capitales ha de otorgar el comprador reconocimiento en forma en esta misma escritura, obligándose al pago de sus réditos a razón de un cinco por ciento al año que son y corren de su cuenta desde el citado día veintiuno de marzo de mil ochocientos cuarenta en adelante, a mantener las tierras labradas y cultivadas para seguridad de los capitales y réditos, y a observar y cumplir las clausulas y condiciones de sus respectivas imposiciones primarias como si fuesen insertas; y los tres mil pesos restantes que ha entregado de contado en moneda de plata usual y corriente, y recibió la señora su poderdante desde la fecha estipulada en el convenio incorporado en esta escritura, de cuya suma la confiesa entregada a su voluntad, renunciando decir lo contrario, la excepción y leyes del dinero no contado, su prueba y demás del caso. Mediante lo cual la desiste, aparta del derecho, acción, propiedad y señorío que a dichas tierras tenía, y todos cuantos le pertenecen, los cede, renuncia y traspasa en el comprador y en quien su causa y derecho hubiere, que en señal de posesión y par título de ella, además de la que ya tiene real y corporal, otorga a su favor esta escritura por la que ha de ser visto haberla adquirido, sin que necesite de otro acto de aprehensión de que le releva; siendo condición expresa de este contrato que la señora vendedora no queda sujeta a la evicción y saneamiento de la venta por ninguna diferencia que se suscite en cuanto a el área y extensión de las tierras según las demarcaciones relacionadas,

minerva



LEGIS
Todos los
derechos
Reservados



porque no las conoce y sobre ellas se refiere a los títulos antiguos que le ha entregado; pero si en cuanto a lo demás que deba ser de su cargo conforme a derecho y a la naturaleza del contrato, en lo que -----

FOLIO N° 63

ha convenido el comprador, aceptando la condición como se expresará adelante, y cerciorado de este instrumento, yo Antonio Rodríguez de Latorre, vecino de la villa de Corozal, otorgo: que acepto la venta que a mi favor viene hecha de las tierras que quedan declaradas y deslindadas en los términos y con las condiciones expresadas; reconozco impuestos y situados sobre las del Hato de San Juan Bautista de Zispataca dos mil trescientos nueve pesos seis reales en primero y único lugar a censo redimible a favor de las rentas de la Universidad del segundo distrito establecida en esta plaza; sobre las tierras de Zispataca la Vieja un mil pesos también a censo redimible en primer lugar a favor de la casa de Beneficencia de esta ciudad; y un mil quinientos pesos en segundo lugar sobre dichas tierras de Zispataca la Vieja a favor de Capellanía perteneciente a la Iglesia parroquial de Corozal; a cuyos tesoros, y cura, que actualmente son y en adelante fueren, o a las personas que legalmente los representaren, me obligo a darles y pagarles sus respectivos réditos a razón de un cinco por ciento al año, que son y corren de mi cuenta desde el día veintiuno de Marzo del año pasado de mil ochocientos cuarenta en adelante; a mantener las tierras en mejor estado de producción para seguridad de (--Faltante--) tales y réditos y a observar y cumplir las cláusulas y condiciones de sus imposiciones primarias como (--Faltante--) insertas. Y ambos contrayentes declaran que el justo precio y verdadero valor de las tierras vendidas es la suma por que ha sido celebrado este contrato, que en la fecha del convenio no valían, así como en la actualidad no valen más ni menos, y en caso de que más o menos valgan del exceso o menos valor en cualquier cantidad que sea se hacen gracia y reciproca donación, pura, perfecta e irrevocable entre vivos con la insinuación y renunciación necesaria sobre que renuncian el derecho de insinuación, y la ley primera título once, libro quinto de la Recopilación que trata de la cesión, y los (--Faltante--) que prefine para pedir rescisión del contrato (--Faltante--) suplemento al justo valor. E impuestos de esta escritura los señores José Joaquín Torres, Tesorero de las Rentas de la Universidad del segundo distrito por el capital de dos mil





CA20580593

trescientos nueve pesos seis reales que a favor de las rentas de su cargo se reconocen en primero y único lugar sobre las tierras de San Juan Bautista de Zispataca a censo redimible: Manuel Fernández Dorado, Tesorero de la Casa de Beneficencia de esta ciudad, por el de un mil pesos que en primer lugar se reconocen también a censo redimible a favor de dicho establecimiento sobre las tierras de Zispataca la Vieja; y como apoderado del Presbítero Señor Patricio José Berrio, Cura párroco actual de la villa de Corozal, según consta del poder que en primero de abril de mil ochocientos cuarenta y cinco, otorgó ante el señor Juez letrado de aquel circuito, Doctor Fermín Morales, y testigos, que le está sustituido con fecha dieciséis de dicho mes y año ante el Escribano público del número de esta plaza señor Custo-----

FOLIO N° 64

dio José Cañaveras, cuyo documento para legitimar su personería exhibe y se agrega a continuación por el principal de un mil quinientos pesos que en segundo lugar también se reconocen sobre las mismas tierras de Zispataca la Vieja a favor de Capellanía perteneciente a la santa iglesia parroquial de la villa de Corozal, en los mismos términos dijeron: Que consienten en la enajenación de las referidas tierras, reconocen por (--Faltante--) al comprador señor Antonio Rodríguez de Latorre; por estar arreglada con respecto a los réditos vencidos hasta el día veintiuno de Marzo de mil ochocientos cuarenta, la vendedora señora Isabel de Hoyos de Imbrecht (--Faltante--) por el nominado señor Antonio Rodríguez de Latorre de los corridos desde aquella fecha hasta el día veintiuno de Marzo del presente año, formalizan a favor de ambos, el recibo, carta de pago y finiquito de ellos en (--Faltante--) o el documento más firme y eficaz que a su seguridad (--Faltante--). Y al cumplimiento de lo relacionado (--Faltante--) contrayentes se obligan respectivamente con sus (--Faltante--) y por haber conforme a derecho. En cuyo testimonio y habiéndose satisfecho el derecho de registro según consta de la boleta que se agrega a continuación los otorgantes a quienes yo el Escribano público del número doy fe conozco, así lo dijeron, (--Faltante--) y firman por ante mí, siendo testigos los señores Andrés de León y Viaña, Juan González y Manuel Joaquín Samper, vecinos presentes = testado = y uno = no vale =. -----

Firman: M. PEREZ DE RECUERO --- ANTONIO RODRIGUEZ DE LATORRE
JOSE JOAQUIN TORRES --- MANUEL FERNANDEZ DORADO --- JOSE VICENTE
LOPEZ -----

LEGIS

Todos los
derechos
Reservados

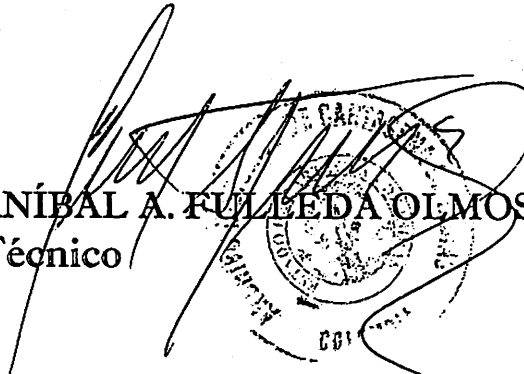


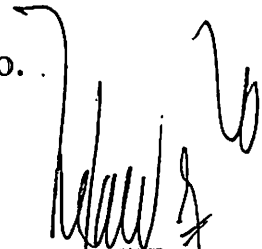
CA 20580594

Cartagena de Indias, 3 de Agosto de 2017

Transcripción realizada en el ARCHIVO HISTORICO DE CARTAGENA DE INDIAS. Consta de Ocho (8) Páginas.

Nota. (--Faltante--): Palabra (s) que por el Pésimo Estado del Documento, No fue posible su transcripción


ANÍBAL A. FULLEA OLMOS
Técnico

Vo. Bo. 
MOISÉS ALVAREZ MARÍN
Director 



LEGIS
Todos los
derechos
Reservados

NOTARIA UNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUESTA COPIA CONCORDA
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE SE TIENE EN LA CARTA

SELLO 1.

Vale dos reales.

Año economico de primer
ro de Setiembre de mil o
ochocientos cincuenta i dos
treinta i uno de Agosto
de mil ochocientos cin-
uenta i tres.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
LÓPEZ ESCOBAR
NOTARIA UNICA
COROZAL - SUCRE

En la Ciudad de Cartagena a siete de
mayo del presente año de mil o
ciento cuarenta i siete, ante mi
el infrascripto escriban publico del
Numero i testigo que se designa
varan, presento el Sr. Doctor
Alfonso Perez de Recreo abo-
gad de los Tribunales de la Repu-
blica vecino de esta Ciudad, i
dijo: Que el Sr. Lázaro Ma-
ría de Herrera, vecino de la de
Santa Marta, como apoderado fe-
rente de su madre politica la
Señora Isabel de Hoyos de Embudo
vecina de la Ciudad de Barranquilla,
en veinte i uno de marzo de mil ochocientos
cuarenta, celebró contrato
de venta de las tierras de Zinpatu-
ca, Zinpatuca la vieja i Canillejo
con el Sr. Antonio Rodriguez de
Latorre vecino de la villa de Coro-
zal en los terminos que aparecen
en el Convenio que en aquella
fecha ajustaron, el cual se agre-
ga original i su contenido a la
letra es como sigue: Los abasos
firmados Antonio Rodriguez de
Latorre i Lázaro Maria de He-
rrera, vecinos de esta Ciudad, he-
mos convenido i celebrado el con-

NOTARIA ÚNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:



Año económico de primer
ro de Setiembre de mil
ochocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Agosto
de mil ochocientos cin-
cuenta i tres.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
URIBE ESCOBAR
NOTARIA ÚNICA
COROZAL - SUCRE

putad, aqui, vera libre el con-
dutor para enajenar las tierras
a otro, i para el cumplimiento
de lo que llevamos estipulado,
firmamos dos de mi leon en
Corozal, marzo veinte uno
de mil ochocientos cincuenta

Lázaro M. de la Herrera - Ante
mis Rodriguez de Salazar - Y
habiendo efundado ya por el
Juan Herrera, el arreo de los
censos i debiendo proceder con-
forme a lo pactado a formalizar
en la Competencia Escritura
le ha conferido para ello, po-
der al Juan exponente en la ciu-
dad de Santa Marta, el día primo
del próximo mes, ante el
Escritano publico del número de
vieja ciudad, Juan Fran. Javier
de Olmos, el cual exhiba, se
agrega i en favor es el siglo.
Lázaro M. de la Herrera de este
veinte otorga: que en virtud
del poder que le es conferido

veinte y cinco de octubre de mil
ochocientos treinta y ocho, por
ante el Escribano Enigado Tur-
mai, que en copia se ha pre-
senta al amiel infrascripto de que
doi fe, Confieso poder especial
para que el Sr. Doctor y Don. C.
Pablo de Riquelme del vecind de Car-
tas, para que en Representaci-
on de la dicha Señora Ysabel de
Hoyos, proceda al otorgamiento de
señalamiento con las condiciones legal-
es para el dicho Antonio Rodri-
guez de Saborre de las tierras nom-
bradas en el expediente que le han sido
vendidas y por lo mismo en la beni-
ficia mencionada, se den por
recibidos de la Contrata, del Contrata-
do con expresa comunicacion de
alegares o Contrarios, con la obli-
gacion de sancion los efectos rela-
tivos en cualquier otro de la
causa, ha cesado el caso con
fianza de que quieto y pacifico po-
sion y que de no verificarse
la dicha venta, devolverá la
suma recibida con los de ley

1/0

200

ela
par
an
la
m
ed
de
i
u



SELLO 1.
Vale dos reales.

Año económico de primer
ro de Setiembre de mil o-
chocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Agos-
to de mil ochocientos cin-
uenta i tres.

NOTARIA UNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
DUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
URIBE ARCE
NOTARIA UNICA
COROZAL - SUCRE

Costas i gastos que deban ser
tendidos tales exigencias i re-
quisitos, cuya prueba defiere de
de ahora en adelante por ante
con relevancia de otro alguno
de regimien. Que el Poder que
para lo relacionado, en anexo in-
cidente i deficiente se regimien
ese mismo comienza al
expresado don D. Manuel Pe-
rez del Rincón con toda confi-
anza, libre, franca i general para
nuestro cargo cumpliendo
obligar bienes de su con-
tado, habido i por haber con
el propio termino i renuncia
a los fines de su favor, ha-
la presente conforma. Por cuyo to-
minio así lo otorga en esta ci-
udad de Santa Marta a quince
de Abril de mil ochocientos
cincuenta i siete. Yo el favor otor-
gante aqui yo el Escribano don
Jefe, concurra así lo visto, otorga i
firma por ante mi en este mi

Martin Avendaño viene. Le pago
 el dos de refectorio segun la boleta
 con la inserta. Que asi es
 mismo de la segunda con cuatro
 del Sr. Juan Lazaro. Maria He
 rera le pago cuatro reales
 derechos de refectorio de su poder
 especial que debe obligar para
 venta de unas tierras Santa
 Maria Abasco prima de mi ocho
 cuartos. Que asi es. Que el Sr. Juan
 Lazaro M. Herrero y la co
 muna de Ormaiztegui. Le pague
 con el poder especial que
 comprende para ante mi y oyo
 real queda en el primer refectorio
 de Ormaiztegui de mi cargo en el
 presente con agua de refectorio.
 Y para entregar el interesado he
 escrito en este pliego papel
 ocho cuartos en primer folio en
 verso y este verso y primo en verso
 el dote en la presente de mi
 oyo. Hay un verso y verso
 de Ormaiztegui. Que asi es.



SELLO 1.

Vale dos reates.

Año económico de primer
ro de Setiembre de mil
ochocientos cincuenta y
a treinta y uno de Ago
ro de mil ochocientos
cuenta y tres.

Para el libro de registro i an-
taman del canto de contraltos
al folio ocho, vuelto se
libro de registro del presente ano
hoi dia cuatro del mes de mayo
del ano de mil ochocientos

le prima-
de mil
entaillos
de Agos-
ntos un-

reunidos i cubren el muro a guisa
de un Conocimiento i aseguran
do como aseguran que el Peron
inserto que se puse en la obra re-
voca y anula en lo limitado en
la obra en parte en la persona
mejor bella lugar otorgado. En
venda realente i con efecto al
nombrado como Patrono de la
~~ciudad~~ ciudad de San Juan de los
de la ciudad las indicadas como
donde se halla y se halla la
i en el caso de la obra de la
para el uso de la villa de San
Benito y de la ciudad de la
reserva de los antiguos de la
piedra con la denominacion del
hato de San Juan de los
hato de San Juan de los
cabaneros de la obra de la

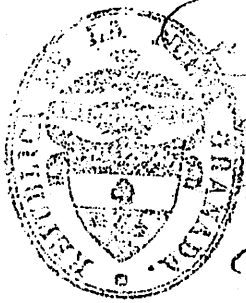
NOTARIA DUEÑA
DE CORRAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA CONCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE SE TIENDE A LA VISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
URIBE ESCOBAR
NOTARIA UNICA
COROZAL - SUR

del Hatillo que allí existe con este
nombre, y diez y siete Caballe-
rias de tierra del monte que son
gran de Cañas, con mas, och^o
Acas de Caballeros de tierra de
acimienta fangas cada una
en los callos y cepitos de los
lomas que nombran de Barran-
ca fangos y lomas y lomas
con el nombre de del Hato de
San Juan. La de Jimata de
vamos de la Candelaria. Caba-
nos otros y bajos y playones de
tierra que es en la zona entre
los de los (con lorge) el Ca-
ño que nombran de Pedro Mi-
guel, que los divide de los ~~de los~~
de los cabanos. Alta por la

que, para las ciudades de las
cabañas. Altas por la
parte del Occidente confinan con
las ciudades del antiguo Villa: por
la del Oriente, de en el lugar de
en el lugar de San Jorge, por
la del lado de los cerros de
cerros que abundan en la ci
cuerda de San Jorge del que
en el lugar de San Jorge del que
de San Jorge del que del que

En el mes de Octubre de 1880
 en la ciudad de San Francisco de
 Asis, a las 10 de la noche, se
 celebró una reunión de los
 señores don Juan de la Cruz
 y don Juan de la Cruz, y se
 acordó lo siguiente:



Vale dos reais.

Año económico de primer
ro de Setiembre de mil
ochocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Agosto
de mil ochocientos cin-
cuenta i tres.

NOTARIA UNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:

25 ENE 2013

QUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA.

REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGEL MARIA
URIBE ESCOBAR
NOTARIA UNICA
COROZAL - SUCRE

que llaman de Urechans. Por la
del norte con la Cofa que llaman
de Urechans. i por la del sur con
la mencionada Cofa del Urechans de
marraneros. Entre Casas de
cabana con las Cofas que que-
dan designadas por sus caracte-
risticas, las primeras i comprendidas
dentro de los límites de Urechans
las cuatro Caballerías de
comunidad de las bonas de
Taram. Las primeras donde la
pendiente del Urechans, corre
hacia el sur hacia el campo
de la Cofa del Urechans, incluy-
endo a la Cofa de los espados,
montañas de la Cofa. De una
i otra parte, la Cofa que corre
hacia de Urechans, que i nace de
Urechans, con su financia la Cofa
de la Cofa del Urechans, separadas de
los montes de Cauas i de
Cauas, por la parte del sur con
la cabana referida de la Cofa
de la Cofa. El Urechans, con
la Urechans, i por la parte



SELLO

Vale dos reales.

Año económico de primer
ro de Setiembre de mil o
chocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Ago
to de mil ochocientos cin
uenta i tres.

Sabemos que nombran de estruendo
i las de buena vista: que todas
los expresadas tierras pertenecen
al doctor en medicina por ha
berlas heredado entre otros bienes de
la tierra su difunto legítimo her
edero i este de sus antepasados
Como comprados en los bienes
del doctor Juan de Campo Don
Jose Fernando de Villan i Guerra,
quien las hubo por haber com
prado las primeras a Don Juan
Sebastian de Villan i Guerra por su
critura que a su favor otorgó en
la antigua villa de Santa Cruz
de Monroy, ante M^{te} Antonio So
lano de San Sebastian real, el día
primero de Junio del año de mil
ochocientos sesenta i uno; i las
últimas a M^{te} Gabriel Carrasco
en el año de mil ochocientos die

NOTARIA UNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGELA ESCOBAR
UNIBESCOBAR
NOTARIA UNICA
COROZAL SUCRE

nito Abad), siendo documento he
 tenido a la vista y el presente lo
 entiendo de que los se de los cua
 les así, como del expediente i
 real provision de compra expresi
 da y de la antigua real audiencia
 de Santa fe a saber: en virtud de
 lo cual se leen y se dan a conocer
 por parte de D. Juan de los Rios
 de la Rocha, letrado de Real Audiencia
 de Santa fe real audiencia, donde
 se leen y se dan a conocer de los
 señores señores, con tambien los
 señores demarcaciones y el mismo
 relacionados: que en tal virtud la
 mencionada Real Audiencia de
 Santa fe, en poderante a
 poseer dichos bienes por cosas
 propias y en tal virtud, en
 grande y poderosa de la Audiencia
 libre de compra, de la Audiencia
 de Santa fe, en virtud de lo



SELLO 1.º

Vale dos reales.

Año económico de primer
de Setiembre de mil o
cientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Ago.
de mil ochocientos cin
uenta i tres.

NOTARIA UNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
URIBE ESCOBAR
NOTARIA UNICA
COROZAL - SUCRE

...segunda vez vendida al repinto
...Antonio Rodriguez de La
...con todas las pertenencias
...bajas, flayones, frutos, abrevade
...ros, agnados, caminos, frutos, etc.
...todas i calidas, uno i ochocientos
...virtuales, pertenencias i certidum
...breas ecientes tienen i les co.
...responder de hecho i de derecho
...en otra cualquier manera les
...pueden corresponder i por can
...tidad de mil mil ochocientos
...nove pesos, seis reales i ochocientos
...avos. Cuatro mil ochocientos
...nove pesos seis reales i ochocientos
...dichas tierras, ceton i quince
...impuestos i otros a cargo de
...miles a favor de los interesados
...que se expresaron por el art.
...vigentes: Dos mil trescientos
...treinta pesos seis reales i ochocientos
...dientes a las rentas de la Univer
...sidad del equino. Ocho setenta

primero i único lugar: un mil
puros sobre las tierras de Zispat
tando la vista en primer lugar
a favor de la casa de benefici
cuna de esta misma Ciudad;
en mil i quinientos puros en
segundo lugar, sobre la expro
piación de las tierras de Zispatando la
vista a favor de Capellania
que pertenece a la Iglesia pa
roquial de la Villa de Coro
bal, por cuyos Capatales ha
de otorgar el comprador re
conocim^{to} en forma de este mis
mo Escritura, obligándose al
caso de sus réditos a razón
de un cinco por ciento al an
no por i corresponden en
cual de los citados die veinte
i uno de marzo de mil ochoc
ientos cuarenta en adelante,
a mantener las tierras labradas
i cultivadas para seguridad
de los Capatales i réditos i
abrir i cumplir lo...



SELLO 1.

Vale dos reales.

Año económico de prime-
ro de Setiembre de mil o
chocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Ago-
sto de mil ochocientos cin-
uenta i tres.

NOTARIA UNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA

REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGEL MARIA
URIBE AZCUBAR
NOTARIA UNICA
COROZAL - SUCRE

respectivas inscripciones priva-
rias como si fuesen insertas:
i los tres rubros firmados
que ha entregado de contado
en moneda de plata unal i
corro, i recibida la tra en
poderante desde la fecha
estipulada en el convenio
incorporado en esta Escritura, de
cuya suma la compañía entre-
gada a su voluntad, renunciando
de lo contrario, la expiración de
los diez años en contado, en pre-
sencia i demas del caso: mediante
lo cual la desiste i aparta
del derecho, a su propiedad i
dominio que ha dichas tierras a
tenido, i todos en autos de su
vez con los edos, renunciando
para el comprador i en quien
en su nombre o sucesores,
quien sea de posesión i para
titulos de ellos, ademas de lo
que ya tiene real i corporado,
no de lo que...

este de otro acto de aprobación
de que se refiere, siendo condici-
on expresa de este contrato que
la ~~tercera~~ ^{tercera} ~~quedadora~~ ^{quedadora} no queda
sujeta a la evicción i saneamiento
de esta venta ~~por~~ ^{por} ~~ninguna~~ ^{ninguna} diferen-
cia que se suelte en cuanto a
la ~~tercera~~ ^{tercera} i ~~alocación~~ ^{alocación} de las
terras, según las ~~señalizaciones~~ ^{señalizaciones}
relacionadas, por que se
conoce i se ve en ellas
a los ~~titulos~~ ^{titulos} ~~antiguos~~ ^{antiguos} que
se han entregado, pero si en quan-
to a los ~~terrenos~~ ^{terrenos} que deba ser de
su cargo ~~compromiso~~ ^{compromiso} i ~~derecho~~ ^{derecho}
a la naturaleza de los ~~contratos~~ ^{contratos}, en
lo en la ~~compra~~ ^{compra} ~~el~~ ^{el} ~~compra~~ ^{compra}
ellos, aceptando la ~~condición~~ ^{condición} ~~com-~~ ^{com-}
re expresará ~~adelante~~ ^{adelante}. Y ~~verificadas~~ ^{verificadas}
de este ~~Instrumento~~ ^{Instrumento}, por ~~Ante~~ ^{Ante}
los señores de ~~Salamanca~~ ^{Salamanca} ~~vecinos~~ ^{vecinos} de la
villa de ~~Corozaco~~ ^{Corozaco}, otorgo: Que a-
cepto la ~~venta~~ ^{venta} que ~~ambos~~ ^{ambos} ~~favor~~ ^{favor}
viene hecha de las ~~terras~~ ^{terras} que
quedan ~~declaradas~~ ^{declaradas} i ~~destinadas~~ ^{destinadas}
en los ~~terminos~~ ^{terminos} i ~~con~~ ^{con} ~~las~~ ^{las} ~~condicio-~~ ^{condicio-}
es de ~~las~~ ^{las} ~~recomendadas~~ ^{recomendadas}.

Año
ro de
ochoci
a tre
to de
quien



SELLO 1.º

Vale dos reales.

Año económico de primer
ro de Setiembre de mil
ochocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Ago
to de mil ochocientos cin
uenta i tres.

NOTARIA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA CONCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE SE TIENDE A LA VISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
URIBE ESCOBAR
NOTARIA
COROZAL - SUCRE

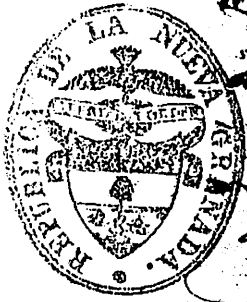
del y situado sobre los terrenos
de Don. Juan Antonio de Yagha
sancionados mil trescientos sesenta
y cinco pesos reales en primera
y única lugar, como redimible
a favor de las rentas de la ciudad
de Valledupar, sobre las
terras de Yaghatana de Yagha
un mil pesos, como a tener
redimible en primer lugar, a
favor de la Casa de Beneficencia
de esta ciudad, y un mil quin
ientos pesos en segundo lugar
sobre dichas tierras de Yaghatana
a favor de Capitanía
pertinentes al Gobierno por
quien de Corozal, como
terrenos, y como que son
con y en constante posesión de los
personas que legítimamente repre
sentan, me obligo a vender y
pagar los dos respectivos redim
e razón de un como por cada

en un de mayo del año pasado de
nuestro Señor. Conto - en
distancia, a mantener los tiempos
en el inferno de la primera
para segunda de la capital
los reinos, y a observar y
por las cláusulas y condiciones
de un imperio y fronteras co
mo si fueran insertas. Y ambos
contrayentes, declarando que el
precio y verdadero valor de las
tierras vendidas, es la misma
que ha sido celebrado este contra
to, que en el fecha del convenio
no valen, ni como en la actuali
dad no valen mas ni menos, y
en caso de que mas o menos
valgan, del exeso o menos valor
en cualquier cantidad que sea,
se hacen grandes y reciprocas do
naciones, y se hacen perfectas e irrevoca
bles entre vosos con la misma
quien y renunciacion necesaria
sobre que renunciaron el derecho
de la renunciacion, y la ley primera

Año
zo de
choc
a los
to de
cien

[illegible]

Año
ro de
choo
a tre
to de
opond



SELLO 1.º

Vale dos reales.

Año económico de primer
ro de Setiembre de mil o
chocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Ago
to de mil ochocientos cin
uenta i tres.

NOTARÍA PÚBLICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTÉNTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA

REPÚBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
URIBE ESCOBAR
NOTARÍA PÚBLICA
COROZAL - SUCRE

[Handwritten text in cursive script, mostly illegible due to fading and bleed-through. The text appears to be a legal document or a formal letter, possibly related to the notary's work.]

[illegible]

Am
ro de
choo.
a tre
to de
cuoni



SELLO 1.º

Vale dos reales

Año económico de primo:
ro de Setiembre de mil o-
chocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Agosto
to de mil ochocientos cin-
uenta i tres.

NOTARIA UNICA
DE COROZAL (SUCRE)
HACE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA
PUBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
JIRIBES OSOBAR
NOTARIA UNICA
COROZAL - SUCRE

Ante mi Cáceres, sobre el fin
español de Capitanía por sucesión
a favor de la Señal de sus
Cargos. La Señal de los
en las tierras de antiguos
reputados. Continuar de
esta por el presente y a
dote, hasta que se fante en
terminar de (determinar) este asunto,
presentando, exento, testimonios,
testigos, probanzas que vacan de
para obligar de donde se
hallaron en virtud de ellas
entente, i eiga cualquier
brazos, puros i artículos, nene,
jura fida termino, oiga auto
i continuos inter autorias i
definitivas, lo favorable coniente
i de lo aduado i perjudicial ape-
le, i eiga las apelaciones por lo
sus goados i instancias, eque
i gane superiores provisiones,
mandamientos de censuras i otros
1.º

expedidas las demas de la misma y
 sean necesarias, aunque no se
 expresen en el. Que el
 Poder que para lo relacionado
 en un tiempo, e incidentalmente dependiente
 se requiriera, sea mismo el de
 el Comandante al Señor Doctor
 Francisco Tomas Sarracino,
 con libre, franca y farent ad-
 ministracion, facultandolo para
 que pueda constituir en cual-
 quier otra persona de su con-
 fianza, y pueda revocar el
 constituto y nombrar otro, que
 todos guardando los Poderes
 e instituciones sobre dichos
 Cortes y gastos, segun derecho.
 Y a la observancia y cumpli-
 miento de todo lo suso y de lo
 que en la virtud de lo suso,
 se obliga como persona de bien,
 labio y por haber, con el Po-
 der, Comision y Nunciacion
 de leyes en su favor con la



SELLO 1.
Vale dos reales.

Año económico de primer
ro de Setiembre de mil o
chocientos cincuenta i dos
a treinta i uno de Agos-
to de mil ochocientos cin-
uenta i tres.

NOTARIA UNIDA
DE COROZAL (SUCRE)
DE LA CE CONSTAR:
25 ENE 2013
QUE ESTA COPIA COINCIDE
CON OTRA COPIA AUTENTICA
QUE HE TENIDO A LA VISTA
REPUBLICA DE COLOMBIA
ANGELA MARIA
URIBE ESCOBAR
NOTARIA UNIDA
COROZAL - SUCRE

Examinados adhibidos los referidos
go i firmados en este registro por
ante los testigos presentes
Don Bernando Parigad, Co
de Int. de Cruz e Gobierno
Corretor de la actuacion
Don M. A. Lopez y Don C. G.
Barra, no agregandose a
esta de registro por no ser
necesaria segun el paragrafo
segundo del art. 11. de la ley
de primario y punto de nulidad
cuanto anota i cuatro. Pa
Don Donato Torrellaria
Don Juan C. Ybarra Paré ante
Don Com. Cruz Letran del Circulo
Circulo fecha del rebo. Ser
nina Morales - Esta testimonio
es exacto i legal del poder
a que se refiere el cual
esta i queda en el registro de
Continuante i Continuaté publico
que esta es copia del inferior
he por Gato de Curibano.
i Apoyamiento de parte entera
cada lo que sea en esta dos

permanente y en los meses de
dos años debidos del Abril
de mil ochocientos Cuarenta
y cinco = Juan Morales = José
e María Torres Fran. Co. (Fran. Co.)
En la Ciudad de Cartagena a los
diez y dos días del mes del
Abril del corriente año de mil
ochocientos Cuarenta y cinco,
ante mí y testigos presentes el
Sr. Doctor Fran. Co. Domínguez
y notario y dgo. Que en virtud
de la presente que se le ha
hicieron el poder antecedente
los testigos y testigos que el
Sr. Doctor Manuel J. Dorado,
para que la ase y espere
en los mismos términos
que la ha sido confiado
y según las instrucciones
que le están comunicadas
relaciona y relata y asiste
según es fecho = Así
lo otorgó y firmó siendo
testigos los Señores Manuel
Gregorio Lora, Donifio Buitrago
los 11 de 11

SEÑOR

PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN.

E.S.D

REF QUEJA CONTRA SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS). JEFE DE LA OFICINA DE JURIDICA DE (AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (NATALIA ANDREA HINCAPIÉ CARDONA), PROCURADORA JUDICIAL 19 AMBIENTAL Y AGRARIA DE SUCRE (GLORIA DEL SOCORRO FLOREZ FLOREZ). DIRECTORA DE CORPOMOJANA (LILIANA QUIROZ AGUAS) PROCURADORA PROVINCIAL DE SINCELEJO, (ALINA ESTRELLA VARGAS) DIRECTOR SECCIONAL IGAC SUCRE (ARMANDO ANAYA NARVAEZ) REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL CIRCULO DE SINCÉ-SUCRE. (MARIA ISABEL NAVARRO SANCHEZ), por incumpliendo deberes funcionales en relación las órdenes impartidas por la Sala Quinta de la Corte Constitucional en la sentencia T 488 de 2014, mediante auto de seguimiento 040 de 2017.

ABEL ALBERTO PEREZ PEREZ, mayor de edad, vecino y residente en la ciudad de Cartagena, por medio del presente escrito pongo en conocimiento unas presuntas faltas disciplinarias por incumpliendo deberes funcionales en relación las órdenes impartidas por la Sala Quinta de la Corte Constitucional en la sentencia T 488 de 2014, mediante auto de seguimiento 040 de 2017, en relación estado de cosas inconstitucionales en relación la tenencia de la tierra en Colombia y que no es ajeno el Departamento de sucre, específicamente la sub región del San Jorge.

HECHOS

- 1- **EL SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS)**, quien es el encargado de llevar acabo los procesos administrativos agrarios, con la expedición de la resolución número 0992 de 2017 de fecha 26 de julio de 2017, habría incurrido en una serie de acciones y omisiones incurriendo en presuntas infracciones a ley disciplinaria.
- 2- Pretende convalidar a través de la resolución número 0992 de 2017 de fecha 26 de julio de 2017, una serie de irregularidades cometidas por los antiguos funcionarios de **INCODER- Territorial Sucre** como la ejecuciones de actos administrativos en procedimientos agrarios sin estar debidamente notificados.
- 3- En respuesta a una petición de fecha 15 de mayo de 2017, radicado 20173200183801, en el cual señala en el último parte que:

"En cuanto a la resolución final (0552 de abril de 2012 del **INCODER**), se aclara a la solicitante que la misma está en trámite de notificación".

- 4- No obstante, la no ejecutoria de la resolución el antiguo **INCODER**, habría ordenado inscribir en la **ORIP** del circulo de Sincé- Sucre y ordenar la recuperación de los predios diligencias que se afectaron el día 3 de junio de 2014, tal como costa en actas emanadas de la Inspección de Policía de San Benito Abad- Sucre, situación que es también de pleno conocimiento de la **PROCURADORA JUDICIAL 19 AMBIENTAL Y AGRARIA DE**

Personal

66



PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION
Radicado: E-2017-826665
Fecha: 10/10/2017 16:05:47
Folios: 98 Anexos: 77

SUCRE, pues conceptuó en la tutela radicada bajo el Numero 2017-00097-00 del Juzgado promiscuo del Circuito de Sincé y los accionantes aportaron las evidencias.

- 5- En informe anexo a la tutela la **PROCURADORA JUDICIAL 19 AMBIENTAL y AGRARIA DE SUCRE**, que a los que les corresponde denunciar las irregularidades eran a los accionantes lo que es, contrario a sus deberes como servidora pública tal como señala el artículo 34 de la ley **734 DE 2002**, específicamente en los numerales 1 y 24 que señalan:

“Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.

“Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley”.

- 6- De igual forma, **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS), PROCURADORA JUDICIAL 19 AMBIENTAL y AGRARIA DE SUCRE (GLORIA DEL SOCORRO FLOREZ FLOREZ) y LA DIRECTORA DE CORPOMOJANA (LILIANA QUIROZ AGUAS)**, tienen conocimiento de los continuos hostigamientos y daños ambientales que los miembro de las organizaciones campesinas efectúan en diversos predios de la región del San Jorge y los funcionarios se muestran pasivos frente a este tema.
- 7- En mayo 29 de 2017, el Gobierno Nacional expidió un nuevo de Decreto-Ley 902 de 2017, este contiene “medidas para facilitar la implementación de la Reforma Rural Integral contemplada en el Acuerdo Final en materia de tierras, ESPECÍFICAMENTE EL PROCEDIMIENTO PARA EL ACCESO Y FORMALIZACIÓN Y EL FONDO DE TIERRAS”.
- 8- A luz de este nuevo Decreto en su artículo 82 derogo expresamente el artículo 53 de la ley 160 de 1994 que señalaba:

Artículo 82. Vigencias y derogatorias. El presente decreto ley rige a partir de su expedición y deroga: el capítulo 4; el capítulo 5; el capítulo 8; el capítulo 10 artículos 49, 50 Y 51; el capítulo 11 artículo 53, artículo 57 incisos 2 y 3, párrafo del artículo 63, artículo 64; capítulo 12 artículo 65 inciso 4, artículo 69 incisos 1 y 2, artículo 71, artículo 73, párrafo 1 del artículo 74 de la ley 160 de 1994; y las demás normas procedimentales que contradigan el contenido del presente Decreto Ley.

TEXTO DERROGADO DEL ARTÍCULO 53

Contra la resolución que declare que sobre un fundo o parte de él se ha extinguido el derecho de dominio privado ~~sólo~~ proceden el recurso de reposición, dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación, y la acción de revisión ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en única instancia, según lo previsto en el numeral 8º. del artículo 128 del Código Contencioso Administrativo. Durante los quince (15) días siguientes a su ejecutoria permanecerá en suspenso la ejecución de la resolución que dicte el Instituto, con el objeto de que los interesados soliciten en dicho término la revisión de la providencia.

~~Si no se presenta la demanda de revisión en el término indicado, o si aquella fuere rechazada, o la sentencia del Consejo de Estado negare la revisión~~

demandada, el Instituto^{<1>} procederá a remitir a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente copia de las resoluciones que decretaron la extinción del dominio privado, para su inscripción y la consecuente cancelación de los derechos reales constituidos sobre el fundo.

Por otra parte, el mismo artículo 82 del Decreto 902 de 2017 deroga tácitamente y las demás normas procedimentales que contradigan el contenido del presente Decreto Ley.

9- Analicemos 76 del mencionado decreto ley:

Artículo 76. Recursos y control judicial. Los actos administrativos de los artículos 73 y 74 serán susceptibles de recurso de reposición y en subsidio apelación en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2363 de 2015. Frente a estos actos opera el control judicial ante la jurisdicción agraria mediante la acción de nulidad agraria de la que trata el artículo 39 del presente decreto ley. **NO HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN DE CONTROL DE NULIDAD DE QUE TRATA LA LEY 1437 DE 2011. LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL ARTÍCULO 75 NO PODRÁN SER OBJETO DE RECURSOS, NI DE LA ACCIÓN DE NULIDAD AGRARIA, NI DE LA ACCIÓN DE CONTROL DE NULIDAD DE QUE TRATA LA LEY 1437 DE 2011. LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA QUE LA DECISIÓN DE FONDO SERÁ TOMADA EN SEDE JUDICIAL.**

El artículo anterior contradice los textos de los numerales 9, 10, 12 del artículo 149 del C.P.A.C.A (**LA LEY 1437 DE 2011**) contradice el texto del artículo 76 decreto 902 de 2017.

De la nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.

De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.

De los de nulidad de los actos del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o de la entidad que haga sus veces, en los casos previstos en la ley.

10-La JEFE DE LA OFICINA DE JURIDICA DE (AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, (NATALIA ANDREA HINCAPIÉ CARDONA) y La PROCURADORA JUDICIAL 19 AMBIENTAL y AGRARIA DE SUCRE (GLORIA DEL SOCORRO FLOREZ FLOREZ), habrían emitido un concepto contrario a los artículos 39, 58, 75, 76, y 78 del decreto 902, en razón que manifestaron que contra la resolución número 0992 de 2017, había un mecanismo judicial ante la jurisdicción contenciosa administrativa citando normas derogadas y contrarias al prenombrado Decreto -Ley que se encuentra vigente.

11-LA PROCURADORA PROVINCIAL DE SUCRE, tiene conocimiento de las invasiones y afectaciones al medio ambiente a predios en el municipio de San Benito Abad – Sucre, de tales irregularidades en diversas quejas sin embargo no toma una decisión contundente ni ejemplarizante contra los servidores públicos del municipio de San Benito de Abad, que han generado tal estado de cosas.

12-EI DIRECTOR SECCIONAL IGAC SUCRE (ARMANDO ANAYA NARVAEZ), manifestó que nos la autoridad competente para realizar lo

pretendido en la tutela No 2017-00097-00, del **JUZGADO PROCUSCUO DE SINCE- SUCRE**, tal concepto es contrario al auto 040 de 2017, de seguimiento, para el cumplimiento de la Sentencia T 488 de 2014, que indica:

Respuesta del Instituto Geográfico Agustín Codazzi al auto 040 de 2017, de seguimiento, para el cumplimiento de la Sentencia T 488 de 2014

"El Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante escrito de fecha 27 de julio de 2016 puso de presente que le solicitó respetuosamente al Director del Incoder que por su conducto se dieran instrucciones a los gerentes técnicos de las áreas bajo su competencia, con el fin de garantizar mayor rigurosidad técnica para el manejo de la información que registran y manejan, dado que las entregas duplicadas de la información y la ausencia de unicidad de criterios en los datos remitidos han retrasado el análisis de la información.

Así mismo, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi afirmó que **NO POSEE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-488 DE 2014**, *sin embargo bajo el principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado y ante la necesidad de orientación técnica del Incoder para el cumplimiento de sus responsabilidades misionales en materia de baldíos y de las órdenes impartidas por la sentencia en mención, se ha brindado toda la colaboración en el marco de la disponibilidad institucional y de nuestras competencias*".

La anterior repuesta no fue admitida por la sala quinta de revisión que hace seguimiento a la cumplimiento de la tutela T 488 de 2014 que mediante auto 040 d 2017, el alto tribunal le llama la atención al Director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi,

"Para este Tribunal fue precisamente la falta de coordinación interinstitucional existente entre la autoridad de tierras, la Superintendencia de Notariado y Registro y el IGAC, lo que facilitó la pérdida de más de 1,200.000 hectáreas de la Nación. Y en esa medida es claro que el fin de las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-488 de 2014, buscan mediante la vigilancia rigurosa y el uso focalizado de los mecanismos sancionatorios que la ley establece (cumplimiento y desacato) superar la desidia e inacción institucional que en las últimas décadas ha reinado en las entidades encargadas de llevar el catastro y el registro de la propiedad rural en Colombia.

En esa medida, afirmaciones como las elevadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi mediante escrito de fecha 27 de julio de 2016 según la cual "**NO POSEE RESPONSABILIDAD ALGUNA EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA T-488 DE 2014**, *sin embargo bajo el principio de colaboración armónica entre las entidades del Estado y ante la necesidad de orientación técnica del Incoder para el cumplimiento de sus responsabilidades misionales en materia de baldíos y de las órdenes impartidas por la sentencia en mención, se ha brindado toda la colaboración en el marco de la disponibilidad institucional y de nuestras competencias*" **NO PUEDEN SER DE RECIBO PARA ESTA CORPORACIÓN**".

13-En la misma situación anterior se encuentra la **REGISTRADORA DE INDUMENTOS PÚBLICOS DE SINCE- SUCRE**, pues que mediante escrito radicado en la fecha septiembre 26 de 2017, se le indía en relación a una Escritura de venta del año 1847, que otorga María Josefa Torres Hoyos al señor Antonio Rodríguez de Torres del Hato de Juan Bautista de Zispataca, que hacia parte según el título de propiedad de la parroquia de San Benito Abad esta escritura se encuentra en archivo histórico de la ciudad de Cartagena de Indias Palacio de la Inquisición Protocolo Quince (15) Tomo 2

1. The first step in the process of identifying a problem is to define the problem. This involves identifying the symptoms of the problem and determining the scope of the problem. Once the problem has been defined, the next step is to identify the causes of the problem. This involves identifying the factors that are contributing to the problem and determining the underlying causes of the problem. Once the causes of the problem have been identified, the next step is to develop a plan to address the problem. This involves identifying the actions that need to be taken to address the problem and determining the resources that will be needed to implement the plan. Once a plan has been developed, the next step is to implement the plan. This involves carrying out the actions that have been identified in the plan and monitoring the progress of the plan. Finally, the last step in the process is to evaluate the results of the plan. This involves determining whether the plan has been successful in addressing the problem and identifying any lessons learned from the process.

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem that is being investigated. This is done by the investigator who is responsible for the study.

1. The first step in the process of the investigation is the identification of the problem. This is done by the investigator who is responsible for the study. The investigator must first identify the problem and then determine the scope of the study. The next step is to design the study. This involves determining the methods to be used and the data to be collected. The third step is to collect the data. This is done by the investigator who is responsible for the study. The fourth step is to analyze the data. This is done by the investigator who is responsible for the study. The fifth step is to interpret the results. This is done by the investigator who is responsible for the study. The sixth step is to write the report. This is done by the investigator who is responsible for the study. The seventh step is to present the results. This is done by the investigator who is responsible for the study. The eighth step is to discuss the results. This is done by the investigator who is responsible for the study. The ninth step is to conclude the study. This is done by the investigator who is responsible for the study. The tenth step is to publish the results. This is done by the investigator who is responsible for the study.

1. The first step in the process of identifying a problem is to recognize that a problem exists. This involves gathering information about the situation and identifying the specific issue that needs to be addressed.

100

[The page contains extremely faint, illegible markings.]

100

folios 58r-64-(65/72) estos libros pertenecen al Notaria primera Cartagena. A pesar que aporte copia de la Escritura Pública con su transcripción oficial con sus respectivas notas de registros marginales, omitió un deber funcional señalados en los artículos 6, 48 de la ley 1579 de 2012 y la orden en el auto al auto 040 de 2017, de seguimiento, para el cumplimiento de la Sentencia T 488 de 2014 en relación con la orden contenida en el numeral segundo que expresa :

Ordenar a los integrantes de la mesa interinstitucional para el cumplimiento de la sentencia T-488 de 2014 que en el término de veinte días (20) contados a partir de la notificación de esta providencia incorporen al Plan Nacional de Clarificación una estrategia de contingencia destinada a lograr la migración de **TODA LA INFORMACIÓN EXISTENTE EN EL ANTIGUO SISTEMA REGISTRAL.**

Para ello deberán precisar el número de funcionarios o contratistas que se destinaran exclusivamente a adelantar la tarea encomendada por esta Corporación, al igual que las metas detalladas mes a mes en lo que respecta al avance esperado, hasta lograr la migración de toda la información existente. Se aclarará que la actualización de toda la información existente en el antiguo sistema registral no podrá extenderse más allá del 1 de diciembre de 2017. De manera excepcional, podrá solicitarse una última y única prórroga de máximo 6 meses si los integrantes de la mesa interinstitucional de manera justificada y con proyecciones ciertas de costo horas-hombre justifican la imposibilidad de cumplir con la meta inicialmente establecida.

14-Así mismo, **EL SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS)** a pesar de conocer las ordenes existentes en relación con la creación de la ruta prioritaria incorporada al plan nacional de clarificación y de normalización de bienes presuntamente baldíos, por el numeral 3 del auto 040 de 2017, se niega a iniciar la clarificación de la escritura No 15 de 7 de mayo de 1847, de la Notaria Primera de Cartagena cuyos se encuentra en archivo histórico de la ciudad de Cartagena de Indias Palacio de la inquisición Protocolo Quince (15), Tomo 2 folios 58r-64-(65/72).

15-Pues sabe el funcionario de la **ANT**, que tal clarificación de la escritura No 15 de 7 de mayo de 1847, de la Notaria Primera de Cartagena, dejaría expuesto de forma clara las irregularidades en que incurrieron los antiguos funcionarios del INCODER, al deslindar terrenos en el municipio de San Benito Abad-Sucre sin contar con la información registral y catastral suficiente lo que violaría sin duda derechos de los particulares que poseen predios en el espacio geográfico descrito en dicho título.

16-En la página web, de la ANT en el enlace <http://www.agenciadetierras.gov.co/2017/06/02/cuatro-dias-despues-de-firmado-el-decreto-ley-de-tierras-arranca-barrido-predial-en-los-montes-de-maria/>, la entidad señala que empezó con la implementación del Decreto –Ley 902 de 29 mayo de 2017, ahora bien queda claro que tal normatividad se encuentra vigente, apartes de dicho comunicado señala:

“El Gobierno Nacional dio inicio al barrido predial como su gran apuesta de reforma rural integral y la implementación del punto uno del acuerdo de paz, con la intervención conjunta del Departamento Nacional de Planeación, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Instituto Agustín Codazzi y la Agencia Nacional de Tierras, para recolectar información física, jurídica, económica y social; que permitan resolver los conflictos sobre la tierra”.

17-En relación con la intervención en san Benito Abad- Sucre, ha sido sin participación de las entidades Superintendencia de Notariado y Registro, el

Instituto Agustín Codazzi tal como se evidencia en la tutela No 2017-00097-00, del JUZGADO PROCUSCUO DE SINCE- SUCRE, ninguna de estas entidades__aportaron insumos necesarios que permitieran recolectar informacion física, jurídica, económica y social de las áreas intervenidas.

En el ámbito de la aplicación del Decreto- Ley 902 de mayo 29 de 2017 y considerando que señora **SONIA MARÍA PEREZ MORALES**, es propietaria, de un predio denominado "**Villa Sonia**", ubicado en la jurisdicción municipio de san Benito – abad- sucre, FMI no 347-14143, de la ORIP del Circulo de Sincé – Sucre, el cual tiene una extensión de 100 hectáreas adquiridos mediante escritura pública No 1267 de la Notaria Única de Corozal- Sucre de fecha 27 enero de 1994, nunca fue vinculada al proceso de deslinde iniciado por el INCORA, no se derivaron sus derechos de los señores **CESAR TULIO PEREZ MORALES Y EDUARDO CONTRERAS**, sino como indica el respectivo folio la familia Martínez Pérez efectúa compra a la señora **SILVIA ANDREA DE ESCUDERO BARBOZA**, mediante escritura No 289 de la notaria de Corozal de fecha 14 de mayo de 1984, debidamente registrada los adquirentes fueron **CELSO NICOLÁS, ETIANETH MARIETA Y MIGUEL MARINEZ PÉREZ**, quienes eran los titulares de dominio del predio que hoy " Villa Sonia" para época en que se expidió la resolución la No 380 del 3 de abril de 1990, que ordeno iniciar el proceso de deslinde, el anterior acto administrativo ni las actuaciones administrativas no son oponibles a los nuevos adquirentes por las siguientes razones:

Conforme a lo ya señalado la resolución No 380 del 3 de abril de 1990, no es oponible ni produce efectos frente a los terceros adquirentes entre ellos la **SONIA MARIA PEREZ MORALES**, y concordante con lo expresado en el artículo 70 de la ley 1437 de 2011.

Notificación de los actos de inscripción o registro. Los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación. **Si el acto de inscripción hubiere sido solicitado por entidad o persona distinta de quien aparezca como titular del derecho, la inscripción deberá comunicarse a dicho titular por cualquier medio idóneo, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente anotación.**

Así mismo el artículo 73 de del C.A.P.C.A

"Publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio. Cuando, a juicio de las autoridades, los actos administrativos de carácter particular afecten en forma directa e inmediata a terceros que no intervinieron en la actuación y de quienes se desconozca su domicilio, ordenarán publicar la parte resolutive en la página electrónica de la entidad y en un medio masivo de comunicación en el territorio donde sea competente quien expidió las decisiones. En caso de ser conocido su domicilio se procederá a la notificación personal".

18-De igual forma el artículo 1 del decreto 902, de 29 mayo de 2017 indica que:

"El presente decreto tiene por objeto establecer medidas para facilitar la implementación de la reforma rural integral en materia de acceso y formalización de tierras. En aplicación del presente Decreto Ley se respetarán los derechos adquiridos y garantías constitucionales de los pueblos indígenas. Nada de lo dispuesto en el presente Decreto podrá ser interpretado ni aplicado en forma tal que afecte, menoscabe, disminuya o desconozca el derecho a la propiedad privada debidamente registrada, legalmente adquirida, legalmente adquirida y ejercida, y protegida por la Ley, como tampoco los derechos adquiridos. **Todos y cada uno de los procedimientos y fases procedimentales regulados en el presente Decreto deberán desarrollarse de manera que se otorgue la totalidad de las garantías constitucionales legales, en particular las del debido proceso, a quienes ostenten la propiedad privada de tierras dentro del territorio nacional, y serán nulas las actuaciones que desconozcan o reduzcan dichas garantías, de conformidad con la Constitución Política y la**

normatividad vigente. En todos los casos se respetarán los derechos adquiridos, la confianza legítima y la buena fe".

Lo anterior es concordante, 49 con el artículo de la ley 160 de 1994

Texto original de la Ley 160 de 1994: vigente en la época del procedimiento fue derogado por el decreto 902 de 2012.

ARTÍCULO 49. Para efectos de publicidad, la providencia que inicie las diligencias administrativas de Clarificación de la Propiedad, Deslinde o determinación de la Indebida Ocupación de Baldíos, será inscrita en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos correspondiente, si el predio se hallare inscrito, diligencia que tendrá prelación. A partir de este registro, el procedimiento que se surta tendrá efecto para los nuevos poseedores o adquirentes de derechos reales.

La solicitud, decreto y práctica de pruebas se ceñirán a lo dispuesto en los correspondientes Decretos Reglamentarios.

En estos procedimientos, así como en el de extinción del derecho de dominio sobre tierras incultas, se practicará una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos, si así lo solicitan los interesados y sufragán los gastos que demande la diligencia. En caso contrario, el Instituto⁴¹ dispondrá que se efectúe con funcionarios expertos de la entidad.

19-De los antecedentes registrales en el FMI No 347-14143, de la ORIP del Circulo de Sincé – Sucre del predio "villa Sonia" se evidencia que dichos antecedentes se remontan al año 1968, por tanto no era procedente crear una nueva matricula como lo ordeno de forma ilegal la resolución No la No 380 del 3 de abril de 1990, esta matricula paralela No 347- 8864 de la ORIP del Circulo de Sincé – Sucre, donde figura un predio denominado "Patio Bonito" sin ningún tipo de informacion catastral procedimiento que por la anterior la resolución final No 4936 de 5 de octubre de 1994 del procedimiento administrativo de deslinde podía ser recurrida tanto por la señora **SONIA MARIA PEREZ MORALES**, como por todos los adquirente de buena fe en cuyo folio aún no se ha inscrito las resoluciones No 380 del 3 de abril de 1990, ni la que culmino el procedimiento.

20-Otra irregularidad palpable es la que vislumbra la resolución que resuelve el recurso reposición presentado por la señora **SONIA MARIA PEREZ MORALES**, es decir la número 0992 de 2017 de fecha 26 de julio de 2017, es que **SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS)**, afirma lo siguiente:

"A su vez es importante destacar que es un hecho público y notorio que único ocupante del predio Caño Palomo fue el señor Cesar tulio Perez Morales, quien a su vez es hermano de Sonia María Perez de Martínez, o al menos tiene un parentesco cercano y que por ello es improbable que no se hubiesen tenido comunicación directa o través de otras personas mutuamente cercanas, acerca de la situación jurídica del predio que en caso del deslinde inicio en 1990 y concluyo en 1990. dados estos lazos de parentescos y el periodo de tiempo transcurrido entre el inicio y el final del deslinde doña Sonia pudo haber intervenido en defensa de sus derechos" (hoja No 4 resolución No número 0992 de 2017 de fecha 26 de julio de 2017).

Ante la primera afirmación de que "es un hecho público y notorio que único ocupante del predio Caño Palomo fue el señor Cesar tulio Perez Morales" es falsa en razón que los antecedentes registrales y catastrales del predio "Villa Sonia" que hace parte de la zona deslindada, muestran que para época en que inicia el deslinde eran los señores **CELSE NICOLÁS, ETIANETH MARIETA Y MIGUEL MARINEZ PÉREZ**, quienes eran los titulares de dominio del predio que hoy "Villa Sonia" que de acuerdo a la herramienta Geo Portal del IGAC posee una ficha

catastral número 706780000400020196000, que coincide con la registrada en el FMI No 347-14143, que como se dijo los antecedentes incorporados en el mismo folio se remonta a 1968, por tanto el funcionario pretende enmascarar una irregularidad aduciendo que el único ocupante era el señor Cesar tulio Perez Morales.

también es preciso manifestar **Subdirector de Procesos Agrarios de la Agencia Nacional de Tierras (GERMAN RÍOS ARIAS)**, dio por cierto un hecho no probado dentro del procedimiento administrativo es que acerca del posible parentesco entre Sonia maría Perez de Martínez, es no se prueba con la convicción íntima del fallador, sino que existe una prueba idónea en el ordenamiento legal colombiano que es registro civil, hecho que de todas maneras es superfluo e irrelevante puesto que una "comunicación entre parientes" no puede sustituir el procedimiento legal para vincular a los interesados en una actuación administrativa que para la época eran los artículos 44 y 45 el Decreto 01 de 1984.

"Deber y forma de notificación personal"

Modificado por el art. 2, Decreto Nacional 2304 de 1989 Las demás decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, o a su representante o apoderado.

Si la actuación se inició por petición verbal, la notificación personal podrá hacerse de la misma manera.

Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para hacer la notificación personal se le enviará por correo certificado una citación a la dirección que aquél haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o en la nueva que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se anexará al expediente. El envío se hará dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición del acto.

No obstante lo dispuesto en este artículo, los actos de inscripción realizados por las entidades encargadas de llevar los registros públicos se entenderán notificados el día en que se efectúe la correspondiente anotación.

Al hacer la notificación personal se entregará a la notificada copia íntegra, auténtica y gratuita de la decisión, si ésta es escrita.

En la misma forma se harán las demás notificaciones previstas en la parte primera de este código.

Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijará edicto en lugar público del respectivo despacho, por el término de diez (10) días, con inserción de la parte resolutive de la providencia".

21-Otra anomalía manifiesta es que el predio que identifican en la cartografía incorporada a la resolución No número 0992 de 2017 de fecha 26 de julio de 2017, con el FMI no 347-18758 y cedula predial No 000400020205000, corresponde aun predio denominado "Villa Mary" y no "Zispataca", sorprende además que a pesar que en este mapa hay informacion registral y catastral de los predios incluidos en el procedimiento administrativo de deslinde sorprende que no hayan advertido que la resolución la No 380 del 3 de abril de 1990, no se haya inscrito en la respectiva matricula de cada

de la ORIP del Circulo de Sincé – Sucre, donde figura un predio denominado "Patio Bonito), fin de no enterar del procedimiento a los titulares de dominio y que prenderían encubrir ahora los nuevos funcionarios de **AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS**.



22-Del mapa anterior de la herramienta geo portal, se nota claramente que el predio villa Sonia es atravesado por "Caño palomo" simplemente con haber consultado las panchas cástrales y cartográficas del IGAC, los funcionarios hubieran encontrado que todos los predios poseían informacion catastral y registral, situación que omitieron para proceder crear una matrícula paralela con un nombre distinto, practica irregular generalizada en todas las actuaciones administrativas de deslinde, lo cual deja sin oportunidad a los propietarios para ejercer su derecho de defensa puesto que ellos nunca se enteran de los procedimiento y no son nunca legalmente vinculados a actuación.

23-En lo referente, a la Resolución No 0552 de abril de 2012 del INCODER, los señores Moisés Rodríguez Villareal y Blanca Bohórquez de Contreras mediante escrito presentado el día 16 de diciembre de 2012, interpusieron recurso de reposición contra el acto administrativo prenombrado, sin embargo los funcionarios del antiguo Incoder, ordenaron su inscripción en matricula paralela y lo que es más grave procedieron a efectuar la recuperación sin resolver el recurso, por lo menos no haber notificado la respuesta la vigencia se efectuó el día 3 junio del 2014.

24-En la misma línea sigue los funcionarios, pues además de aparentemente encubrir a sus antecesores siguen con las misma practicas pues la **RESOLUCIÓN NÚMERO 0002 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017 NO**

1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's views on the state of the Union and the progress of the war.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1861.

3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy Department, dated January 15, 1862. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1861.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Treasury Department, dated January 20, 1862. It contains a detailed account of the financial operations of the Government during the year 1861.

5. The fifth part of the document is a report from the Secretary of the Interior Department, dated January 25, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861.

6. The sixth part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated February 1, 1862. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1862.

7. The seventh part of the document is a report from the Secretary of the Navy Department, dated February 5, 1862. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1862.

8. The eighth part of the document is a report from the Secretary of the Treasury Department, dated February 10, 1862. It contains a detailed account of the financial operations of the Government during the year 1862.

9. The ninth part of the document is a report from the Secretary of the Interior Department, dated February 15, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1862.

10. The tenth part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated February 20, 1862. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1862.

11. The eleventh part of the document is a report from the Secretary of the Navy Department, dated February 25, 1862. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1862.

12. The twelfth part of the document is a report from the Secretary of the Treasury Department, dated March 1, 1862. It contains a detailed account of the financial operations of the Government during the year 1862.

SIDO NOTIFICADA POR LOS MEDIOS LEGALES., es decir lo enunciado en los artículos 66 y 67 del C. P.A.C.A

“Deber de notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto. Los actos administrativos de carácter particular deberán ser notificados en los términos establecidos en las disposiciones siguientes.

Notificación personal. Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.

En la diligencia de notificación se entregará al interesado copia íntegra, auténtica y gratuita del acto administrativo, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo”.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos invalidará la notificación.

La notificación personal para dar cumplimiento a todas las diligencias previstas en el inciso anterior también podrá efectuarse mediante una cualquiera de las siguientes modalidades:

Por medio electrónico. Procederá siempre y cuando el interesado acepte ser notificado de esta manera”.

25-De la lectura de los artículos anteriores, se hace necesario resaltar que el señor SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS), en la **RESOLUCIÓN NÚMERO 0992 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017,** indico cual era el recurso que procedía y también debió señalar ante que autoridad debía interponerse el mismo en el numeral séptimo del aludido acto administrativo señalo que contra esa decisión no procedía ningún tipo recurso.

26-Por otra parte, la JEFE DE LA OFICINA DE JURIDICA DE (AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS), señala en repuesta de fecha 20 de septiembre de 2017, dentro de la tutela 2017-00097-00 del Juzgado Promiscuo de Sincé-sucre, que contra la resolución cabe la acción de nulidad y restablecimiento y acción de revisión ante el Concejo de Estado según del derecho contemplada en el artículo 149 del C.A.P.CA lo cual contradice el texto del artículo 76 del decreto 902 de 2017.

“Recursos y control judicial. Los actos administrativos de los artículos 73 y 74 serán susceptibles de recurso de reposición y en subsidio apelación en los términos previstos en la Ley 1437 de 2011, en concordancia con lo dispuesto en el Decreto 2363 de 2015. Frente a estos actos opera el control judicial ante la jurisdicción agraria mediante la acción de nulidad agraria de la que trata el artículo 39 del presente decreto ley.

NO HABRÁ LUGAR A LA ACCIÓN DE CONTROL DE NULIDAD DE QUE TRATA LA LEY 1437 DE 2011.

Los actos administrativos del artículo 75 no podrán ser objeto de recursos, ni de la acción de nulidad agraria, ni de la acción de control de nulidad de que trata la Ley

THE UNITED STATES OF AMERICA
DEPARTMENT OF THE INTERIOR
BUREAU OF LAND MANAGEMENT

WATER RESOURCES DIVISION
SALT LAKE CITY, UTAH
MAY 1964

TO: THE DIRECTOR, BUREAU OF LAND MANAGEMENT
FROM: THE CHIEF, WATER RESOURCES DIVISION
SUBJECT: [Illegible]

1. [Illegible]
2. [Illegible]
3. [Illegible]
4. [Illegible]
5. [Illegible]

6. [Illegible]
7. [Illegible]
8. [Illegible]
9. [Illegible]
10. [Illegible]
11. [Illegible]
12. [Illegible]

13. [Illegible]
14. [Illegible]
15. [Illegible]
16. [Illegible]
17. [Illegible]
18. [Illegible]
19. [Illegible]
20. [Illegible]

21. [Illegible]
22. [Illegible]
23. [Illegible]
24. [Illegible]

25. [Illegible]
26. [Illegible]
27. [Illegible]
28. [Illegible]
29. [Illegible]
30. [Illegible]
31. [Illegible]
32. [Illegible]
33. [Illegible]
34. [Illegible]
35. [Illegible]
36. [Illegible]
37. [Illegible]
38. [Illegible]
39. [Illegible]
40. [Illegible]
41. [Illegible]
42. [Illegible]
43. [Illegible]
44. [Illegible]
45. [Illegible]
46. [Illegible]
47. [Illegible]
48. [Illegible]
49. [Illegible]
50. [Illegible]

76

1437 de 2011. Lo anterior teniendo en cuenta que la decisión de fondo será tomada en sede judicial".

Por lo anterior, como el decreto 902 de 2017, modifica el procedimiento administrativo y judicial de la ley 160 de 1994, deroga expresamente el artículo 53 de la norma antes señalada y de forma tácita el artículo 149 de la ley 1437 de 2011, pues el mismo artículo 72 del Decreto – Ley 902 de 2017, señala que:

El presente decreto ley rige a partir de su expedición y deroga: el capítulo 4; el capítulo 5; el capítulo 8; el capítulo 10 artículos 49, 50 Y 51; el capítulo 11 artículo 53, artículo 57 incisos 2 y 3, parágrafo del artículo 63, artículo 64; capítulo 12 artículo 65 inciso 4, artículo 69 incisos 1 y 2, artículo 71, artículo 73, parágrafo 1 del artículo 74 de la ley 160 de 1994; y las demás normas procedimentales que contradigan el contenido del presente Decreto Ley.

27-Por último, la expedición de la resolución NÚMERO 0992 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2017, fue posterior al decreto 902 de 2017 y este entro en vigencia a partir de su expedición por lo que se aplica lo referente a los artículos 81 y 82 señalan que:

"Actuaciones Procedimentales en curso. Los procedimientos administrativos especiales agrarios que inicien a la vigencia del presente decreto ley, serán sustanciados y decididos en su integridad por las disposiciones contenidas en este. Sin embargo, para los Procedimientos Administrativos Especiales Agrarios en curso al tránsito de vigencia del presente decreto ley, la práctica de pruebas decretadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtir las notificaciones.

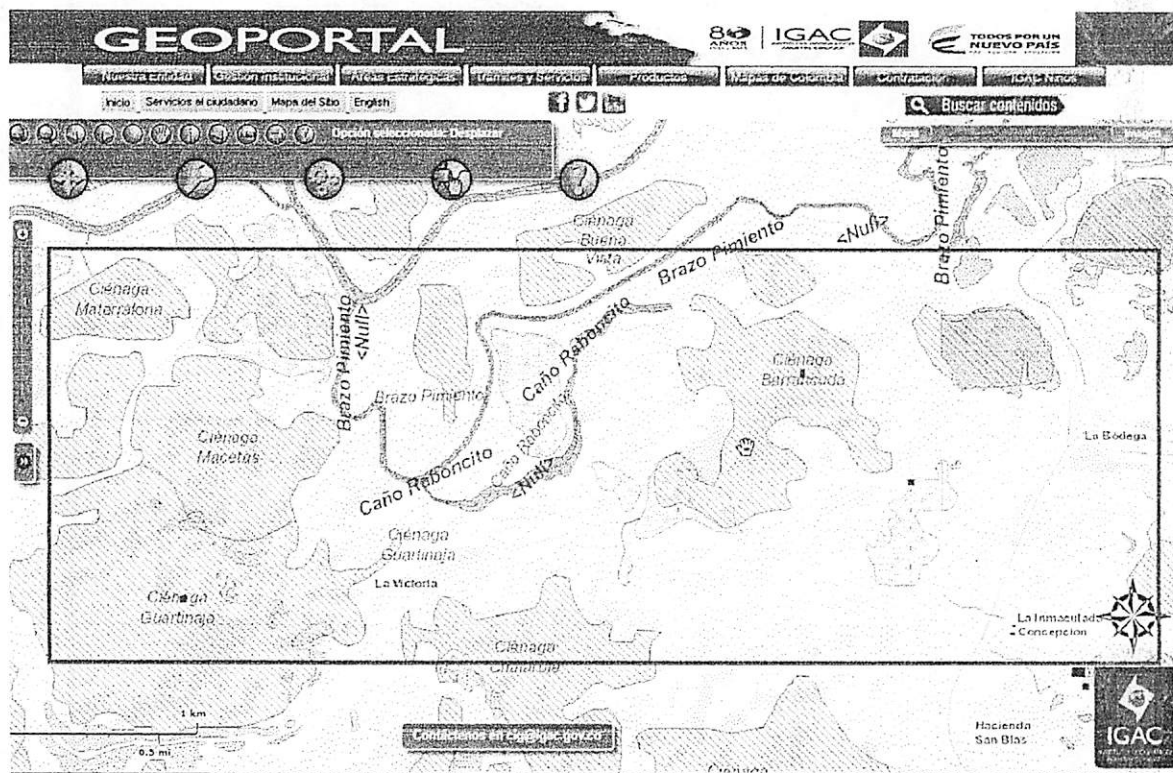
Parágrafo 1. Los procedimientos y actuaciones administrativas que hayan sido iniciados antes de la expedición del presente decreto ley y/o que se encuentren en zonas distintas a aquellas en las que se inicie la formulación del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con los artículos 40 y subsiguientes del presente decreto ley, continuarán su trámite hasta su culminación mediante el procedimiento vigente antes de la expedición del presente decreto ley. Los procedimientos y actuaciones administrativas en las que se inicie la formulación del respectivo plan de ordenamiento social de la propiedad rural de conformidad con los artículos 40 y subsiguientes del presente decreto ley, se tramitarán mediante el Procedimiento Único establecido en este.

Este artículo solo se refiere a los procesos administrativos, la fase judicial que entro en vigor es el consagrado en el artículo 75 y 76 el Decreto- Ley 902.

Decisiones y Cierre del trámite administrativo para los asuntos con oposición. Con relación a los asuntos indicados en los numerales 3, 4 Y 8 del artículo 58 del presente decreto ley en los que se presentaron oposiciones, así como los establecidos en los numerales 5, 6, 7 Y 10 el acto administrativo de cierre dispondrá la presentación de la demanda ante el juez competente en los términos del presente decreto.

Los actos administrativos del artículo 75 no podrán ser objeto de recursos, ni de la acción de nulidad agraria, ni de la acción de control de nulidad de que trata la Ley 1437 de 2011. Lo anterior teniendo en cuenta que la decisión de fondo será tomada en sede judicial.

28-Por último, la Registradora Instrumento Públicos del Círculo de Sincé-
habría inscrito una sentencia de pertenecia de pertenencia dentro del folio
FMI No 347- 185, correspondiente a un predio "caño Lindo" en que no se
especifica de manera clara los linderos que limitan con el rio san Jorge
antiguo caño "Pedro miguel" brazo del pimiento y la ciénaga de Guartinajas.



Por lo anterior expuesto solicito:

PETICIONES

- 1- Sírvase señor procurador, abrir la correspondiente investigación disciplinaria contra **SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS). JEFE DE LA OFICINA DE JURIDICA DE (AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS) PROCURADORA JUDICIAL 19 AMBIENTAL Y AGRARIA DE SUCRE (GLORIA DEL SOCORRO FLOREZ FLOREZ). DIRECTORA DE CORPOMOJANA (LILIANA QUIROZ AGUAS), PROCURADORA PROVINCIAL DE SINCELEJO, (ALINA ESTRELLA VARGAS) DIRECTOR SECCIONAL IGAC SUCRE (ARMANDO ANAYA NARVAEZ) REGISTRADORA DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DEL CIRCULO DE SINCÉ-SUCRE. (MARIA ISABEL NAVARRO SANCHEZ).**

- 2- Se me notifique el acto que absuelva o que archive la investigación en la dirección en la Cra 23 número 21-69 de Sincelejo- Sucre y al correo ppaa44@hotmail.com

ANEXOS

- 1- Respuestas en la acción de tutela No 2017-00097 del JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE SINCE- SUCRE, de las entidades LA OFICNA DE JURIDICA DE (AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS) PROCURADORA JUDICIAL 19 AMBIENTAL Y AGRARIA DE SUCRE (GLORIA DEL SOCORRO FLOREZ FLOREZ).DIRECTORA DE CORPOMOJANA (LILIANA QUIROZ)
- 2- FMI No 347-185, que corresponde a un terreno en la anotación número 10, en la ORIP del Circulo de Sincé- Sucre, se anotó sentencia de Pertenencia donde al parecer se habrían adjudicados terrenos en ciénagas los cuales salvo que haya derechos adquiridos son bienes son imprescriptibles.
- 3- Recurso de reposición contra resolución No 552 de fecha abril del 2012 , presentado el día 16 de noviembre de 2012, no se notificado un respuesta al recurso a los recurrentes sin embargo se baria ejecutado la resolución sin estar debidamente ejecutoriada,
- 4- Diligencia de recuperación de baldío Caño palomo sin estar ejecutoriada resolución No 552 de fecha abril del 2012 , presentado el día 16 de noviembre de 2012.
- 5- FMI No347- donde encuentra incita resolución de recuperación No 552 de fecha abril del 2012, sin estar debidamente ejecutoriada.
- 6- Respuesta escrita donde el SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (GERMAN RÍOS ARIAS), de fecha 15 mayo de 2017.

Atentamente

ABEL ALBERTO PEREZ PEREZ

CC NO 92.536. EXPEDIDA EN SINCELEJO

M~

79

408

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Territorio Sucre



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

6020/

Sincelejo,

Señores
Juzgado Promiscuo del Circuito
Carrera 9ª N° 11-96 Piso 2°
Sincé- Sucre

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI 19-09-2017 13:03
Al Contestar Cite Nr.:1702017EE2770-01 - F:1 - A:3
ORIGEN: Sd:753 - DIRECCION TERRITORIAL SUCRE/ANAYA NARVAE
DESTINO: PERSONA JURIDICA/JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO
ASUNTO: R/ EN LO REFERENTE A LAS PRETENSIONES EN QUE SE E
OBS:

Referencia: Acción de Tutela
Radicado N°: 707423189001-2017-00097-00
Accionante: Moisés de Jesús Rodríguez Villareal y Otros
Accionado: Agencia Nacional de Tierras-(ANT).

ARMANDO MANUEL ANAYA NARVAEZ, identificado con cedula de ciudadanía N° 10.875.583 de San Marcos-Sucre, quien obra en calidad de Director Territorial Sucre del INSTITUTO GEOGRAFICO "AGUSTÍN CODAZZI" (IGAC), Establecimiento Público del Orden Nacional, con domicilio principal en Bogotá D.C., NIT 899.999.004-9, regido por los Decretos 2113 de 1992, 208 de 2004 y 1551 de 2009, actuando de acuerdo con la delegación prevista en el numeral 1° del artículo 13 de la Resolución IGAC 196 del 2009, ante su despacho acudo con el fin de dar contestación al Oficio N° 0246 de fecha 13 de septiembre de 2017, por medio del cual requiere un informe sobre los hechos expuesto en la presente Acción de Tutela para lo cual expongo lo siguiente:

En lo referente a las pretensiones en que se efectuó el levantamiento topográfico de los linderos del Antiguo Hato de San Juan Bautista de Cispataca, en el municipio de San Benito de Abad, me permito informarle que el IGAC no es autoridad competente para realizar lo pretendido, como es la clarificación de la propiedad, deslindes, linderos y reconstrucción de estudios del sector. El IGAC tiene competencia para realizar sus procesos de actualización de la formación catastral, conservación catastral y actualización catastral contemplados en la Resolución N° 0070 de 2011.

El IGAC tiene como misión producir, investigar, reglamentar, disponer y divulgar la información geográfica cartográfica, agrologica, catastral, geodésica y de tecnologías geoespaciales para su aplicación en los procesos de gestión del conocimiento, planificación y desarrollo integral del País.

Por otro lado, aportamos las cartas catastrales del sector donde posiblemente se ubique el Hato de San Juan Bautista de Cispataca, y se puedan verificar que predios tomados catastralmente se encuentran incluidos en ese territorio.

IGAC
INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI
Territorial Sucre



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Señora Juez, así mismo el IGAC realiza acompañamiento y apoyo a los diferentes órganos y autoridades catastrales y de gobierno, cuando lo requieran; siempre y cuando este dentro de nuestra competencia.

ANEXOS

1. Copia de la Resolución de nombramiento de Director Territorial.
2. Copia del acta de posesión del Director Territorial
3. Copia de las cartas catastrales del sector Hato de San Juan Bautista de Cispataca.

NOTIFICACIONES

Recibiré notificaciones en la secretaria de su Despacho o en la Oficina del Instituto Geográfico Agustín Codazzi ubicado carrera 18 N° 23-26 piso 7° del Municipio de Sincelejo.

Dirección Electrónica: Sincelejo@igac.gov.co –notificaciones.judiciales@igac.gov.co

Honorable Juez (a), con todo respeto.

ARMANDO ANAYA NARVAEZ
Director Territorial Sucre.

Proyectó: Ana Margarita Cabarcas. Profesional Especializado 2028/12.

Recibido
Refrendado
20-09-17
Hora: 3.50 PM



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRAL



RESOLUCIÓN NÚMERO 10
()

Por la cual se hace un nombramiento

EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO
AGUSTÍN CODAZZI

En ejercicio de las facultades legales y estatutarias y,
en especial las que le confiere el artículo 5º. del Decreto 1972 de 2002,

CONSIDERANDO

Que en cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1972 de 2002 el Instituto llamó a concurso público abierto mediante convocatoria del 3 de agosto de 2004, para proveer el cargo de Director Territorial Código 0042 Grado 07, de las Direcciones Territoriales de Antioquia, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre y Valle.

Que el proceso de selección se realizó a través del sistema de meritocracia, adelantado por el Instituto con la asesoría y apoyo del Grupo de Proyectos Especiales del Departamento Administrativo de la Función Pública y la Oficina anticorrupción de la Vicepresidencia de la República.

Que terminado el proceso, se conformó la Terna para la Dirección Territorial Sucre con las personas que aprobaron el concurso mencionado y ocuparon los tres (3) primeros lugares para esta Dirección Territorial, entre las cuales figura al momento que se produce este nombramiento el doctor ARMANDO MANUEL ANAYA NARVÁEZ.

Que con oficio 020427 del 15 de diciembre de 2004, se remitió al Despacho del Gobernador del Departamento de Sucre, la terna con los nombres de los tres candidatos que ocuparon los mismos lugares dentro del concurso para la Dirección Territorial Sucre.

Que con oficio del 27 de diciembre de 2004 el Gobernador del Departamento del Sucre escogió dentro de la terna enviada al Doctor ARMANDO MANUEL ANAYA NARVÁEZ.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Nombrar al Doctor ARMANDO MANUEL ANAYA NARVÁEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 10.875.583, en el cargo Director Territorial Código 0042 Grado 07 de la Dirección Territorial Sucre, con una remuneración básica mensual de \$ 2.186.260.00.

ARTÍCULO SEGUNDO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 del Decreto 3787 de diciembre 26 de 2003, las partidas presupuestales necesarias están incluidas en el certificado de disponibilidad presupuestal No. 07 del 22 de diciembre de 2004.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a . . .

IVÁN DARÍO GÓMEZ GUZMÁN
Director General



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
SEDE CENTRAL



DILIGENCIA DE POSESIÓN

ACTA No. 006

A los diecisiete (17) días del mes de enero de 2005, ante el Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el doctor ARMANDO MANUEL ANAYA NARVAEZ, identificado con cédula de ciudadanía número 10.875.583, toma posesión del cargo de Director Territorial Código 0042 Grado 07 en la Dirección Territorial Sucre, en el que ha sido nombrado mediante Resolución No. 1087 del 27 de diciembre de 2004, con una remuneración básica mensual de \$2.186.260.00.

Para constancia de lo expuesto se firma la presente Acta, por quienes en el acto intervinieron.

IVÁN DARIO GÓMEZ GUZMÁN
Director General

El Posesionado

ARMANDO MANUEL ANAYA NARVAEZ
C.C. 10.875.583

Cédula de ciudadanía No. 10.875.583
Certificado de antecedentes disciplinarios No. 2813319
Certificado judicial No. 9539173
E.P.S. SALUPCOOP
FONDO DE PENSIONES HORIZONTE
Consignación Bco. Cafetero No. 24358607, 24358751

BOGOTÁ D.C.

Carrera 30 N° 48-51 Conmutador 3694000 - 3694100 Fax 3694098 Información al cliente 3683443 - 3694000 Ext. 4674 web: www.igac.gov.co



Bogotá D.C., miércoles, 20 de septiembre de 2017

20171030655501
Al responder cite este Nro.
20171030655501

Señores:
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SINCE
E- mail: jprctoosince@cendoj.ramajudicial.gov.co
Carrera 9 No. 11- 96, piso 2.
Tel. 2754780 ext. 2173
Sincé- Sucre
E. S. D.

Referencia:

PROCESO	ACCIÓN DE TUTELA
RADICADO	707423189001- 2017- 00097- 00
ACCIONANTE	MOISES DE JESÚS RODRIGUÉZ VILLAREAL Y OTROS.
ACCIONADO	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT
RADICADO ANT:	AUTO DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017, RECIBIDO ANT RADICADO No. 20179600703132 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

Respetado Señor Juez:

NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 21527126, con Tarjeta Profesional No. 191.382 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de Jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, nombrada mediante resolución No. 36 de 1 de julio de 2016, con funciones de representación judicial para atender acciones constitucionales, establecidas en el numeral 9ª del artículo 13 del Decreto 2363 de 2015, me dirijo a su Despacho con el propósito de dar contestación a la acción de tutela del asunto en los siguientes términos:

I. HECHOS

Los accionantes manifiestan que la Agencia Nacional de Tierras, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la confianza legítima y a la propiedad privada, indicando entre otros lo siguiente:

1.- Que son propietarios de los predios denominados: VEREMOS, VILLA SONIA, LA DORADA, LA ENCIERRO, ubicados en el municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre.



Agencia
Nacional de
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO

- 2.- Que los predios comprenden la ciénaga de CAÑO PALOMO, y los títulos se derivan del título de la Comunidad de San Juan Bautista de Cispatacá, que hace parte de los derechos adquiridos conforme a las leyes civiles anteriores.
- 3.- Que desde el fallecimiento de la señora María Isabel de Hoyos en 1848 las tierras que comprendían el hato de Cispatacá han estado y se han mantenido bajo el dominio de particulares, sean herederos, compradores poseedores o tenedores de quienes hay constancias de haber realizado negociaciones.
- 4.- Que el señor Moisés Rodríguez, accionante, es propietario del predio a partir del 13 de julio de 1994.
- 5.- Que dentro de los folios de matrícula de los predios de los accionantes nunca se inscribió la resolución de inicio (No. 380 de 1990) del procedimiento de deslinde y amojamamiento ni la resolución que definió dicho procedimiento (No. 04935 de 1994), expedidas por el extinto INCORA hoy ANT, tal como lo señala la normatividad, esto Decreto 2663 de 1994 y Resolución No. 04435 del Incoder.
- 6.- Que los predios ubicados en Caño Palomo poseen folio de matrícula y en ninguno se evidencia la inscripción de la resolución inicial ni final del proceso agrario de deslinde de Caño Palomo, sin embargo el Incoder inició proceso de recuperación de baldíos vulnerando los derechos a sus propietarios y nuevos adquirentes de buena fe, ya que al no estar inscrito no produce efectos frente a terceros.
- 7.- Que mediante Resolución No. 380 de 1994 expedida por el INCORA, se creó de forma irregular el predio que se denominó PATIO BONITO, identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 347- 8864, del que no se evidencia información catastral ni cartográfica, segregado de un predio de mayor extensión denominado LAS PALMAS, el cual fue objeto de proceso de clarificación mediante Resolución No. 045 de 1990 declarándolo propiedad privada, el cual se ubica dentro del antiguo título del Hato de SAN JUAN BAUTISTA DE ZISPATACA.
- 8.- Que los predios que se encuentran ubicados en la región de influencia de los títulos originarios son derechos adquiridos de los propietarios cuyas escrituras se derivan de esos títulos, de los cuales los predios de las ciénagas palomo y las palmas hacían parte – linderos del Hato Zispatacá.
- 9.- Que no existe un medio ordinario eficaz para recurrir las resoluciones de las actuaciones administrativas agrarias en las ciénagas de Caño Palomo.
- 10.- Que el predio colindante denominado las PALMAS por medio del procedimiento de clarificación fue declarado de propiedad privada, a través de la Resolución No. 045 de 1990., sustentado en los títulos, negándose el INCODER a clarificar el predio CAÑO PALOMO.
- 11.- Que la sentencia del 7 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, en Acción Popular no está debidamente ejecutoriada puesto que a la fecha se surte recurso en segunda instancia ante Consejo de Estado.
- 12.- Que el INCODER y la Alcandía de San Benito de Abad, a través de la Inspección de Policía relacionaron una diligencia de desalojo el día 3 de junio de 2014, sin que estuviera ejecutoriada la resolución No. 552 de abril de 2012, la cual según la Ant, está en trámite de notificación.



MINAGRICULTURA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

13.- El señor Hernando Benítez, miembro de la ANUC, solicitó al INCODER, el inicio del proceso administrativo de clarificación del predio denominado CAÑO PALOMO, señalando a su vez que mediante los comités de campesinos se quiere despojar a los propietarios de los terrenos a través de invasiones masivas y alianzas con redes de corrupción en el municipio de San Benito y departamento de Sucre y algunos funcionarios del INCODER.

14.- Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía 22 Seccional de Bogotá.

15.- Los propietarios y poseedores regulares han colocado quejas y denuncias sin que ninguna autoridad competente ampare la posesión de los predios antes mencionados, lo cual ha generado estado de cosas inconstitucional en lo referente a la protección de la propiedad y derechos constitucionales invocados.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a que se ordene a la Agencia Nacional Del Tierras ANT, dar cumplimiento a las pretensiones de la parte actora, por considerar que esta Agencia no vulneró los derechos invocados por los accionantes.

III. RAZONES DE LA DEFENSA

1.- IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA:

De conformidad con lo señalado en el artículo 6 del decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es improcedente entre otros en los siguientes casos:

- Cuando existan otras acciones o medios para que se proteja el derecho vulnerado o amenazado.
- Cuando existen otros medios de protección del derecho, cuando por medio de la acción de tutela se pretenda evitar un perjuicio irremediable.
- Cuando se pretendan proteger derechos colectivos, (para la protección de los derechos colectivos se instituyó la acción popular).

1.1. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CUANDO SE UTILIZA PARA REVIVIR ETAPAS PROCESALES EN DONDE SE DEJARON DE EMPLEAR LOS RECURSOS PREVISTOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO.

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la misma resulta improcedente cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que por negligencia, descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido, desde los primeros pronunciamientos de esta Corte, se ha indicado:

"Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como



Agencia
Nacional de
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO

mecanismo transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión constitucional."

En igual sentido, la Corte Constitucional en sentencia T-753 de 2006 señaló que existe el deber de agotar oportuna y adecuadamente las vías judiciales ordinarias, antes de acudir a la acción de amparo.

"Frente a la necesidad de preservar el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, se ha sostenido que aquella es improcedente si quien ha tenido a su disposición las vías judiciales ordinarias de defensa, no las utiliza ni oportuna ni adecuadamente, acudiendo en su lugar a la acción constitucional. Ello por cuanto que, a la luz de la jurisprudencia pertinente, los recursos judiciales ordinarios son verdaderas herramientas de protección de los derechos fundamentales, por lo que deben usarse oportunamente para garantizar su vigencia, so pena de convertir en improcedente el mecanismo subsidiario que ofrece el artículo 86 superior."

En ese orden de ideas, es reiterativa la posición de la Corte en cuanto a la improcedencia de la tutela cuando en desarrollo de un proceso judicial las partes pudieron valerse de los recursos judiciales ordinarios pero estos no fueron empleados oportunamente, ya que no puede constituirse en la vía para discutir situaciones jurídicas consolidadas que adquirieron firmeza por la caducidad de los recursos y acciones que no fueron utilizados oportunamente por los interesados. Así se expuso en la sentencia SU-037 de 2009.

"En efecto, el carácter subsidiario de la acción de tutela impone al interesado la obligación de desplegar todo su actuar dirigido a poner en marcha los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jurídico para la protección de sus derechos fundamentales. Tal imperativo constitucional pone de relieve que para acudir a la acción de tutela el peticionario debe haber actuado con diligencia en los procesos y procedimientos ordinarios, pero también que la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales deviene en la improcedencia del mecanismo de amparo establecido en el artículo 86 Superior."

Sobre este particular, ha precisado la jurisprudencia que si existiendo el medio judicial de defensa, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo evitarlo, permite que éste caduque, no podrá posteriormente acudir a la acción de tutela en procura de obtener la protección de un derecho fundamental. En estas circunstancias, la acción de amparo constitucional no podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo."

Entonces, por vía de tutela, no es viable revivir términos de caducidad agotados, en la medida que se convertiría en un mecanismo que atentaría contra el principio de seguridad jurídica y se desnaturalizaría el propósito mismo de la acción constitucional de protección de los derechos fundamentales.

En conclusión, es necesario que quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado los medios de defensa disponibles en la legislación para el efecto. Esta exigencia responde al principio de subsidiariedad de la tutela, que pretende asegurar que la acción constitucional no sea considerada en sí misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de defensa que reemplace aquellos otros diseñados por el legislador. Menos aún, que resulte ser un camino excepcional para solucionar errores u

omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios.

1.2. PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación, la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual y subsidiario, encaminado a la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados. Ello en consonancia con el artículo 86 de la Constitución, los artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 que establecen como causal de improcedencia de la tutela: *"cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante."* El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en la necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que llegan a su conocimiento a la estricta observancia del carácter subsidiario y residual de la acción. En este sentido, el carácter supletorio del mecanismo de tutela conduce a que solo tenga lugar cuando dentro de los diversos medios que pueda tener el actor no existe alguno que sea idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue vulnerado o amenazado. Esta consideración se morigera con la opción de que a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el peticionario puede acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De no hacerse así, esto es, actuando en desconocimiento del principio de subsidiariedad se procedería en contravía de la articulación del sistema jurídico, ya que la protección de los derechos fundamentales está en cabeza en primer lugar del juez ordinario.

En este sentido, la Corte ha expuesto que conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable. Al respecto se ha establecido:

"La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo."



Agencia
Nacional de
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO

Así, la regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha explicado que tal concepto "está circunscrito al grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables, para neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho". En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha elaborado varios criterios para determinar su existencia que se resumen en la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad de la intervención:

"la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados."

PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN TUTELA CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS.

Como ha sido reiterado en múltiples ocasiones por esta Corporación, la acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional de carácter residual y subsidiario, encaminado a la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas que están siendo amenazados o conculcados. Ello en consonancia con el artículo 86 de la Constitución, los artículo 6º numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 que establecen como causal de improcedencia de la tutela: "cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos mecanismos será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.". El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos.

En este sentido, la jurisprudencia de la Corte ha sido enfática en la necesidad de que el juez de tutela someta los asuntos que llegan a su conocimiento a la estricta observancia del carácter subsidiario y residual de la acción. En este sentido, el carácter supletorio del mecanismo de tutela conduce a que solo tenga lugar cuando dentro de los diversos medios que pueda tener el actor no existe alguno que sea idóneo para proteger objetivamente el derecho que se alegue vulnerado o amenazado. Esta consideración se morigera con la opción de que a pesar de disponer de otro medio de defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el peticionario puede acudir a la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. De no



Agencia
Nacional de
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO

hacerse así, esto es, actuando en desconocimiento del principio de subsidiariedad se procedería en contravía de la articulación del sistema jurídico, ya que la protección de los derechos fundamentales está en cabeza en primer lugar del juez ordinario.

En este sentido, la Corte ha expuesto que conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio irremediable. Al respecto se ha establecido:

"La Corte concluye (i) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de derechos fundamentales que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa; (ii) que procede la acción de tutela como mecanismo transitorio contra las actuaciones administrativas cuando se pretenda evitar la configuración de un perjuicio irremediable; y (iii) que solamente en estos casos el juez de tutela podrá suspender la aplicación del acto administrativo (artículo 7 del Decreto 2591 de 1991) u ordenar que el mismo no se aplique (artículo 8 del Decreto 2591 de 1991) mientras se surte el proceso respectivo ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo."

Así, la regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable.

Sentado lo anterior, corresponde aclarar aquellos eventos que la jurisprudencia constitucional ha determinado como perjuicio irremediable. En relación a este tema, esta Corporación ha explicado que tal concepto "está circunscrito al grave e inminente detrimento de un derecho fundamental, que deba ser contrarrestado con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergables, para neutralizar, cuando ello sea posible, la violación del derecho". En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha elaborado varios criterios para determinar su existencia que se resumen en la inminencia, la gravedad, la urgencia y la impostergabilidad de la intervención:

"la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protección de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados."

 MINAGRICULTURA



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS

PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

2.- NO VULNERACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, IGUALDAD Y DEFENSA.

La acción de tutela fue consagrada por el Constituyente de 1991 como un mecanismo subsidiario de protección, así lo establece el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución de 1991. Conforme con esta característica, su procedencia está supeditada a que el ciudadano no disponga de otro medio judicial de protección, a menos que se utilice para evitar un perjuicio irremediable. En la sentencia C-543 de 1992, la Corte Constitucional afirmó con respecto a la subsidiariedad de la acción de tutela contra providencias judiciales, que no es el "medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales(...) tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el proceso".

Por lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad, para estudiar si la acción de tutela es procedente; puesto que, *"bajo ningún motivo, [puede considerarse la acción de tutela] como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y, menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos en estos procesos para controvertir las decisiones que se adopten".* En consecuencia, *"el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa judicial constituye un requisito ineludible para la procedencia de la acción de tutela, salvo que por razones extraordinarias, el juez constitucional compruebe que los otros medios judiciales no son eficaces para la protección de las garantías invocadas"*. (Subrayado fuera de texto).

3.- ACCIONES EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS AGRARIOS:

El numeral 5 del artículo 136 del anterior Código Contencioso Administrativo, hoy sustituido por el literal f del artículo 164 del C. de P. de A.C.A., preveía que la: *"... acción revisión de los actos de extinción del dominio agrario o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos de clarificación, deslinde y recuperación de los baldíos, la demanda deberá interponerse dentro del término de quince (15) días siguientes al de su ejecutoria. Para los terceros, el término de caducidad será de treinta (30) días y se contará a partir del día siguiente al de la inscripción del acto en la correspondiente Oficina de Instrumentos Públicos."*

Ahora bien, con referencia a lo establecido por la legislación con ocasión a los procedimientos agrarios administrativos especiales, en cuanto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo señala lo siguiente:

"(..)

ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho

particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. (...)

ARTÍCULO 149. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN ÚNICA INSTANCIA.

El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (...)

9. De la nulidad con restablecimiento, contra los actos administrativos expedidos por el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, o la entidad que haga sus veces, que inicien las diligencias administrativas de extinción del dominio; clarificación de la propiedad, deslinde y recuperación de baldíos.
10. De la revisión contra los actos de extinción del dominio agrario, o contra las resoluciones que decidan de fondo los procedimientos sobre clarificación, deslinde y recuperación de baldíos.

CASO CONCRETO:

En conclusión, dentro de las pruebas aportadas por la tutelante en su petición, no se observa que de ellas, se desprenda una amenaza o vulneración contra los Derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y la PROPIEDAD de los accionantes, originada en la acción o la omisión del INCODER hoy ANTI, porque no aparece prueba que indique o demuestre la acción o la omisión sobre la cual sustenta sus afirmaciones.

Por consiguiente, el Juez de tutela para proteger o garantizar los derechos pretendidos por los accionantes, debe hacerlo bajo factores objetivos que evidencien un daño o una posible amenaza, a un derecho fundamental por parte del INCODER hoy ANTI, como lo ha precisado la Corte Constitucional al indicar "... Para que se amenace uno o varios derechos fundamentales, se hace necesario un mínimo de evidencia fáctica, de suerte que sea razonable pensar en la realización de un daño o menoscabo material o moral" (Sentencia de tutela No. 393 del 31 de agosto de 1994. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERMANDEZ).

De otra parte, con la acción de tutela incoada, se busca suspender transitoriamente los efectos jurídicos de una resolución que reconoció los derechos de propiedad colectiva lo que la hace improcedente, porque precisamente, los accionantes disponen de otros medios de defensa, frente al acto administrativo atacado, ya que la acción de tutela no es procedente para resolver los conflictos sobre propiedad o posesión sobre un determinado inmueble. De su improcedencia ha dicho la Corte Constitucional:

"Sea cual fuere la pretensión de los demandantes no es la acción de tutela el mecanismo judicial de defensa apto para alcanzarla. Su objeto como lo ha dicho la Corte, es el de brindar protección judicial inmediata a las personas cuando les sea vulnerado o les esté siendo amenazado, un derecho fundamental no el de resolver acerca de controversias que tiene cabal solución en otras instancias específicas y según procedimientos precisamente definidos por la ley. Tal es el caso de los conflictos sobre la propiedad respecto de los cuales se aplican reglas jurídicas claramente diferenciadas en cuanto a la materia de la institución...". (Sentencia de Tutela T-095 de marzo 4 de 1994. Magistrado Ponente Dr. JOSE GREGORIO HERMANDEZ GALINDO).



Agencia
Nacional de
Tierras

JUNTOS ABRIMOS LAS
PUERTAS AL PROGRESO

En las presentes actuaciones al tutelante, no solo, no se le ha vulnerado sus derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y a la PROPIEDAD, sino que además, dispone de otros medios de defensa idóneos para desplazar el amparo constitucional.

En concordancia de conformidad con el principio de subsidiariedad que da origen a la procedencia de la acción de tutela, se entiende que para el evento en que frente al caso concreto existan otros mecanismos de defensa judicial, ya sean ordinarios o extraordinarios, la acción de tutela sólo será procedente una vez dichos mecanismos se hayan agotado o carezcan de objeto. De tal forma que, el requisito de subsidiariedad impone el agotamiento de todos los medios judiciales de defensa antes de acudir al juez de tutela.

En consecuencia si no se ejercieron los recursos o la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o para el caso la acción de revisión así el acto administrativo tuviera visos de nulidad, la tutela es improcedente.

En igual sentido, tal como lo señalan los accionantes en la actualidad se adelanta acción popular (Radicación 70-001-23-33-000-2015-00077-00), interpuesta por la Procuraduría 19 Judicial, Ambiental y Agraria del departamento de Sucre contra el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER por los mismos hechos ante el Tribunal Administrativo de Sucre, en la que en primera instancia Sentencia del 7 de abril de 2016, resolvió:

“SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, al señor Alcalde y Personero Municipal del Municipio de San Benito Abad – Sucre, que de manera inmediata, atiendan los mandatos constitucionales y legales, cada uno en lo de su competencia, implementando el uso, manejo, control y conservación de la Ciénaga Caño Palomo, ubicado en jurisdicción del municipio de San Benito Abad – Sucre, al tratarse de un bienes de uso público, ejerciendo las acciones administrativas y judiciales, a que haya lugar, (...).”

Finalmente ante el pronunciamiento definitivo, esto es, la resolución que decidió los recursos, es preciso recalcar contrario a lo expresado por los mismos, que esta decisión, es susceptible de ser demandada ante el Consejo de Estado dentro de la cual puede solicitar la suspensión provisional de los actos administrativos proferidos objeto de la presente acción.

Lo expuesto, lleva a concluir la improcedencia de la tutela como mecanismo principal. De igual manera, se considera que en el presente caso no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable que justifique la adopción de un amparo transitorio.

El razonamiento que avala tal consideración parte de los siguientes presupuestos: (i) los accionantes no son sujetos de especial protección constitucional; (ii) no existe ningún elemento que demuestre que los actores no se encontraban en condiciones de actuar debidamente dentro del procedimiento administrativo; (iii) tal como se ha expuesto, y sin entrar a asumir la competencia propia del juez administrativo, no se evidencia, *prima facie*, la vulneración a un derecho fundamental; (iv) Que aún continua ante la jurisdicción contencioso administrativa procedimiento.

Así las cosas, podemos decir que los accionantes, además de haber hecho uso de los recursos que dentro del proceso se encuentran estatuidos y los cuales han sido eficaces, cuentan con otros medios de defensa tanto dentro del mismo proceso administrativo, como por la vía judicial para cuestionar las actuaciones que acusan violatorios del debido proceso, y, además, no se encuentra demostrada la existencia de un perjuicio irremediable

que tenga la condición de ser inminente, grave e impostergable para que amerite la intervención urgente del juez constitucional. Por consiguiente, al no haber empleado oportunamente los recursos judiciales ordinarios, existir una acción popular, ni encontrarse *prima facie* la vulneración alegada, y ante la existencia de otras vías idóneas para solventar las alegaciones propias del proceso.

IV. SOLICITUD

Señor Juez, de acuerdo con las normas parcialmente transcritas, las Jurisprudencias citadas, la Doctrina detallada y los planteamientos expresados sobre el tema de los procedimientos administrativos adelantados por la entidad, respetuosamente, consideramos que las pretensiones de la presente acción de tutela no están llamadas a prosperar, situación que evidencia el hecho de que esta Agencia no desconoció los derechos Fundamentales invocados como vulnerados por parte de los accionantes.

V. ANEXOS

- Resolución No. 36 del 1 de julio de 2016.
- Resolución No. 922 de 2017.

VI. NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES

Las recibiré en la Calle 43 No. 57 - 41 de la ciudad de Bogotá, o en el correo de notificaciones judiciales juridica.ant@agenciadetierras.gov.co

Cordialmente,



NATALIA ANDREA HINCAPIE CARDONA
Jefe Oficina Jurídica
Agencia Nacional de Tierras- ANT

Anexo: Lo enunciado en cuatro (4) folios.
Preparó Lyda Solano – Abogada Oficina Asesora Jurídica



Libertad y Orden

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS - ANT

RESOLUCIÓN No. 922 DE 2017

(26 JUL 2017)

Por medio de la cual se resuelve el recurso de reposición, revocatoria directa, nulidad y pretensiones asociadas a dicho escrito, en contra de las Resoluciones Nos. 4935 del 5 de octubre de 1994 y 552 del 09 de abril de 2012, por las cuales se decide el procedimiento de deslinde y recuperación de baldíos respectivamente, sobre los terrenos que conforman la denominada ciénaga Caño Palomo, ubicada en el municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre.

EL SUBDIRECTOR DE PROCESOS AGRARIOS Y GESTION JURIDICA DE LA
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas en el artículo 209 de la Constitución Política y dando cumplimiento al procedimiento señalado en la Ley 160 de 1994, los Decretos N° 1071 de 2015 y N° 2363 de 2015, y teniendo presentes las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. COMPETENCIA

Que mediante Decreto Ley 2363 de 2015, se creó la Agencia Nacional de Tierras - ANT-, entre cuyas funciones, se le atribuyó algunas que desarrollaba el INCODER, en particular el trámite y decisión de los procedimientos agrarios administrativos especiales regulados en el artículo 48 y siguientes, Capítulo X de la Ley 160 de 1994.

Que la reglamentación del Capítulo X de la Ley 160 de 1994, en lo relativo a los procedimientos de clarificación, deslinde, recuperación de terrenos baldíos indebidamente ocupados y extinción de dominio, se encuentra establecida en el Decreto 1071 del 28 de mayo de 2015, que compiló el Decreto 1465 de 2013 del 10 de julio de 2013.

Que en consecuencia, de acuerdo con lo previsto en los numerales 14 y 16 del artículo 12 y el artículo 48 de la Ley 160 de 1994; el artículo 2.14.19.2.15 del Decreto 1071 de 2015; el numeral 24 del artículo 4° y numeral 1 del artículo 21 del Decreto 2363 de 2015, la Subdirección de Procesos Agrarios y Gestión Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras - ANT- tiene competencia para pronunciarse respecto de los procesos agrarios de deslinde y de recuperación de baldíos indebidamente ocupados, en el caso concreto de Caño Palomo, municipio de San Benito Abad, departamento de Sucre, el cual es un bien de uso público y comunal, identificado con Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 347-8864.

II. ANTECEDENTES

Que mediante la Resolución N° 380 del 3 de abril de 1990, se ordenó iniciar el procedimiento administrativo de deslinde de tierras sobre la Ciénaga Caño Palomo, el cual, una vez surtidas las etapas procesales correspondientes, finalizó a través de Resolución No. 4935 del 5 de octubre de 1994 (folio 194 y s.s.), definiendo como único ocupante del predio al señor César Pérez Morales.

Que contra el citado acto administrativo se interpuso recurso de reposición (folio 247 y ss.), rechazado por extemporáneo según obra a folio 333. Así mismo, contra la resolución que finalizó el procedimiento de deslinde de tierras sobre la ciénaga Caño Palomo no fue interpuesta acción de revisión ante el Consejo de Estado (folio 486).

Bogotá D.C., 22 de agosto de 2017

SNR2017EE035542

Doctor

NICOLAS VELEZ GUERRERO

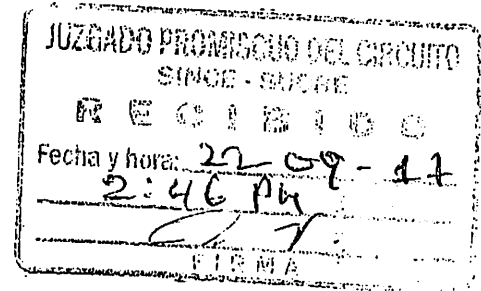
Secretario

JUZGADO RPOMISCUO DEL CIRCUITO

Correo electrónico: jprctosince@cendoj.ramajudicial.gov.co

Carrera 9 # 11-96 Piso 2

Since - Sucre



Asunto.- ACCIÓN DE TUTELA

Referencia	ACCION DE TUTELA
Radicado	2017-00097
Accionante	MOISES DE JESUS RODRIGUEZ VILLAREAL Y OTROS
Accionado	AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS

RADICADO: SNR2017ER070083

MARCOS JAHER PARRA OVIEDO, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.126.005, obrando en mi condición de Jefe de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, nombrado mediante Resolución 6580 del 16 de agosto de 2011, cargo del cual tomé posesión en la fecha, como consta en los documentos que en copia anexo, de acuerdo a lo normado en el artículo 14 numerales 5 - 7 del Decreto 2723 de 2014, encontrándome dentro del término procesal concedido, concurre ante su despacho con el fin de presentar las siguientes consideraciones de hecho y de derecho para la acción de tutela de la referencia:

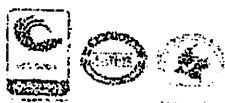
En primer lugar solicito que se desvincule a la Superintendencia de Notariado y Registro, toda vez que no existe la violación de ningún derecho fundamental al accionante, por parte de esta entidad como paso a demostrarlo:

EN LO REFERENTE A LO SOLICITADO EN LA PETICIÓN:

La Superintendencia de Notariado y Registro ostenta dentro de sus funciones garantizar la guarda de la fe pública en todo el territorio nacional, mediante la prestación del servicio público registral, la orientación, inspección, vigilancia y control del servicio público notarial.

De conformidad con lo requerido por la accionante dentro de la parte petitoria de la acción, (....) "

1. La protección y amparo inmediato de los derechos constitucionales fundamentales AL DEBIDO PROCESO de los tutelantes.



(...)

2d. Ordenar a la AGENCIA DE TIERRAS, en coordinación con el IGAC y la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO, habiendo cumplido con la orden anterior, dar inicio al proceso administrativo de clarificación de la propiedad del predio "Hato de San Juan Bautista de Cispataca" contenidos en la escritura de venta del año 1847, que otorga María Josefa Torres Hoyos al señor Antonio Rodríguez de Torres respetado los derechos adquiridos por particulares como lo indica el artículo 1 del Decreto -Ley 902 de 2007, el cual dispondrá la inscripción de la resolución de inicio del proceso de clarificación los folios de matrícula inmobiliaria que hayan identificado dentro del predio a clarificar. (...)

Procederemos a responder a la vinculación que se realiza a esta Superintendencia, considerando las siguientes precisiones:

La acción de tutela constituye el instrumento básico, de origen constitucional garantizador de los derechos subjetivos fundamentales de los asociados colombianos, consecuentemente de la convivencia humana; sustento indispensable y estructural de toda sociedad, que se pretenda políticamente desarrollada y jurídicamente organizada.

En este sentido, es decir, en el de salvaguardar los destinos individuales reconocidos en la Carta Fundamental, complementa oportunamente en el devenir de nuestra nacionalidad el amplio espectro de instituciones y mecanismos legales existentes en la búsqueda de la conservación del equilibrio cotidiano en las relaciones del ciudadano, Estado y mundo civil.

La tutela es una acción excepcional en la medida que solo procede frente a situaciones perfectamente autorizadas por la Constitución y la Ley, y está sujeta a precisas reglas de interpretación restrictiva que la toman como un mecanismo de excepción sólo procedente frente a un reducido de eventualidades.

Tanto la Corte Suprema de Justicia, como el Consejo de Estado (Providencia del 12-02-1992, C.P. Miguel González Rodríguez, Exp. AC-035) acogen esta posición y la han desarrollado en diversos pronunciamientos. Precisamente la Sala de Casación Civil con Ponencia del doctor Pedro Laffón Pianetta, se pronunció en los siguientes términos sobre el asunto:

"Aparece claramente como condición de procedibilidad, además del interés, la de que el afectado no disponga de otro medio judicial..."

Igualmente, la Corte Constitucional, ha tenido oportunidad de medir el alcance de la expresión "otro medio de defensa judicial", fallos posteriores..." no puede perderse de vista el carácter a todas luces exceptivo del inciso transcrito: sólo procede la tutela si no existe otro medio de defensa judicial y, en situación excepcional, únicamente



cabe la tutela como mecanismo transitorio, cuando mediante ella se pueda evitar un perjuicio irremediable".

Realizada esta precisión, es necesario señalar las competencias asignadas por la Ley a la Superintendencia de Notariado y Registro y a las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, por cuanto esta entidad solo se puede pronunciar en virtud de las mismas.

El artículo 11 del Decreto 2723 del 29 de diciembre de 2014, por medio del cual se modificó la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro y se determinaron las funciones de sus dependencias, dispuso que las funciones que recaen en cabeza de esta entidad son las siguientes:

... (...)” **ARTÍCULO 11. FUNCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA.** Son funciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, las siguientes:

1. *Proponer al Gobierno políticas, planes y programas sobre los servicios públicos de notariado y registro de instrumentos públicos.*
2. *Ejercer la inspección, vigilancia y control sobre servicio público notarial en los términos establecidos en las normas vigentes.*
3. *Impartir las directrices e instrucciones para eficiente prestación del servicio público de notariado mediante la expedición, conceptos, circulares y demás actos administrativos que se requieran con el fin orientar el ejercicio de la actividad notarial.*
4. *Implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación de notariado procurando su racionalización y modernización.*
5. *Realizar visitas generales, especiales, especiales de seguimiento, por procedimientos virtuales o por cualquier otra modalidad a la actividad desarrollada por los Notarios y las Notarías.*
6. *Investigar y sancionar faltas disciplinarias de los Notarios, en el desarrollo de sus funciones, sin perjuicio del poder preferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación.*
7. *Proponer al Gobierno Nacional la creación, supresión, fusión y re-categorización de Notarías y sus círculos respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.*
8. *Realizar directamente o por medio de entidades especializadas, los programas capacitación formal y no formal requieran los Notarios y empleados de Notarías.*
9. *Proponer al Gobierno Nacional la fijación de nuevas tarifas por concepto de derechos por la prestación del servicio público de notariado y modificación de mismas.*



10. Actualizar anualmente de acuerdo con IPC las tarifas notariales.
11. Apoyar la realización de los concursos para proveer las vacantes en el cargo del notario, de conformidad con la delegación del Consejo Superior de Carrera Notarial.
12. Prestar servicio público registral a través de las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos.
13. Llevar los registros de predios abandonados y de predios para reparación a víctimas de conformidad con la normativa vigente.
14. Ejercer la inspección, vigilancia y control las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, en los términos establecidos en las normas vigentes.
15. Realizar visitas generales, especiales, de seguimiento, por procedimientos virtuales, o por cualquier otra modalidad, a las Oficinas Registro de Instrumentos Públicos.
16. Instruir a los Registradores de Instrumentos Públicos sobre la aplicación de normas que regulan su actividad. Ordenar la suspensión inmediata de aquellas actuaciones irregulares de los Registradores de Instrumentos Públicos y disponer que se adopten las medidas
17. Ordenar la suspensión inmediata de aquellas actuaciones irregulares de los Registradores de Instrumentos Públicos y disponer que se adopten las medidas correctivas del caso.
18. Investigar y sancionar las faltas disciplinarias de los Registradores de Instrumentos Públicos, en el desarrollo sus funciones, sin perjuicio del poder preferente que podrá la Procuraduría General de la Nación.
19. Fijar los estándares de calidad requeridos para la prestación los servicios públicos notarial y registral.
20. Implementar sistemas administrativos y operativos para lograr la eficiente prestación del servicio público de registro de instrumentos públicos procurando su racionalización y modernización.
21. Proponer al Gobierno Nacional la creación, supresión, fusión y modificación de Oficinas de Registro Instrumentos Públicos y sus círculos respectivos, de conformidad con las disposiciones legales vigentes.
22. Fijar y actualizar las tarifas por concepto derechos por la prestación los servicios de registro de instrumentos públicos.
23. Proporcionar a los Órganos de Control y a la Fiscalía General de la Nación la información que solicite sobre los bienes inmuebles registrados en cumplimiento de sus funciones.



24. Apoyar, en los términos señalados en la ley y bajo las orientaciones del Consejo Superior de Carrera Registral, los concursos para proveer las vacantes en los empleos de Registradores Instrumentos Públicos.

25. Adelantar y promover estudios, investigaciones y compilaciones en materia notarial y registral y divulgar sus resultados.

26. Las demás que señale la ley "... (...)

PETICION

De conformidad con los hechos narrados en el escrito de tutela y lo explicado anteriormente, se deduce que esta Superintendencia, NO es competente para pronunciarse sobre las peticiones incoadas por la accionante, toda vez que no existe ninguna vulneración por parte de esta entidad, respecto a los derechos fundamentales aludidos por el señor MOISES DE JESUS RODRIGUEZ VILLAREAL Y OTROS.

En mérito de lo expuesto, respetuosamente le solicitamos desvincular a la Superintendencia de Notariado y Registro de la presente acción, ya que, por las funciones misionales de esta Entidad mencionadas en párrafos anteriores, no existe relación alguna con lo expuesto en el presente caso.

ANEXOS

- Copia de los documentos con los cuales acredito la calidad en la que actúo.

NOTIFICACIONES

Atenderé las notificaciones en la Superintendencia de Notariado y Registro, calle 26 No. 13-49, interior 201, Bogotá, D.C.

Cordialmente

MARCOS JAHER PARRA OVIEDO
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Superintendencia de Notariado y Registro

Anexos: 2 folios

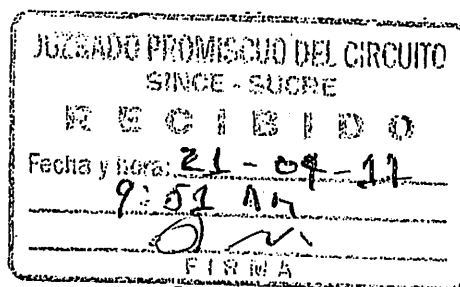


94



PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

Doctora
LUCÍA DE LA HOZ DE LA HOZ
Jueza Promiscuo del Circuito
Sincé, Sucre



Referencia : Acción de Tutela
Radicado : 707423189001-2017-00097-00
Accionantes : Moisés de Jesús Rodríguez V. y otros
Accionado : Agencia Nacional de Tierras
Vinculados : Procuraduría Ambiental y Agraria de Sucre y otros

GLORIA DEL SOCORRO FLÓREZ FLÓREZ, actuando en mi calidad de Procuradora 19 Judicial II Ambiental y Agraria Para el Departamento de Sucre, nombrada mediante el Decreto 3209 de 08 de agosto de 2016 y posesionada en el cargo mediante Acta No. 029 de septiembre 1 de 2016 tal como lo demuestra Acta de Posesión que acompaño y como quiera que mediante Auto del 13 de septiembre de 2017 (recibido el día 18 de septiembre de 2017), por el cual se admite la acción de tutela de la referencia, se dispuso vincular al trámite a la Procuraduría Ambientales y Agrarios de sucre, respetuosamente me dirijo a usted a fin de pronunciarme sobre ella, en los siguientes términos:

A. Sobre los hechos

1. se anexó al momento de notificación de la presente acción escritura pública No679 del 13 de julio del 19994 .
2. No me consta, prueba de ello no se anexó al momento de notificación de la presente acción; por lo tanto, se estará a lo probado en la misma.
3. se anexó al momento de notificación de la presente acción; por lo tanto, se estará a lo probado en la misma.
4. se anexó al momento de notificación de la presente acción; por lo tanto, se estará a lo probado en la misma.
5. No me consta, es una apreciación jurídica de los accionantes que debe ser decantada en el transcurso de la actuación.
6. No me consta, prueba de ello no se anexó al momento de notificación de la presente acción; por lo tanto, se estará a lo probado en la misma.
7. No es un hecho, se trata de una apreciación subjetiva de los accionantes.
8. No me consta. Esta aseveración debe ser probada por quienes la elevan.
9. A la notificación de la acción de tutela se adjuntaron "títulos" enunciados en este hecho, pero algunos son ilegibles.





**PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

10. Es una apreciación de los tutelantes sobre un procedimiento administrativo, que debió ser discutida en la oportunidad legal prevista para ello; es decir, al momento de la notificación del acto administrativo referido:
11. Se narran allí varios hechos. Respecto a la inscripción de los actos administrativos ante la ORIP del Círculo de Sincé, esto debe demostrarse documentalmente por los actores, a quienes les deviene la carga de ello. Por otro lado, en lo atinente a que los actos administrativos referidos en el hecho no son oponibles ni han producido efectos frente a terceros por violación directa al principio de publicidad, es una apreciación subjetiva de los accionantes que debieron discutir en sede judicial ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo conforme a las reglas legales vigentes.
12. En realidad se hallan allí varios hechos que pasan a explicarse. Es cierto en lo referente a la existencia y contenido de la normativa citada, artículo 23 del Decreto 2663 de 1994. En lo atinente a si los terrenos mencionados en el hecho tienen o no Folio de Matrícula Inmobiliaria y si se han realizado inscripciones de actos administrativos en ellos, no le consta a esta Procuraduría, serán los accionantes quienes deban probarlo. Así mismo, lo referente a la presunta violación de derechos por parte del "INCODER", surge como una apreciación subjetiva de los accionantes que deberán probar en sede judicial.
13. Es una apreciación subjetiva de los accionantes, pues la creación de una matrícula inmobiliaria, como acto administrativo que es, se reputa legal hasta que se verifique lo contrario, por ello, si los tutelantes creen en la irregularidad de la expedición de dicho acto administrativo, cuentan con los mecanismos legales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para atacarlos en la forma y oportunidad prevista por la ley.
14. Lo narrado en este hecho resulta también una apreciación subjetiva de los accionantes. Como se mencionó en la respuesta al hecho anterior, los actos administrativos producidos por las autoridades competentes se presumen legales hasta que se verifique y decrete su ilegalidad por vía judicial; así, la ilegalidad de los actos y los supuestos fácticos que mencionan los actores en este numeral, deben o debieron ser alegados en sede jurisdiccional, mediante los mecanismos, procedimientos y dentro de los términos establecidos por la ley para ello.
15. Esta es una conclusión a la que arriban los actores desde su subjetividad, no es un hecho.
16. Es cierto en cuanto a la expedición del Decreto 902 de 2017 y la derogatoria parcial que hace a la Ley 160 de 1994.
17. Es cierto, según la normativa señalada.
18. Esta es una apreciación subjetiva de los accionantes, derivada de su interpretación de la norma. Lo cierto es que dicha norma, en su parágrafo único, determina que la formulación de la acción de nulidad agraria estará sujeta a las reglas que imperan el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que, procesalmente hablando, en criterio de esta Procuraduría, está garantizado no solo el procedimiento sino el juez natural de la acción, que hace parte de aquel.
19. La aseveración contenida en este hecho, resulta también de la apreciación subjetiva que hacen los accionantes respecto del ordenamiento jurídico vigente.



96



**PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

20. Este hecho queda supeditado al material probatorio recaudado en la acción.
21. las afirmaciones realizadas por la parte accionante en este hecho, son reales que está pendiente un fallo judicial para dirimir las pretensiones de la procuraduría Ambiental y agraria en acción popular. Donde se solicitó la protección de la comunidad de caño palomo, y se ordenara al INCODER, iniciar, tramitar y llevar a cabo la expedición del reglamento del uso de los terrenos de la ciénaga., así como la vigilancia del debido aprovechamiento ecológico.
22. Tal como se encuentra relatado. si los accionantes encuentran algún tipo de extralimitación de funciones o actuaciones irregulares por parte de los funcionarios relacionados, lo que procede es que las pongan en conocimiento ante las autoridades competentes para determinar si aquellas constituyen causales que den lugar a investigaciones bien sea de tipo disciplinario o cualquier otra que consideren viable.
23. Se conoce el informe
24. No me consta; sin embargo, teniendo en cuenta la redacción, no constituye un hecho sino una conclusión a la que arriban los accionantes.
25. No es un hecho, es una apreciación de los tuteantes. Ahora bien, se han hecho denuncias penales por los tutelantes, para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar.
26. No me consta.
27. Se conoce copia del escrito ante la fiscalía.
28. No es un hecho. Se trata de una relación de predios que, según los actores, han sido invadidos y hostigados.
29. No me consta. Empero, se insiste, si los tutelantes han observado actuaciones irregulares de autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones, deben ponerlo en conocimiento de las autoridades competentes para que adelanten las investigaciones pertinentes.
30. No es un hecho. Es una relación documental que realizan los actores.
31. No me consta.
32. No me consta el hecho de que ninguna autoridad haya amparado o no las solicitudes realizadas por las personas relacionadas. En lo atinente al "estado de cosas inconstitucionales" supuestamente generado en perjuicio de aquellas, se trata de una apreciación subjetiva de los accionantes, pues este estado no ha sido declarado por la autoridad jurisdiccional competente, por lo que simplemente se puede tomar como una conclusión unilateral de los tutelantes.



92



**PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

B. Sobre las pretensiones

Señora Jueza, a pesar de que ninguna de las pretensiones se formuló expresamente en contra de la Procuraduría a la que represento, me permito manifestar que me opongo a todas y cada una de ellas en razón a que mi representada no ha vulnerado derechos fundamentales de ninguna índole a los accionantes, es decir, que se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva. Así mismo, considero, de manera respetuosa, que la acción es improcedente, tal como pasaré a exponerlo. Respecto de los demás sujetos involucrados en la parte pasiva como accionados o vinculados, cada uno de ellos deberá exponer razones para el ejercicio de su derecho de defensa.

C. Improcedencia de la acción

1. Subsidiariedad

De conformidad con el numeral primero del artículo sexto del decreto 2591 de 1991, "por medio del cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", la mencionada acción no es procedente "cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".

Pues bien, tal como se devela del propio escrito de la acción de tutela, el asunto que aquí se discute ha sido ventilado en diversas instancias ante autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales. Por ello, cada una de las actuaciones en sede administrativa o jurisdiccional tiene previstas en el ordenamiento jurídico una serie de herramientas de carácter procesal, que valga decir son reglas de orden público y de obligatorio cumplimiento, al alcance de las partes para que hagan valer sus derechos.

Entonces, los accionantes debieron interponer los recursos o iniciar las acciones contempladas en la normativa colombiana, dentro de los términos legalmente previstos, para efectos de propiciar la justiciabilidad de sus derechos, pues la acción de tutela no puede convertirse en un mecanismo que propicie o promueva la "resurrección" de términos procesales para incoar acciones o para interponer recursos, pues ello daría al traste con el principio de legalidad, con la seguridad jurídica y el principio de eventualidad o preclusión procesal.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que lo atacado por los accionantes son actos administrativos que gozan de presunción de legalidad, la cual puede desvirtuarse utilizando los mecanismos (medios de control, actualmente) previstos por el legislador para tal efecto, por lo que resulta claro que los tutelantes tuvieron o tienen (depende de la caducidad de cada uno de ellos), herramientas idóneas distintas a la acción de tutela para hacer valer los derechos que crean tener a su favor.

Ahora bien, se debe analizar si realmente el decreto 902 de 2017 es aplicable a las reclamaciones que pretenden los demandados teniendo en cuenta el transcurso temporal para cada caso concreto y las reglas sobre entrada en vigencia de la ley en el tiempo que rigen en nuestro ordenamiento jurídico. Empero, en todo caso, esto debe hacerse en sede jurisdiccional de lo contencioso administrativo según las reglas previstas en la actualidad y la remisión normativa que hace





**PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

el párrafo único del artículo 39 de la norma citada, la cual implica que, evidentemente, si existe un juez natural para conocer sobre las controversias que se susciten frente a las acciones de nulidad agraria.

Además de lo anterior, queda claro de lo narrado en los hechos, que en la actualidad se encuentra pendiente un fallo en sede jurisdiccional, dentro de una acción constitucional popular que se tramita en segunda instancia ante el Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de alzada interpuesto al interior de la misma.

Todo ello permite concluir, de manera diáfana, que en efecto los accionantes han contado y cuentan con recursos ordinarios para la reclamación de sus derechos y que, por ende, declarar procedente esta acción de tutela daría al traste con el principio de subsidiariedad que la reviste.

El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, de manera reiterada y pacífica ha afirmado lo describe en los siguientes términos:

"3. Principio de subsidiariedad como requisito para que proceda la acción de tutela

La Corte Constitucional ha estudiado en varias ocasiones el principio de subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto a este medio de protección se puede acudir frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pero siempre que no exista otro medio de defensa que sea idóneo, o cuando existiéndolo no sea expedito u oportuno o sea necesario el amparo para evitar un perjuicio irremediable.

Así las cosas, antes de pretenderse la defensa por vía de tutela, el interesado debe buscar la protección a través de otros medios judiciales que resulten eficaces y que estén disponibles, por cuanto la acción de tutela no tiene la virtud de poder desplazar mecanismos previstos en la normatividad vigente. // (...).

Por último, tratándose de la existencia de un perjuicio irremediable, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar la necesidad de que se trate de un daño cierto e inminente y no emanado de conjeturas o especulaciones, sino razonablemente sustentado en la apreciación de hechos reales y apremiantes; que sea grave por su trascendencia contra el derecho fundamental que lesionaría y de urgente atención, al ser inaplazable precaverlo o mitigarlo, para evitar que se consuma una lesión antijurídica de connotación irreparable.

Se reitera así, que el carácter subsidiario del amparo constitucional impone al juez el deber de verificar con rigor que se cumplan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela, a fin de hacer un uso adecuado de este mecanismo de protección de los derechos fundamentales".

Conforme a lo dispuesto en el decreto 2591 de 1991 y la reiterada jurisprudencia de la Corte Constitucional, la acción de tutela solo procede cuando no existan otros mecanismos ordinarios para la protección de derechos fundamentales. los existentes se tornan ineficaces o se evidencie la materialización de un perjuicio irremediable.

¹ T-571 de 2015





**PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

Para el caso, los accionantes cuentan y han contado con actuaciones administrativas, recursos judiciales y medios de control ante la jurisdicción contencioso administrativo para exigir los derechos a los que creen tienen lugar, dejando entrever la existencia de otros medios ordinarios de protección y la ausencia de algún elemento probatorio que permita demostrar al despacho la existencia de un perjuicio irremediable, lo cual se deduce del simple examen cronológico que se realice de los hechos que dieron origen a la acción.

4. Inmediatez:

Como quedó sentado en los hechos, con la presente acción se pretende atacar actos administrativos producidos en los años 1994 (Resolución 4935), 2012 (Resolución 552) y 2017 (Resolución 922) expedidos, en su orden, por el antiguo INCORA, el INCODER (actualmente en liquidación) y la Agencia Nacional de Tierras.

Debe aclararse que el último acto administrativo relacionado es producto de una serie de peticiones elevadas por el apoderado actor y que fueron resueltas negativamente por parte de la ANT, pues, entre otras cosas, el "recurso de reposición, revocatoria directa, nulidad", fue presentado de manera extemporánea.

Así las cosas, se tiene que transcurrieron veintitrés años contados desde la producción del primer acto administrativo y, al menos cinco años desde el segundo de los mencionados para efectos de la interposición de acción de tutela, lo cual a todas luces supera el plazo razonable decantado por la Corte Constitucional para el cumplimiento del requisito de inmediatez.

Ahora bien, en lo que hace con el acto administrativo de 2017 (Resolución 922 de la ANT), debe analizarse que el mismo se produjo en el contexto de una petición elevada por la parte accionante a dicha autoridad, la cual, según las reglas jurídicas vigentes, debía imperativamente responder dicha petición. Sin embargo, eso no indica que el nuevo acto administrativo sirva para revivir términos prescritos o para reanudar la contabilización de términos pasados y medidos por el principio de eventualidad, pues pensar ello abriría una enorme puerta de inseguridad jurídica al pensar que cualquier petición resuelta por una autoridad se convierte en un nuevo acto administrativo que da lugar a un nuevo curso de términos de prescripción, caducidad o interposición de recursos cuando estos ya habían fenecido.

Esto no puede ser así porque la resolución de la nueva petición se pronuncia sobre otros hechos, no sobre los que ya hubiesen cobrado ejecutoria o hubiesen quedado en firme por el paso del tiempo.

Pero, si en gracia de discusión se dijera que estos términos pueden revivirse por cuenta del nuevo acto administrativo, seguiría vigente, y aún con más fuerza, el argumento expuesto en el acápite anterior, referido a la subsidiariedad de la acción, pues los tutelantes tendrían la vía judicial ordinaria a su favor y de manera expedita, para atacar el acto administrativo con el que no se encuentran de acuerdo.

Frente al principio de inmediatez, la Corte Constitucional, ha señalado:



100



PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

"La jurisprudencia constitucional ha sostenido invariablemente que la ausencia de un término de caducidad o prescripción en la acción de tutela implica que el juez no puede simplemente rechazarla en la etapa de admisión con fundamento en el paso del tiempo, sin embargo, de la misma forma ha dicho que la finalidad de la tutela como vía judicial de protección inmediata de derechos fundamentales obliga a la autoridad judicial a tomar en cuenta como dato relevante el tiempo transcurrido entre el hecho generador de la solicitud y la petición de amparo pues un lapso irrazonable puede llegar a demostrar que la solución que se reclama no se requiere con prontitud, que es precisamente el caso para el cual el mecanismo preferente y sumario de la tutela está reservado".

D. Inexistencia de vulneración de derechos por parte de la Procuraduría

1. Falta de legitimación en la causa por pasiva.

Su señoría, en el caso que se analiza, los accionantes elevan una serie de solicitudes contenidas en el acápite de "PRETENSIONES", las cuales se dirigen a diversas autoridades dentro de las cuales no se encuentra la Procuraduría General de la Nación. Ello es así, en razón a que ante esta entidad no se han adelantado trámites administrativos ni de alguna otra índole tendientes a la concesión o reconocimiento de los derechos pretendidos por los actores.

Así las cosas, surge como imposible determinar como sujeto pasivo de la presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso, a mi representada, pues esta no ha tenido bajo su conocimiento trámites que pudieran ser susceptibles de vulneración de del mencionado derecho. Distinto es que en los trámites administrativos y judiciales adelantados por los accionantes ante otros entes, esto haya ocurrido, lo cual deben probar los actores y desvirtuar las demás autoridades.

Por esta razón, no podría exigirse a la Procuraduría tal garantía y mucho menos la variación, nulidad, dejación sin efectos o cualquier otra actuación respecto del contenido de los actos administrativos o judiciales expedidos por las autoridades competente, lo cual deja la deja fuera de la relación jurídico sustancial aquí discutida.

Al respecto, la Corte constitucional ha referido:

"(...) En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la Sentencia T-416/97 I.A.P. Jose Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:

"2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado, mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso. Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo.





PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE

La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.

La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo estatuto."

Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma Corporación anotó que:

"(...) cuando del trámite procesal se deduce que el demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando no es su conducta la que inflige el daño." (...)²

2. Inexistencia de vulneración a los derechos fundamentales invocados:

Por las mismas razones antes argüidas, se puede concluir con meridiana claridad, señora Jueza, que la Procuraduría no ha realizado acto alguno de vulneración, amenaza o puesta en riesgo de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y, de contera, se debe colegir que no existe conculcación de derechos por parte de mi representada.

E. Peticiones

Conforme a lo descrito y lo que resulte probado en la acción, me permito solicitarle de manera respetuosa, declarar la improcedencia de la acción por encontrar fundada la improcedencia de la tutela en razón a la ausencia de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez invocados en la presente; en su defecto, declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva y la ausencia de vulneración de derechos fundamentales respecto de la entidad que represento, acorde con lo argumentado previamente.

² Sentencia T-1001 de 2006.



162

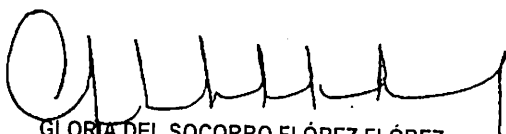


**PROCURADURÍA 19 JUDICIAL II AMBIENTAL Y AGRARIA
PARA EL DEPARTAMENTO DE SUCRE**

F. Pruebas

Me permito solicitarle, tener en cuenta las aportadas y recaudadas en la acción de tutela.

Atentamente,


GLORIA DEL SOCORRO FLÓREZ FLÓREZ
Procuradora 19 Judicial II Ambiental y Agraria
Sucre



	PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROCURADOR JUDICIAL	FECHA	2016-07-11
	SUBPROCESO DE VERIFICACIÓN DE PERSONAL	FECHA	11-07-2016
	FORMATO DE ACTA DE POSESIÓN	PÁGINA	2
	REG-GRUP-005	FECHA	11-07-2016

ACTA DE POSESIÓN N° 029

Fecha de posesión: 01-SEPTIEMBRE-2016

En la ciudad de SINCELEJO Departamento SUCRE

En el despacho de la PROCURADORA REGIONAL DE SUCRE

Se presentó GLORIA DEL SOCORRO FLOREZ FLOREZ

Quien se identifica con cédula de ciudadanía N° 30.306.225

Con el fin de tomar posesión del Cargo de PROCURADOR JUDICIAL II, Código 3PJ, Grado EC, en la PROCURADURIA 19 JUDICIAL II AGRARIA, con sede en la ciudad de SINCELEJO

Con el Decreto N° 3209 del 08-AGOSTO-2016 fue nombrado(a) en PERIODO DE PRUEBA, por un término de cuatro (4) meses.

Para el efecto se allegó Certificado de Cumplimiento de Requisitos suscrito por COORDINADOR ADMINISTRATIVO de acuerdo con el cual el (la) nombrado(a) cumple con los requisitos señalados en la Constitución Política, Ley 270 de 1997, el Decreto Ley 263 de 2000 y el Manual de Funciones vigente (Resolución 353 de 2012) para el desempeño del cargo

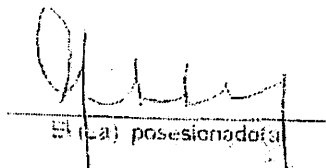
El (La) nombrado (a) manifiesto bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad o impedimento, ni con su designación se infringen los artículos 55 y 26 del Decreto Ley 262 de 2000 o 126 de la Constitución Política

Acto seguido el (la) doctor(a) MARGARITA LUCIA SARMIENTO BARRAGAN procedió a tomar el juramento de ley al (a) posesionado(a), bajo cuya gravedad prometió cumplir bien y fielmente los deberes que el cargo le impone.

La presente surte efectos fiscales a partir del 02-SEPTIEMBRE-2016

En consecuencia, se firma como aparece.

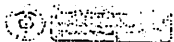

Quien posiona


El (a) posesionado(a)

Verifica y firma por la verificación cumplida antes de iniciar el procedimiento	Verifica y firma por la verificación cumplida antes de iniciar el procedimiento	Verifica y firma por la verificación cumplida antes de iniciar el procedimiento	Verifica y firma por la verificación cumplida antes de iniciar el procedimiento
---	---	---	---

ndx

3016-25
~~300~~



PROSPERIDAD
PARA TODOS

INCODER	12/05/2015 02:38:49 p.m.
Al contestar cite este No.: 20152130422	
Origen: Director Territorial Sucre	
Destino: JAIRO RODRIGUEZ SUAREZ	
Anexos:	Fol:

SINCELEJO

Señor
JAIRO RODRIGUEZ SUAREZ

REF.: RESPUESTA A OFICIO 31545 DE 29042015

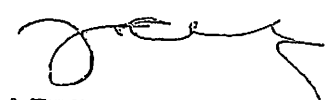
Estimado señor Rodríguez,

Atendiendo la solicitud que obedece a derecho de petición de fecha 29-04-2015 es nuestro deber informarle que en esta Institución cursa un Proceso Agrario identificado con el nombre del Predio GUARTINAJA Y EL PIMIENTO, ubicado en Jurisdicción del municipio de San Benito Abad Departamento de Sucre; este proceso se inicia a solicitud de parte y con auto de fecha 07-03-2014 NO 0008 se programa inspección de Visita Previa, la cual se realiza de forma material en el predio en fecha 11 y 13 de marzo de 2014; se realiza la resolución de inicio de procedimiento No 13068 de 10 de diciembre de 2014, la cual será debidamente notificada y publicada.

En cuanto a su petición apreciado Señor le comunico que en virtud de la ley 160 de 1994 y su decreto reglamentario No 1465 de 2013, el proceso agrario de Deslinde o Clarificación debe cumplir con unas etapas entre las cuales tenemos Previa, Probatoria y Final. Este proceso se encuentra en la etapa previa para notificaciones personales de la resolución de inicio, aun deben agotar las demás etapas de las que habla este decreto y la respectiva ley, para poder establecer si los terrenos son propiedad del estado o de particulares.

Por tanto apreciado señor Este Instituto no puede en estas condiciones hacer pronunciamientos de fondo acerca del predio antes descrito.

Atentamente,


JOSE ALFREDO JIMENEZ IBANEZ
Director Territorial Sucre
jajimenez

pv



OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SINCE
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

165

Nro Matrícula: 347-185

Impreso el 26 de Septiembre de 2017 a las 03:52:54 pm

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 347 SINCE DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SAN BENITO (ABAD) VEREDA: SAN BENITO (ABAD)
FECHA APERTURA: 26/10/1977 RADICACIÓN: 4379-77 CON: ESCRITURA DE 21/10/1977
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO** COD CATASTRAL: 706780004000000020108000000000
COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:

POR EL FRENTE CON EL CAÑO PEDRO MIGUEL; HOY RIO SAN JORGE, POR LA DERECHA, ENTRANDO CAÑO DE POR MEDIO CON FINCA DE PROPIEDAD DE JOSE MARIA GOMEZ, Y JOSE MANUEL MANJARREZ, POR LA IZQUIERDA CON FINCA DE PROPIEDAD DE LOS HEREDEROS DE NESTOR RAMOS GONZALEZ, FRANCISCO OLMOS Y CERAFIN ACEVEDO.-LA CABIDA Y LINDEROS ACTUALIZADOS SE ENCUENTRAN EN LA ESCRITURA NUMERO CIENTO TREINTA Y CUATRO (134), DE LA NOTARIA DE SAMPUES CON FECHA TRECE (13) DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL CUATRO (2004).-

COMPLEMENTACIÓN:

RECCIÓN DEL INMUEBLE Tipo de predio: RURAL

- 1) SAN BENITO ABAD 179 HECTÁREA EL PORVENIR
- 2) CAÑO LINDO

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(S) SIGUIENTE(S) MATRÍCULA(S) (En caso de Integración y otros)

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 13/11/1974 Radicación S/N
DOC: ESCRITURA 414 DEL: 12/11/1974 NOTARIA DE SINCELEJO VALOR ACTO: \$ 1.500
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 101 COMPRAVENTA - MODO DE ADQUISICION
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: CAMPO VIUDA DE GAIBAO JOSEFA I
A: IMBETT CAMPO FRANCISCO NARIÑO X

ANOTACIÓN: Nro: 2 Fecha 26/10/1977 Radicación S/N
DOC: ESCRITURA 126 DEL: 21/10/1977 NOTARIA DE SAMPUES VALOR ACTO: \$ 100.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 101 COMPRAVENTA - MODO DE ADQUISICION
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: IMBETT CAMPO FRANCISCO NARIÑO
A: GARCIA DE NASSIFF BEATRIZ LUCIA X

ANOTACIÓN: Nro: 3 Fecha 13/9/2004 Radicación 735
DOC: ESCRITURA 134 DEL: 13/9/2004 NOTARIA DE SAMPUES VALOR ACTO: \$ 20.000.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0125 COMPRAVENTA - MODO DE ADQUISICION
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: GARCIA DE NASSIFF BEATRIZ LUCIA DEL CARMEN
A: RODRIGUEZ ABAD JAIRO DE JESUS X

ANOTACIÓN: Nro: 4 Fecha 11/10/2004 Radicación 799
DOC: ESCRITURA 149 DEL: 11/10/2004 NOTARIA DE SAMPUES VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 0900 ACLARACION ESCRITURA N. 134 DE FECHA 13-09-04, POR CUANTO A LA TRADICION DEL INMUEBLE
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: GARCIA DE NASSAFF BEATRIZ LUCIA DEL CARMEN

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SINCE
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Página: 2

Nro Matrícula: 347-185

Impreso el 26 de Septiembre de 2017 a las 03:52:54 pm

"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

A: RODRIGUEZ ABAD JAIRO DE JESUS X

ANOTACIÓN: Nro: 5 Fecha 24/11/2004 Radicación 920
DOC: ESCRITURA 181 DEL: 22/11/2004 NOTARIA DE SAMPUES VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: GRAVAMEN : 0205 HIPOTECA ABIERTA DE PRIMER GRADO - GRAVAMEN
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: RODRIGUEZ ABAD JAIRO DE JESUS X
A: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

ANOTACIÓN: Nro: 6 Fecha 6/12/2004 Radicación 929
DOC: OFICIO 2087 DEL: 6/12/2004 JUZ.PROM.CTO DE SINCE VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR : 0468 DEMANDA PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTIA. - MEDIDA CAUTELAR
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: GOMEZ RODRIGUEZ RODRIGO DE JESUS
A: GARCIA DE NASSIFF BEATRIZ
A: RODRIGUEZ ABAD JAIRO X

ANOTACIÓN: Nro: 7 Fecha 18/11/2011 Radicación 2011-347-6-1656
DOC: OFICIO 857 DEL: 15/12/2010 JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE SINCE VALOR ACTO: \$ 0
Se cancela la anotación No. 6
ESPECIFICACION: CANCELACION : 0841 CANCELACION PROVIDENCIA JUDICIAL - CANCELACION DEMANDA PROCESO
ORDINARIO PERTENENCIA AGRARIA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: GOMEZ RODRIGUEZ RODRIGO DE JESUS
A: GARCIA DE NASSIFF BEATRIZ Y OTROS X

ANOTACIÓN: Nro: 8 Fecha 23/11/2012 Radicación 2012-347-6-1695
DOC: OFICIO 0601 DEL: 23/11/2012 JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE SINCE VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: MEDIDA CAUTELAR : 0468 DEMANDA EN PROCESO ORDINARIO - PERTENENCIA AGRARIA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: GOMEZ RODRIGUEZ RODRIGO DE JESUS
A: HEREDEROS DETERMINADOS E INDETERMINADOS DE JAIRO RODRIGUEZ ABAD X

ANOTACIÓN: Nro: 9 Fecha 30/4/2013 Radicación 2013-347-6-551
DOC: ESCRITURA 1045 DEL: 23/11/2007 NOTARIA UNICA DE COROZAL VALOR ACTO: \$ 18.073.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0109 ADJUDICACION EN SUCESION
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: RODRIGUEZ ABAD JAIRO DE JESUS CC# 3991740
A: RODRIGUEZ ORTEGA ARMANDO ENRIQUE X 1/4 PARTES
A: RODRIGUEZ SUAREZ JAIRO UBADEL X 1/4 PARTES
A: RODRIGUEZ SUAREZ OCTAVIO ENRIQUE X 1/4 PARTES
A: RODRIGUEZ SUAREZ EMILIA JOSEFA X 1/4 PARTE

ANOTACIÓN: Nro: 10 Fecha 26/8/2015 Radicación 2015-347-6-1106
DOC: SENTENCIA DEL: 24/10/2014 JUZGADO PROMISCOU DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION DE
SINCE VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0103 ADJUDICACION BALDIOS - PERTENENCIA AGRARIA
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SINCE
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

No 6

Página: 3

Nro Matrícula: 347-185

Impreso el 26 de Septiembre de 2017 a las 03:52:54 pm
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

DE: JUZGADO PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE DESCONGESTION DE SINCE-SUCRE
A: GOMEZ RODRIGUEZ RODRIGO DE JESUS CC# 18825037 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *10*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 No. corrección: 1 Radicación: ICARE-2015 Fecha: 21/12/2015

SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL I.G.A.C. (SNC), RES No. 8589 DE 27-11-2008

PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)

Anotación Nro: 9 No. corrección: 1 Radicación: 2013-347-3-141 Fecha: 14/5/2013

CORREGIR LA PORCION ADJUDICADA A CADA UNO. ART. 59 LEY 1579/2012

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

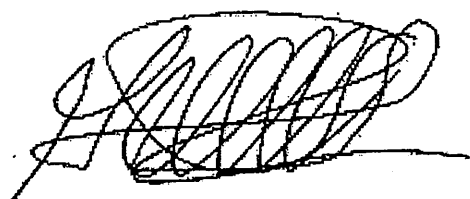
USUARIO: 63864 Impreso por: 63864

TURNO: 2017-347-1-7867 FECHA: 26/9/2017

NIS: e9ZwYMYepkBXJBqW7HHLfHvWcGDGHqZAdCCJTdxAMAO=

Verificar en: <http://192.168.76.54:8190/WS-SIRClient/>

EXPEDIDO EN: SINCE



Registrador REGISTRADOR SECCIONAL MARIA ISABEL NAVARRO SANCHEZ

107

Nro Matrícula: 347-14140

Impreso el 28 de Septiembre de 2017 a las 12:12:54 pm
"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

CIRCULO REGISTRAL: 347 SINCE DEPTO: SUCRE MUNICIPIO: SAN BENITO (ABAD) VEREDA: SAN BENITO (ABAD)
FECHA APERTURA: 21/7/2011 RADICACIÓN: 0069 CON: ESCRITURA DE 31/12/1998
ESTADO DEL FOLIO: **ACTIVO**
COD CATASTRAL: 706780004000000020195000000000
COD CATASTRAL ANT: SIN INFORMACION

DESCRIPCIÓN: CABIDA Y LINDEROS:

"LA CABIDA Y LINDEROS ACTUALIZADOS SE ENCUENTRAN EN LA ESCRITURA NUMERO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE (1267) DE LA NOTARIA DE COROZAL CON FECHA TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (1998)."

COMPLEMENTACIÓN:

COMPLEMENTACION DE LA TRADICIÓN: MARTINEZ PEREZ MIGUEL VICENTE, ADQUIRO POR COMPRA PROINDIVISA HECHA A MARTINEZ PEREZ MARIETA ISABEL Y MARTINEZ PEREZ SONIA MARIA, COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 1266 DE LA NOTARIA DE COROZAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1998. REGISTRO CON FECHA 27 DE ENERO DE 1999. PEREZ DE MARTINEZ SONIA, ADQUIRO POR COMPRA PROINDIVISA HECHA A MARTINEZ PEREZ CELSO NICOLAS, MARTINEZ PEREZ MIGUEL VICENTE, MARTINEZ PEREZ MARIETA ISABEL Y MARTINEZ PEREZ ETIEANETH SABINA COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 1266 DE LA NOTARIA DE COROZAL CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 1998. REGISTRO CON FECHA 27 ENERO DE 1999. MARTINEZ PEREZ MARTHA CECILIA ADQUIRO POR COMPRA PROINDIVISA HECHA A MARTINEZ PEREZ CELSO NICOLAS COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 342 DE LA NOTARIA DE SAMPUES CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 1997. REGISTRO CON FECHA 27 DE ABRIL DE 1998. MARTINEZ PEREZ SONIA MARIA, ADQUIRO POR COMPRA PROINDIVISA HECHA A MARTINEZ PEREZ MARIETA ISABEL, COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 343 DE LA NOTARIA DE SAMPUES CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 1997. REGISTRO CON FECHA 19 DE ENERO DE 1998. MARTINEZ PEREZ BETSAIDA ISABEL ADQUIRO POR COMPRA PROINDIVISA HECHA A MARTINEZ PEREZ ETIANETH SABINA, COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 344 DE LA NOTARIA DE SAMPUES CON FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 1997. REGISTRO CON FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 1997. MARTINEZ PEREZ CELSO NICOLAS, MARTINEZ PEREZ ATIANETH SABINA, MARTINEZ PEREZ MARIETA ISABEL Y MARTINEZ PEREZ MIGUEL VICENTE, ADQUIRIERON EN COMUNIDAD POR COMPRA HECHA A BARBOZA DE ESCUDERO SILVIA ANDREA COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 289 DE LA NOTARIA DE COROZAL CON FECHA 14 DE MAYO DE 1984. REGISTRO CON FECHA 29 DE MAYO DE 1984. BARBOZA DE ESCUDERO SILVIA ANDREA ADQUIRO POR COMPRA HECHA A MARTINEZ SERPA CELSO MANUEL COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 286 DE LA NOTARIA DE COROZAL CON FECHA 25 DE ABRIL DE 1983. REGISTRO CON FECHA 27 DE ABRIL DE 1983. MARTINEZ SERPA CELSO MANUEL ADQUIRO POR COMPRA HECHA A MARTINEZ SERPA ANIBAL COMO CONSTA EN LA ESCRITURA NUMERO 385 DE LA NOTARIA DE COROZAL CON FECHA 16 DE OCTUBRE DE 1967. REGISTRO CON FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 1968.

DIRECCIÓN DEL INMUEBLE Tipo de predio: RURAL

1) FINCA "EL CHARCO" 120 HECT. 2.250 MTS.2

MATRÍCULA ABIERTA CON BASE EN LA(s) SIGUIENTE(S) MATRICULA(S) (En caso de Integración y otros)

ANOTACIÓN: Nro: 1 Fecha 27/1/1999 Radicación 0069
DOC: ESCRITURA 1267 DEL: 31/12/1998 NOTARIA UNICA DE COROZAL VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: OTRO : 160 DIVISION MATERIAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: MARTINEZ PEREZ CELSO NICOLAS CC# 92496707
DE: MARTINEZ PEREZ BETSAIDA ISABEL CC# 64558977
DE: MARTINEZ PEREZ MARTHA CECILIA
DE: PEREZ DE MARTINEZ SONIA CC# 22862566
A: MARTINEZ PEREZ MIGUEL VICENTE CC# 92506643 X

ANOTACIÓN: Nro: 2 Fecha: 16/6/2008 Radicación 583

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SINCE
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

Página: 2

Nro Matrícula: 347-14140

Impreso el 28 de Septiembre de 2017 a las 12:12:54 pm

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página

DOC: ESCRITURA 149 DEL: 12/6/2008 NOTARIA UNICA DE SAMPUES VALOR ACTO: \$ 0
ESPECIFICACION: GRAVAMEN : 0205 HIPOTECA CON CUANTIA INDETERMINADA - PRIMER GRADO
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: MARTINEZ PEREZ MIGUEL VICENTE CC# 92506643 X
A: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

ANOTACIÓN: Nro: 3 Fecha 19/5/2015 Radicación 2015-347-6-595
DOC: ESCRITURA 120 DEL: 13/5/2015 NOTARIA UNICA DE SAMPUES VALOR ACTO: \$ 14.717.000
ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION : 0112 ADJUDICACION LIQUIDACION SOCIEDAD CONYUGAL
PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto)
DE: ROMERO FLOREZ SANDRA PATRICIA CC# 57428971
A: MARTINEZ PEREZ MIGUEL VICENTE CC# 92506643 X

NRO TOTAL DE ANOTACIONES: *3*

SALVEDADES: (Información Anterior o Corregida)

Anotación Nro: 0 No. corrección: 1 Radicación: 0069 Fecha: 21/7/2011
SE CERO EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA POR EQUIVOCACION
Anotación Nro: 0 No. corrección: 2 Radicación: 2012-347-3-205 Fecha: 21/8/2012
CORREGIR UBICACIÓN DEL PREDIO. ART. 35 DECRETO 1250/70
Anotación Nro: 0 No. corrección: 3 Radicación: ICARE-2015 Fecha: 21/12/2015
SE INCLUYE NUEVO NUMERO PREDIAL DE 30 DIGITOS SUMINISTRADOS POR EL I.G.A.C. (SNC), RES No. 8589 DE 27-11-2008
PROFERIDA POR LA S.N.R (CONVENIO IGAC-SNR DE 23-09-2008)
Anotación Nro: 1 No. corrección: 1 Radicación: 0069 Fecha: 21/7/2011
SE CERO POR EQUIVOCACION EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA
Anotación Nro: 2 No. corrección: 1 Radicación: 583 Fecha: 21/7/2011
SE CERO POR EQUIVOCACION EL FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA

FIN DE ESTE DOCUMENTO

El interesado debe comunicar cualquier falla o error en el registro de los documentos

USUARIO: 63864 impreso por: 63864
TURNO: 2017-347-1-7949 FECHA: 28/9/2017
NIS: e9ZwYMYepkBUQQNr4GI4pnvWcGDGHqZAHU4ChohzsqA=
Verificar en: <http://192.168.76.54:8190/WS-SIRClient/>
EXPEDIDO EN: SINCE

OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE SINCE
CERTIFICADO DE TRADICIÓN
MATRÍCULA INMOBILIARIA

108

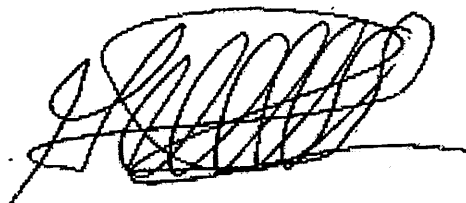
Página: 3

Nro Matrícula: 347-14140

Impreso el 28 de Septiembre de 2017 a las 12:12:54 pm

**"ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE
HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION"**

No tiene validez sin la firma del registrador en la última página



El registrador REGISTRADOR SECCIONAL MARIA ISABEL NAVARRO SANCHEZ

Superintendencia
de Notariado
y Registro